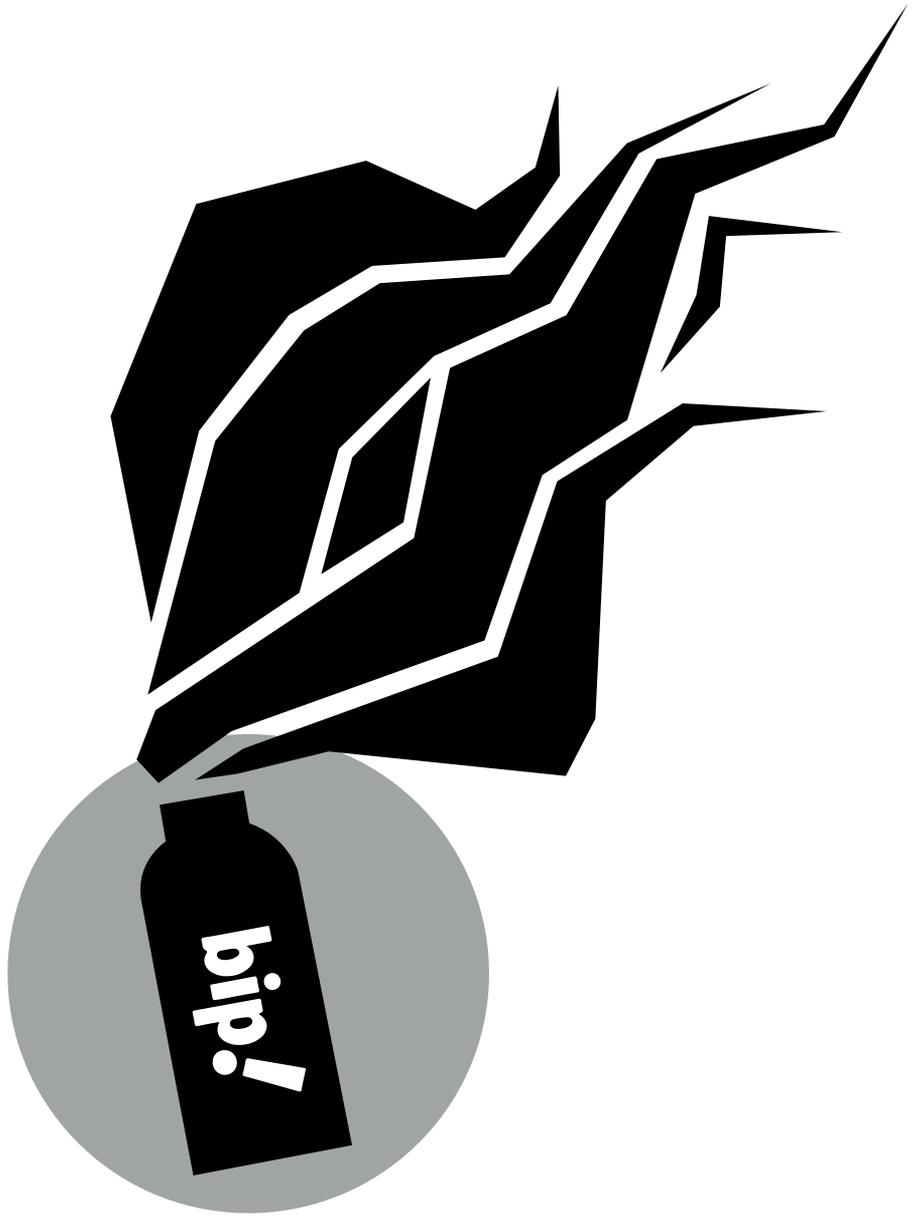


ROSA

#02 | otoño 2020 | LA REVUELTA



ROSA

#02 | otoño 2020 | LA REVUELTA

ROSA

revista de izquierda de periodicidad semestral publicada en
Santiago de Chile. | www.revistarosa.cl

ISSN 2452-5634 (versión impresa)

ISSN 2452-4824 (versión digital)

Comité Editor | Andrés Estefane J., Luis Thielemann H.,
Carolina Olmedo C., Pablo Contreras K., Nicolás Román,
Cristóbal M. Portales.

Edición y producción | revista ROSA.

Diseño y diagramación | LTH.

Fotografías de este número | César Sanhueza S.

Impresión y apoyo | LOM ediciones.

#2 | Otoño 2020

Todos los contenidos bajo licencia (CC BY-NC-ND 4.0).

[@revista_rosa/](#) [f/ROSAUnarevistadelzquierda/](#) [©/Revista_rosa/](#)

ÍNDICE

- 11** Editorial
- 16** La revuelta de octubre y después: Itinerario de un cambio inconcluso / Felipe Ramírez
- 30** La revuelta popular en un territorio periférico: el caso de Pudahuel Sur / Cristián Matamoros
- 54** ¿De la revuelta a un nuevo pacto transicional? Clase, sindicatos y política / Camilo Santibáñez
- 74** Notas feministas de una revuelta popular con potencia antineoliberal / Daniela López L., Francisca Millán Z. & Ana Paula Viñales
- 86** El estallido chileno y las teorías de la crisis capitalista / José Miguel Ahumada
- 110** La ciudad como sistema / Valentina Saavedra & Andrés Fielbaum
- 126** Cien años de Presos Políticos en Chile: desde los subversivos de 1920 a la actual Revuelta / Nicolás Acevedo Arriaza
- 144** Postdictadura e impunidad: las memorias de las víctimas de la revuelta / Karen Glavic
- 158** ¿Hay futuro para los partidos después del estallido... y viceversa? / Francisco Figueroa C.







Falta calle...

[Escribí Gangraena] por el orgullo y la vanidad de mi propia mente, por el desprecio que suponía que hombres sencillos e ignorantes buscaran el conocimiento de otra manera que no fuera siendo dirigidos por los que somos instruidos; por el vil temor de que, si empezaban a enseñarse los unos a los otros pudiéramos [...] perder nuestra autoridad de ser jueces exclusivos en materia de doctrina y disciplina, con lo que nuestros predecesores dominaron los Estados y los reinos; o, en última instancia, por temor de que pudiéramos perder nuestros beneficios y nuestro abundante sustento debidos a los diezmos [...]

Yo veía venir todo esto junto con esa libertad que los hombres humildes se tomaban para juzgar y examinar las cosas [...]

William Walwyn (1646)

Sin calle no hay oposición. Se podrían plantear varias precisiones, pero a la hora del balance no hay cómo esquivar este bulto. Basta mirar lo que ha sucedido desde el tiempo que abrió la pandemia para constatar que sin ese motor colectivo prácticamente no hay guion (y lo que hay se desentiende de quienes debiera priorizar). No estamos suponiendo que ese algo llamado oposición deba operar a un ritmo ajeno a la actual crisis, como si pudiera ignorar la relación entre lo sanitario, lo institucional y lo económico. Al contrario. En esta hora crítica es cuando más se necesita de una propuesta popular inteligente e insumisa, una que llevando el pulso de la crisis sea capaz de sacar ventajas concretas –y no meramente simbólicas– del desorden hegemónico. Es ahora cuando cobra pleno sentido la indisposición frente a los engrudos nacionalistas y las fantasías de comunidad que siempre buscan ahogar las disidencias en épocas decisivas. Ahora y no en otro momento es cuando debiéramos probar el espesor político de nuestras estéticas, siempre que no sean mera impostura. ¿Seguimos en el páramo? ¿Tenemos más y mejores herramientas que hace unos meses?

No se trata de pedir imposibles. La historia, siempre inoportuna, cuenta que han existido oposiciones robustas en momentos excepcionales. Dice algo peor. Dice que hay oposiciones que han triunfado en condiciones tanto o

más adversas. Triunfan por razones diversas, pero las une una disposición política que conjuga dos tiempos: desafección por lo circundante y hambre por el porvenir. Habría que preguntarse en qué otro momento de la historia del neoliberalismo hemos tenido razones más concretas, palpables y amenazantes para canalizar políticamente la desafección por lo que nos rodea. Para ver esto hay que sacudirse. Los medios dominantes y la intelectualidad que le acompaña se esfuerzan en repetir la argumentación dizque histórica con que se blinda la acción gubernamental en la emergencia: esta sería la peor crisis sanitaria y la peor recesión económica de los últimos cien años. Presentan el acontecimiento agotado en sí mismo, consumido en su propia espectacularidad, atado a una cronología propia de las escatologías cívicas para pedir lo obvio, que extendamos los sacrificios poniendo a prueba el patriotismo. Pero esta no es una crisis secular. Esta es una crisis sanitaria que está teniendo lugar bajo una forma de orden con una historia definida, concreta, y que en su despliegue (es decir, para ser orden) debió desterrar toda capacidad de respuestas colectivas para la vida normal y sus excepciones. Aunque suene insultante, esta no es una crisis enviada por los dioses para probar la consistencia de nuestro sentido de humanidad o nuestro talante republicano, sino una crisis sanitaria cuyos efectos dejan en evidencia (como si algo así nos faltara) la incompatibilidad del orden circundante con la posibilidad misma de la vida. Con esa constatación deberíamos tratar el hambre que nos empuja al futuro.

Esa es la discusión en la que estábamos desde hace décadas y a la que pusimos urgencia hace seis meses. No hay razones para aceptar que estas preguntas deban diferirse o buscar un mejor momento. Eso es rendirse al sentido escatológico de la actual crisis o sostener, como se repite en otros círculos, que estamos en un simple entretiempos y que la pesadilla terminará tarde o temprano. Ninguna de esas lecturas del tiempo nos sirve. Por eso este número está dedicado a la revuelta y a la necesidad de seguir trabajando sobre las grietas que abrió. Sobre todo ahora, que la escatología presenta toda parcialidad opositora como anti-cívica, despiadada e inhumana. Sobre todo ahora, cuando echamos en falta ese ritmo urgente e incómodo que imponía la movilización callejera y cuya ausencia explica que lo poco que tenemos termine consumido en los pasillos de una política que no se atreve a ser otra política.

En tiempos de datos equívocos, tenemos uno cierto: cualquier otra política no puede prescindir del empuje de las masas que están dispuestas a la lucha. No tienen plan, no son sofisticadas, no son altruistas ni pasaron por escue-

las de formación. Pero esas son las masas que sostuvieron octubre y que en los últimos meses vieron desnudos los resortes últimos de su subordinación. Nadie se ha transformado del todo, pero hoy sabemos cosas que desconocíamos. Es sobre esa desafección que debemos trabajar, repitiéndonos por enésima vez que en ese transcurrir desprolijo, rugoso, opaco y áspero que es la historia, no hay lugar para las formas puras ni momentos perfectos. En la permanente insatisfacción que alimenta nuestras subjetividades neoliberales, perdimos de vista que no puede haber mejor noticia que la existencia de un colectivo dispuesto a luchar por una mejor existencia. Por eso este número está dedicado a la revuelta.

Durante estas semanas pensaremos más de lo acostumbrado en la inusual forma de conjugación que nos impuso la epidemia. Sí, deberíamos estar hablando de los resultados del plebiscito y expuestos a cualquiera de las tormentas que seguiría a lo que iba a ser la jornada electoral más decisiva desde los gobiernos de la Concertación. Parece una mala broma, pero cuando se impuso lo que hace unos años parecía imposible, advino lo impensable. Con todo, en ese simulacro de nostalgia que nos inundará por estos días debemos renunciar al espejismo y aferrarnos a la inteligencia ganada en los últimos meses. Nos interesa el itinerario constituyente no porque sea la respuesta republicana y democrática a una impugnación que se mostró insolente, desbordada e inoportuna. Bien sabemos cuánto y cómo se paga ese tipo de excen-tricidades de salón. Hoy que no sentimos la urgencia que instalaron las masas movilizadas, podemos ver con nitidez el vértigo que imponían y cuánta falta nos hace ese mismo vértigo o lo que se parezca. No sabemos todavía de qué forma la pandemia modificará la expresión de esas fuerzas. Mientras no lo sepamos, debemos seguir apostando a la articulación y rechazar el ensimis-mamiento del populismo mediático. Seguir preparándonos para ir por todo y echar mano a todos los recursos disponibles. No se pelea una nueva consti-tución solo para que lleve la propia firma. No basta con el consuelo de que el texto se redacte de forma participativa. La única constitución que nos sirve es la que eleva la vida presente y garantiza la futura.





LA REVUELTA DE OCTUBRE Y DESPUÉS: ITINERARIO DE UN CAMBIO INCONCLUSO

/ *Felipe Ramírez*

Desatado el 18 de octubre, la respuesta del conjunto de fuerzas defensoras del *status quo* fue la natural: a una fuerte represión policial, que incluyó el despliegue de efectivos de FF.EE. al interior de las estaciones de metro, se agregó un fuerte despliegue moralizante en los medios de comunicación de masas criminalizando y tratando de deslegitimar la protesta social. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron fútiles. En lugar de disminuir, las protestas aumentaron en masividad, número y radicalidad, pagando los costos de las malas decisiones del gobierno los manifestantes, y los trabajadores de Metro.



Hay pocas dudas de que el proceso abierto el 18 de octubre del año 2019 ha sido inédito en nuestro país, dejando fuera de juego a la mayoría de las categorías y conceptos que utilizamos normalmente para analizar la realidad y la historia de la lucha de clases en Chile.

Revolta, revolución, levantamiento, insurrección, varias han sido las palabras que han intentado plantear el fondo de lo que ha azotado esta esquina de Sudamérica haciendo saltar por los aires los tabúes, las líneas rojas, los límites y las barreras establecidas por la transición, y el “acuerdo social” establecido entre la Concertación y las fuerzas civil-militares que sustentaron la dictadura.

En los días que iba a ocurrir un histórico plebiscito que permitiría, con sus limitaciones y contradicciones inherentes a todo proceso político de estas características, que por primera vez las fuerzas populares sean protagonistas, o al menos parte activa de la elaboración de una Constitución en Chile, es bueno recordar un poco cómo llegamos a donde estamos, para vislumbrar por dónde podemos continuar.

18 de octubre: el día en que todo fue posible

Durante semanas -más bien meses- los estudiantes secundarios, en particular del Instituto Nacional, se habían enfrentado con Carabineros en una lucha desigual y con altos niveles de violencia policial, en el marco de una movilización que buscaba recuperar las banderas de la defensa de la educación pública, en un último estertor de aquellas periódicas revueltas que se sucedían al menos desde el año 2001.

El escenario político del país no guardaba grandes sorpresas: una derecha a la defensiva que trataba de sacar adelante un gobierno que se sentía permanentemente bajo asedio, una extrema derecha de raigambre proto-fascista/ultraconservadora que pretendía sobrepasar al Ejecutivo por el costado, una centroizquierda en proceso de reorganización tras la derrota de la Nueva Mayoría, y una izquierda dividida entre un PC que buscaba forjar un espacio de alianza propia, y un Frente Amplio en acelerado proceso de institucionaliza-

ción -y de pérdida de capacidad de influencia, y sustento político en las luchas de masas-.

En ese escenario nadie imaginaba que algo como lo que sucedió podría pasar. Al contrario, todas las miradas se concentraban en las futuras elecciones municipales y de gobernadores de 2020: la generación de alianzas y listas, la definición de candidatos, ahí estaban las prioridades. Incluso la lucha intermitente de los secundarios estaba afirmada más en la crítica a la represión que sufrían, que al levantamiento de una agenda o un petitorio concreto que articulara asambleas y demandas.

La chispa vendría de un lugar irónicamente insólito para una izquierda elitizada: el alza en 30 pesos del transporte público en hora punta, y la respuesta de los secundarios mediante la evasión masiva del pago del pasaje en el Metro de Santiago. Retornaba la lucha económica en todo su esplendor mediante formas novedosas de lucha que no habían sido aplicadas en las décadas anteriores.

La respuesta del conjunto de fuerzas defensoras del status quo fue la natural: a una fuerte represión policial, que incluyó el despliegue de efectivos de FF.EE. al interior de las estaciones de metro, se agregó un fuerte despliegue moralizante en los medios de comunicación de masas criminalizando y tratando de deslegitimar la protesta social. Sin embargo, estos esfuerzos resultaron fútiles. En lugar de disminuir, las protestas aumentaron en masividad, número y radicalidad, pagando los costos de las malas decisiones del gobierno los manifestantes, y los trabajadores de Metro.

Tal como lo comenté en una columna en la edición digital de ROSA¹, el 18 de octubre, a pesar de la violencia desatada durante el día, el cierre del metro y la obligada caminata que debimos realizar miles de trabajadores en el centro de Santiago hacia nuestros hogares, la sensación general no fue de rabia contra los manifestantes, sino contra el gobierno, incapaz de derogar un alza que se interpretó como un atentado a la estabilidad de las familias trabajadoras. También contra Carabineros, asumida como una fuerza policial deslegitima-

1 “Evasión En El Metro ¡Es La Lucha De Clases, Estúpido!”, 19 de octubre, por Felipe Ramírez, Revista Rosa.

da por los graves casos de corrupción, por la realización de montajes, y en proceso de descomposición interna, con claros indicios de insubordinación y quiebre de la línea de mando.

Los días siguientes verían derrumbarse muchas de las ilusiones liberales que sustentaban la idea de una democracia que podía estar eternamente ajena a los vaivenes de la lucha de clases. A la creciente protesta de masas, que dirigió su rabia contra bancos, grandes tiendas, supermercados, automotoras,

“

[...] el 18 de octubre, a pesar de la violencia desatada durante el día, el cierre del metro y la obligada caminata que debimos realizar miles de trabajadores en el centro de Santiago hacia nuestros hogares, la sensación general no fue de rabia contra los manifestantes, sino contra el gobierno, incapaz de derogar un alza que se interpretó como un atentado a la estabilidad de las familias trabajadoras.

”

aseguradoras y estaciones de metro; el Estado, la derecha y sus intelectuales respondieron doblando la apuesta decretando el Estado de Emergencia en diferentes regiones, desplegando a las FF.AA. para “restaurar el orden”, y calificando al conjunto de fuerzas sociales movilizadas, mayoritariamente del amplio espectro de sectores populares, como “delincuentes que no respetan nada”.

Este nuevo escenario permitió un salto importante en la discusión política: del alza del transporte rápidamente se pasó a cuestionar el conjunto del modelo económico legado por la transición pactada, orientación cristalizada en la consigna “no son 30 pesos, son 30 años”, que criticaba no sólo al gobierno de Sebastián Piñera, sino también a la labor realizada por la Concertación.





Se instaló una “agenda social” que englobó demandas previsionales, de salud, educación, de trabajo entre otras áreas de la vida, permitiendo además que un referente como “Unidad Social” -formado por sindicatos y organizaciones sociales de base- se instalara como vocería formal de una movilización absolutamente inorgánica.

Mientras los muertos y las acusaciones de abusos a los DD.HH. por parte sobre todo de Carabineros se acumulaban, el gobierno estableció una retórica donde calificó que el país se encontraba “en guerra” con un “enemigo poderoso”, impulsando una polarización que permitió sentar las bases de un amplísimo bloque crítico. Este, además de las grandes protestas en la “Plaza Dignidad” (como se denominó el sector de la estación Baquedano), contó con inéditos esfuerzos movilizatorios en lugares de sectores acomodados: Plaza Ñuñoa, Plaza Pedro de Valdivia, Avenida Colón en Las Condes fueron testigos de cacerolazos, cortes de calle y protestas como nunca, llegando al extremo de realizarse marchas apoyando las demandas sociales en un lugar como Vitacura. Incluso el mismo general Javier Iturriaga del Campo, quien ostentaba el mando del Ejército en la Región Metropolitana el 21 de octubre, se desmarcó públicamente de las palabras del Presidente asegurando que él “no estaba en guerra con nadie”. Vale decir que nunca volvió a ejercer una vocería pública mientras duró el Estado de Emergencia, levantado el 27 de octubre.

La presión en las calles se volvía insoportable para el gobierno, que debió enfrentar el 25 de octubre una gigantesca concentración en Santiago que reunió a más de millón y medio de personas en Plaza Dignidad demandando el retorno de los militares a sus cuarteles, y la convocatoria a una Asamblea Constituyente. A esas alturas la necesidad de cambiar la Constitución de 1980, legada por la dictadura, era un objetivo más que legitimado, por lo que el gobierno intentó por todos los medios resquebrajar el campo crítico. Radicalizó su discurso sobre la delincuencia violentista, impulsó una agenda criminalizadora de la protesta social, presentó una “agenda social” que profundizaba el rol subsidiario del Estado, e hizo la vista gorda ante los abusos a los DD.HH.,

en un esfuerzo por amedrentar a los movilizados, tal como analicé en Rosa previamente².

Así fue como llegamos a otro importante punto de inflexión: quizás las 72 horas más importantes de esta etapa, aquellos días que fueron entre el 12 de noviembre con la Huelga General convocada por el Bloque Sindical de Unidad Social, y el 15 de noviembre, cuando en el Parlamento diferentes partidos, que representaban casi todo el arco político con representación en el Congreso, firmaron un “Acuerdo por la paz” que buscó generar un itinerario constituyente. Si en la primera fecha fueron los sindicatos los que marcaron la pauta, en el segundo fueron los partidos quienes tomaron la batuta. Sin embargo, ni unos ni otros fueron capaces de trasladar al acuerdo la nueva correlación de fuerzas existente, quizás porque ninguno tenía la mínima claridad respecto a preguntas clave como qué tipo de Constitución queremos, cómo se genera y desarrolla una Asamblea Constituyente, etc. Nuevamente regalamos la iniciativa al adversario³.

La resaca del acuerdo: la lucha por el apruebo y la disgregación de la izquierda

El despertar del 16 de noviembre fue de dulce y agraz. Aunque muchos quedaron satisfechos por la existencia de un compromiso que permitiría en un plebiscito terminar con la Constitución de Jaime Guzmán y Pinochet, otros tantos se enfurecieron por las condiciones acordadas con los partidos de la derecha. Las consecuencias fueron graves y han sido difícilmente procesadas por la izquierda: el bloque crítico se disgregó ante las desavenencias, sus partidos se quebraron, la legitimidad que tenía Unidad Social como referente unitario se vio dañada, debilitándose notablemente su capacidad de convocatoria a nivel nacional, y de una u otra manera el eje se desplazó de la lucha ca-

2 “Terminar Con La Constitución De 1980: El Desafío De Ir Más Allá De La Revuelta”, 08 de noviembre, por Felipe Ramírez, Revista Rosa.

3 “La Izquierda Tras El Acuerdo: Recuperar La Iniciativa, Duplicar El Trabajo”, 18 de noviembre, por Felipe Ramírez, Revista Rosa.

llejera y la movilización social, a la disputa parlamentaria por las condiciones del proceso constituyente.

Muchos resintieron la pérdida de protagonismo de los sectores populares y abandonaron poco a poco las calles, desgastados por semanas de durísima represión, y muchísimos mutilados o asesinados por la policía. Un sector no despreciable continuó -hasta mediados de marzo, cuando el reciente estado de excepción lo impidió- con el ritual de reclamar Plaza Dignidad como



La otra expresión de masas que revitalizó las movilizaciones al retorno de las vacaciones de verano fue el feminismo, con una inusitada mas no inesperada demostración de fuerza y masividad el pasado 8 de marzo, con alrededor de un millón de mujeres replegando el sector de la Alameda en Santiago. Si alguien tenía dudas con respecto a la fuerza del feminismo, en toda su pluralidad, aquella jornada dejó en claro que la desigualdad de género, la violencia machista y los privilegios propios del patriarcado tienen en frente a un enemigo formidable, que cada día se hace más fuerte y decidido.



espacio de protesta, sobre todo los viernes cuando miles se reunían periódicamente a mantener la llama de la revuelta viva. Hay confianzas que se quebraron, ilusiones que se desvanecieron, abriéndose una herida difícil de subsanar en el corto plazo entre el activo social movilizado desde el 18 de octubre, y los partidos y organizaciones que en teoría los representan en las instituciones del Estado.

A pesar de que el calendario avanzó rápidamente hacia las vacaciones, fueron los estudiantes secundarios quienes de manera más resuelta intentaron volver a poner sobre la mesa las demandas de la agenda social en su movilización contra la PSU. Aprovechando un inexplicable error por parte del MINEDUC -la decisión de acabar con esta prueba como mecanismo de acceso a la Universidad ya estaba tomada- reinstalaron la crítica a una educación que sigue contando con un importante sesgo de clase a la hora de dirimir qué tipo de educación recibirá cada persona dependiendo de sus condiciones socioeconómicas.

Si bien el proceso de entrada a la Educación Superior se realizó de todas maneras, los secundarios demostraron ímpetu y valentía, aún cuando hubiera falta de un mayor arraigo de masas, y claridad programática respecto a las demandas del sector, lo que continúa hasta este minuto. El contraste con Unidad Social -prácticamente desaparecida del mapa y consumida por disputas internas- y con los sindicatos en particular, es grande. A pesar de no existir ninguna respuesta a la agenda social planteada en un inicio, las organizaciones de masas de los trabajadores por definición no han podido recuperar la fuerza que ostentaron antes del acuerdo de noviembre.

La otra expresión de masas que revitalizó las movilizaciones al retorno de las vacaciones de verano fue el feminismo, con una inusitada mas no inesperada demostración de fuerza y masividad el pasado 8 de marzo, con alrededor de un millón de mujeres repletando el sector de la Alameda en Santiago. Si alguien tenía dudas con respecto a la fuerza del feminismo, en toda su pluralidad, aquella jornada dejó en claro que la desigualdad de género, la violencia machista y los privilegios propios del patriarcado tienen en frente a un enemigo formidable, que cada día se hace más fuerte y decidido.

El telón de fondo de estas masivas pero sectoriales expresiones de lucha estuvo marcado por la fecha original del plebiscito constitucional, el 26 de abril. La variedad de comandos por el Apruebo formados hasta esta edición -al menos dos con expresión nacional- demuestran que la dispersión de la izquierda y del bloque social crítico continúan sin mucho remedio. Tal vez, la

postergación del plebiscito para octubre -producto de la pandemia-, pueda mover algo las fichas hacia la unidad.

A meses del estallido social, lo cierto es que es poco lo que hemos ganado hasta el momento, aunque estamos todavía a la expectativa de lo que pueda suceder en el primero de los dos plebiscitos que se deberán realizar para tener una nueva Carga Magna. Lo que si tenemos son más muertos por la represión, más mutilados, y más leyes represivas que intentan a la desesperada frenar un proceso que avanza inexorable, independiente de las tensiones que lo golpean. Todo aquello no ha mejorado un ápice desde el inicio de la Pandemia, sino que se ven signos de empeoramiento. El desafío abierto es cómo enfrentamos el proceso constituyente mientras a la par enfrentamos la crisis económica en ciernes que se gesta a nivel global por la expansión del coronavirus. ¿Pagaremos nuevamente los trabajadores la crisis? ¿Seremos capaces de elaborar una Constitución que supere el Estado subsidiario y articule un nuevo modelo económico? Hay muchos debates que dar, muchas interrogantes que responder, muchas luchas que dar aún. Adelante.

Felipe Ramírez, periodista y presidente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad de Chile, servicios centrales. Integrante del Frente Amplio.







LA REVUELTA POPULAR EN UN TERRITORIO PERIFÉRICO: EL CASO DE PUDAHUEL SUR

／ *Christián Matamoros*

El día martes 7 de enero, mientras se realizaban manifestaciones contra la rendición de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), un joven fue atropellado por un radiopatrullas de Carabineros en las inmediaciones del Colegio Santiago Pudahuel. Lo que ocurrió en el sector sur de esta popular comuna podría haber pasado como un hecho más de los miles de actos represivos, pero se tornó una radical jornada de protesta de al menos una semana, inusual a nivel general, pero en sintonía con muchos actos radicalizados que vienen sucediéndose al interior de la diversa revuelta popular que sacude al país desde hace 3 meses. Analizar el contexto en el que se produjo esta protesta, la extensión y masividad de ella, es el objetivo del presente artículo.

*Este artículo fue publicado en la edición digital de revista ROSA, el 10 de enero de 2020.

El Territorio

La zona denominada Pudahuel Sur no corresponde al perfil clásico de las poblaciones “combativas”, formadas mayoritariamente en los años previos al golpe de Estado de 1973. No se asocia al mapa clásico de las protestas de los 80, no aparece en el teatro de operaciones de la rebelión popular contra Pinochet. Pertenece sí a la zona poniente de Santiago, bastión histórico de los sectores populares y las fuerzas de izquierda. Esto pues el territorio fue una zona agrícola perteneciente a la antigua Barrancas, comuna que representó un terreno especialmente fértil para la izquierda, por las tomas de terreno inauguradas con Herminda de la Victoria en 1967, ubicada en la actual Cerro Navia, con una fuerte presencia del Partido Comunista. Además, el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) también tuvo una destacada presencia en el comando comunal Barrancas durante la Unidad Popular y en el paro comunal de Pudahuel en 1984.

Durante gran parte del siglo XX el territorio de lo que hoy es Pudahuel Sur fue parte del antiguo fundo Santa Corina, que se iniciaba en la Avenida San Pablo, donde estaba la casona patronal (actual Municipalidad de Pudahuel) y se extendía hasta el Canal Ortuzano, que actualmente divide Pudahuel de la comuna de Maipú. Durante los años de la Unidad Popular una parte del fundo fue tomada por “sin casa”, mientras que otra experimentó un proceso de reforma agraria. Los terrenos ubicados al sur de la ruta 68 continuaron siendo parcelas hasta fines de los años 80. Desde la mencionada ruta 68, hasta Américo Vespucio por el poniente, el canal Ortuzano por el sur y Av. Las Torres por el oriente, es lo que hoy se conoce como Pudahuel Sur; territorio donde solo en 1989 comenzaron a aparecer las primeras poblaciones y hoy residen más de 120 mil personas.

Primeramente, se desarrollaron dos núcleos habitacionales, que con el tiempo dieron vida a la construcción de viviendas en casi toda el área del territorio. Uno se ubicó hacia el oriente, al sur de Laguna Sur, donde se construyó la villa Pedro Prado (1990) y luego la Marta Brunet y la villa Pajaritos, entre otras. El otro núcleo se asentó hacia el poniente de Avenida La Estrella, donde se construyeron las villas Carrera Pinto, Comercio, Colón y Estrella

del Sur, entre otras. Estas primeras poblaciones fueron representativas de la rápida expansión habitacional que se experimentó a inicios de los años 90 sobre un suelo, hasta hace poco, destinado a labores agrícolas. Estos primeros núcleos acogieron principalmente a población obrera y popular, identificada con los quintiles más precarizados (D y E). Nuevas villas se fueron sumando en los años siguientes, las que recibieron a una población con un componente de clase similar; aunque también otras acogieron a familias trabajadoras de estratos medios bajos (C2 y C3), más similares a villas populares de comunas como Maipú o La Florida.

Todas las familias que llegaron al territorio debieron sosegar su felicidad por el acceso a una vivienda propia con condiciones deficientes, especialmente en lo referido a conexión vial. El territorio estaba encajonado, con escasa vinculación con la zona norte de la comuna y con severas dificultades para conectarse al centro de Santiago. Así, los habitantes de las poblaciones del sector suroriente preferían buscar conexión caminando hasta Avenida Pajaritos, mientras los del sector de Avenida La Estrella debían entablar una cruzada por Américo Vespucio que los dejaría en San Pablo y de ahí embarcarse a sus destinos finales. Con el correr de los años apareció el primer consultorio y, en 1996, la subcomisaría, foco central de los enfrentamientos de los últimos días.

Esta fuerte explosión demográfica fue prácticamente única en la ex Barrancas, pues las zonas de Pudahuel Norte y Lo Prado ya se encontraban altamente pobladas desde las décadas anteriores; mientras que en Cerro Navia las construcciones de los 90 fueron muy minoritarias, misma situación en las comunas colindantes: Estación Central y Quinta Normal. La irrupción de Pudahuel Sur le entregaba un componente juvenil a este sector de la capital, el que había estado compuesto mayoritariamente por familias formadas a fines de los 60. Al mismo tiempo, provocó que en pocos años la comuna casi duplicara su población, potenciada por la nueva normativa de densificación y el bajo valor del uso del suelo del lugar. Así, Pudahuel se transformó en la 4ta comuna de la región metropolitana con mayor número de proyectos de vivienda básica en la década de los noventa¹, prácticamente todos en Pudahuel

1 Felipe Seguel, Ciudad en post-dictadura: Políticas públicas de vivienda

Sur. Esto fue consecuencia de las políticas implementadas durante esos años, la de las casas COPEVA, y la nueva normativa de densificación que favoreció a empresarios habitacionales vinculados principalmente a la Democracia Cristiana, como Edmundo Pérez Yoma.

Todas estas características harían pensar que Pudahuel Sur siguió el camino de despolitización por la que transitaron la mayor parte de las poblaciones construidas en el Chile de los 90, donde no se lograron reconstituir las experiencias organizativas de las décadas anteriores. Según Seguel, entre los principales factores que confluyeron durante la década, y que permiten entender la relación entre la política y las nuevas poblaciones, estuvo el consumismo que provocó des-ideologización y des-movilización. Es decir, conformidad con el modelo de desarrollo y el consenso respecto al manejo económico de los gobiernos de la Concertación². Esto se ve reafirmado en la existencia de dos de esas características del periodo que sí emergieron en el territorio de Pudahuel Sur. La primera fue la presencia del narcotráfico -el que no respondía a los tradicionales códigos del hampa-, lo que reforzó los procesos de despolitización unido a una segunda característica: la construcción de redes clientelares entre organizaciones sociales y la institucionalidad, principalmente entre el alcalde, el socialista Johnny Carrasco, y las juntas de vecinos.

La presencia del narcotráfico en la zona ha sido algo bastante conocido y palpable, especialmente en las poblaciones ubicadas al sur de la comisaría. La presencia del poder de fuego del narco en ocasiones se combinó con los intentos por superar la despolitización, especialmente en protestas convocadas en fechas conmemorativas. El mayor resultado de esto se apreció la noche del 11 de septiembre de 2007, cuando la conmemoración dio paso a violentos enfrentamientos en la zona, los que provocaron la muerte del cabo Cristian Vera por un disparo en su cabeza. Todo esto en un contexto donde la hasta entonces subcomisaría gozaba de un creciente desprestigio entre la población, por su pasividad frente al reconocido actuar del narcotráfico y porque,

y urbanización en Santiago. 1990-2005, Tesis para optar al grado académico de Magíster en Historia, mención Historia de América. Universidad de Santiago de Chile, 2015, p. 85.

2 Ibid.

unas semanas antes, otro carabinero de esa subcomisaría había asesinado a un niño en medio de una agresión sufrida por su hijo. Tras el asesinato del cabo Vera, la subcomisaría adoptó su nombre y adquirió el rango de comisaría, pero las cosas no cambiaron mucho.

No obstante, a pesar de lo descrito, Pudahuel Sur acogería desde sus orígenes algunas características distintivas, que le permitirían resistir la despolitización de los 90 con la emergencia de diversas iniciativas de organizaciones en el nuevo siglo.

Los sujetos

Si bien en algunos casos a las primeras poblaciones llegaron familias de sectores rurales, el poblamiento del sector más eminentemente popular del territorio -el que circunda a las intersecciones de Av. Laguna Sur con Av. La Estrella- tuvo tres características distintivas: en primer lugar, un grupo importante estaba compuesto por allegados de la ex Barrancas (Pudahuel Norte y Cerro Navia, principalmente); otros provenían de campamentos de diversos lugares; mientras que un tercer grupo, no necesariamente independiente de los anteriores, fueron familias obreras que se acogieron al Programa Especial de Trabajadores (PET). El PET es un convenio sostenido por la CUT para que afiliados a sus sindicatos, desde fines de los 80, pudieran acceder a viviendas sociales mediante un subsidio del Estado que, sumado a su ahorro, les permitió adquirir sus viviendas con un crédito gestionado por la banca privada. Así, por ejemplo, llegaron trabajadores afiliados al sindicato del Hospital del Profesor, a la metalúrgica Constramet y al sindicato de carteros de Correos de Chile; algunos de los cuales quedaron viviendo en los mismos pasajes, por lo que las redes sociales fueron mucho más expeditas y existía una cierta experiencia obrera, que se trasladaba desde el lugar de trabajo al lugar de vivienda. Esta experiencia -ya sea desde la zona de Barrancas o desde el mundo sindical- permitió que, a penas se conformaban las poblaciones a inicios de los 90, rápidamente se organizaran Juntas de Vecinos, se editaran boletines y se intentara resistir a las modas despolitizantes del periodo.

Tal organización se materializó en diversas luchas dadas desde los primeros años, entre las cuales estuvieron las que buscaron mejorar la locomoción,

instalar un consultorio y habilitar un paso peatonal y vehicular por Av. La Estrella hacia el sector norte. Con el correr de los años, la experiencia organizativa se expresó mediante la creación de diversos colectivos juveniles, sociales y políticos, centros culturales, preuniversitarios populares, carnavales, etc. Además, el territorio ha sido particularmente prolífico en el surgimiento de músicos cultores del hip-hop como Excelencia Prehispánica, Movimiento Original y Luanko, iniciativas identificadas con la cultura de población peri-

“

La presencia del narcotráfico en la zona ha sido algo bastante conocido y palpable, especialmente en las poblaciones ubicadas al sur de la comisaría. La presencia del poder de fuego del narco en ocasiones se combinó con los intentos por superar la despolitización, especialmente en protestas convocadas en fechas conmemorativas. El mayor resultado de esto se apreció la noche del 11 de septiembre de 2007, cuando la conmemoración dio paso a violentos enfrentamientos en la zona, los que provocaron la muerte del cabo Cristian Vera por un disparo en su cabeza.

”

férica durante lo que va corrido de este siglo.

Sin embargo, esta experiencia organizativa se vio puesta en cuestión por la convivencia en el territorio con sectores de la clase trabajadora altamente aspiracionales, como son los sectores medio bajos. Basados en la aceptación de condiciones de ultra explotación laboral y de endeudamiento, logran acceder a automóviles propios, colegios del centro para sus hijos o Universidades. Estos sectores han buscado diferenciarse del mundo obrero y popular, catalogándose como “Alto Pudahuel Sur”; cuestión que ha sido seriamente cues-

tionada de forma general en el territorio, siendo objeto de una reconocida parodia hace unos años con el video “No nos roben los Daewoo”³.

Finalmente, la llegada del metro al territorio en 2011, con las estaciones Barrancas y Laguna Sur, terminó por consolidar una zona altamente poblada. Convivía con algunos cuadrantes destinados a áreas empresariales (desde Travesía al norte, principalmente), pero en los últimos años, burlando todo tipo de racionalidad urbanística, también se han construido condominios de departamentos.

El territorio durante el levantamiento del 18 de octubre y la posterior revuelta popular

Si bien el estallido social emergió de forma robusta y maciza en la capital el viernes 18 de octubre, en Pudahuel Sur la cosa comenzó unos días antes. El llamado a evadir el metro realizado por los estudiantes secundarios había venido teniendo una importante acogida en las estaciones ubicadas en el centro de la capital -zonas donde el movimiento estudiantil ha sido particularmente activo-, pero no en las periferias. En el territorio, el llamado motivó que los estudiantes del liceo técnico San Mateo (subvencionado) se convocaran para el miércoles 16 evadir la estación Laguna Sur, ubicada a unas cuadras del establecimiento. No obstante, las cosas no salieron como se esperaban. La estación tiene una única vía de acceso, lo que posibilitó que los guardias se atrincheraran en esta y atacaran violentamente a los estudiantes, cuestión que fue grabada y difundida rápidamente en las redes sociales. Esto, mientras en las estaciones del centro los estudiantes comenzaban a recibir el amplio respaldo de los trabajadores que utilizan el metro. La difusión del video donde los guardias golpean a los estudiantes provocó que al día siguiente la estación fuera rodeada por cientos de pobladores, estudiantes, vecinos, familias, etc. Protestaron contra los guardias, lo que llevó a cerrar la estación y a una dura represión de fuerzas especiales en las afueras. El pueblo había salido a defender a sus hijos y no estaban dispuestos a aguantar estas arbitrariedades. Los estrechos pasajes del sector se llenaron de improvisadas barricadas. Era jueves

3 Video disponible en: <https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=vBjCOnlQYB4>

17 y el territorio ya había tenido su primer levantamiento popular, augurando de alguna forma lo que ocurriría en los siguientes tres meses.

El viernes 18 la protesta volvió a concentrarse en el metro, pero durante la tarde se extendió hacia el norte por Teniente Cruz y el poniente por Laguna Sur, las que se colmaban por quienes habían debido realizar largas caminatas desde el centro para llegar al hogar. A eso de las 21 horas, el territorio estaba sembrado de barricadas y el caceroleo era masivo en cada esquina. Carabineros miraba desde la distancia y lanzaba lacrimógenas. Luego, en el entorno del metro Laguna Sur, se vivió una verdadera batalla campal, con detenidos, casas gaseadas y numerosos ataques a los carros represivos. Al día siguiente, la estación del metro fue remecida por las llamas que aparecieron en la mayor parte de las líneas de zonas periféricas del gran Santiago. La furia contra el metro no impidió que continuara siendo el epicentro de las manifestaciones, a pesar de que las autoridades han anunciado que, por los daños, será la última estación en ser reabierta.

Fueron alrededor de 3 mil personas las que se agruparon en los días siguientes en las afueras del metro, mientras los saqueos de los supermercados Acuenta y Mayorista 10 (posteriormente incendiado) persistieron durante varios días. También aparecieron “chalecos amarillos”, principalmente en las villas más acomodadas y en los condominios de departamentos, sin embargo, aquí también se caceroleó y se participó en las manifestaciones, especialmente durante los primeros días.

La masividad y persistencia lograda durante las primeras semanas fue resultado de la composición mixta del territorio, sectores populares y medio-bajos, en sintonía con la mayor transversalidad que adoptó a nivel general la protesta durante los primeros días, ejemplificadas en zonas como Plaza Ñuñoa. Esta mayor amplitud en la composición de clase de los primeros días se manifestó con las mismas características despolitizadas que en el centro: muchas banderas chilenas, mucha cerveza y falta de discursos políticos reconocidos (cantos, lienzos, oradores, etc.). Así, Pudahuel Sur se transformó en el territorio de la ex Barrancas donde las manifestaciones fueron más masivas, superando a los bastiones históricos de Pudahuel Norte y Cerro Navia.



2019=1973

BARRICADA

Y

BESITOS

PA
TRAIADOR

LINTERNA

EVA
XCA

FOR

US







Lo que en un principio fue espontáneo comenzó a volcarse organización, a pesar de que en la coyuntura las organizaciones populares existentes previamente en el sector no lograron ponerse a la cabeza de las manifestaciones. En cambio, antes de cumplirse una semana desde el 18 de octubre, se conformó la Asamblea Territorial Pudahuel Sur, la que buscó mantener viva la protesta, pero también darle conducción a lo espontáneo. Tras su conformación, las asambleas, actividades, denuncias, caceroleos, marchas al centro, marchas locales, marchas territoriales con el Cordón poniente se hicieron habituales, en un activismo que ya cumplió 3 meses. El ex metro fue escenario de persistentes barricadas, casi todos los días por lo menos el primer mes; ocasionales luego, pero que estuvieron presentes inclusive en la noche de Navidad y Año nuevo. Entre tanto aparecieron nuevos colectivos y organizaciones, se convocaron a masivas cicletadas, obras de teatro, talleres de mujeres, presentaciones de Las Tesis, ferias de las pulgas, asambleas más locales, se crearon nuevas Juntas de Vecinos (en Villa El Sol y Estrella del Sur), etc. Si Chile despertó, Pudahuel Sur lo hizo heroica y creativamente.

El boicot a la PSU

El llamado realizado por la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios (ACES) a boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU) no auguraba un alto nivel de acatamiento en Pudahuel Sur. No obstante, en el territorio eran 4 los establecimientos donde se rendiría la prueba, dando muestras de la importante presencia juvenil en el sector. Esto lo diferenciaba de la zona norte de la comuna, más antigua, donde la menor presencia juvenil se tradujo en la existencia de un solo local para rendir la PSU. En la zona la presencia de la ACES es nula, al igual como en la mayor parte de los establecimientos periféricos, donde los jóvenes concurrían sin muchas expectativas de éxito. Junto a esto, una parte de los estudiantes que habían sido activos en la movilización, aquellos que mayoritariamente habían logrado estudiar en colegios más céntricos, rechazaban el llamado al boicot. Se diferenciaban de la mayoría de los estudiantes que se había formado en los establecimientos de la zona, con pocas expectativas y muy poco que perder frente al boicot; pero sin gran experiencia organizativa como para acoplarse adecuadamente al llama-

do proveniente de los sectores más ilustrados. ACES y PSU estaban igual de lejos para los jóvenes de Pudahuel. Esto quedó reflejado en el intento de toma en el Liceo San Mateo el día anterior al inicio de la prueba, el que fracasó por no lograr burlar la presencia policial.

Entonces, el primer día de rendición de la PSU se enfrentaron las dos identidades de clase que conviven en el territorio. Los sectores aspiracionistas buscaron instalar la normalidad. Las familias acompañaron a sus hijos e hijas, y mayoritariamente se posicionaron al lado de los carabineros y PDI, quienes se instalaron en los 4 colegios desde tempranas horas. Esto fue problemático para un sector de familias que sentía adhesión por las movilizaciones o inclusive que habían participado activamente. En la vereda de enfrente, los minoritarios sectores organizados de estudiantes secundarios de la zona buscaron hacer carne el llamado al boicot. La experiencia de la evasión en el metro había marcado un referente, con sus debilidades, pero también con sus fortalezas. Aunque en esta ocasión, a diferencia de las jornadas de evasión, las familias parecían asumir sus tradicionales roles conservadores. Finalmente, el primer día de PSU los intentos de boicot, principalmente en el Liceo San Mateo, fueron poco fructíferos y en los otros establecimientos casi nulos. No obstante, tuvieron un potencial logro: demostrar a la mayoría gallá estudiantil, despolitizada y sin ningún tipo de expectativas frente a la desigual PSU, que existían posibilidades de hacer carne lo que habían compartido tantas veces en memes y wassaps: la prueba medía las diferencias entre ricos y pobres. Ellos, los pobres, solo podían aspirar a un margen acotado de espacios en la educación universitaria, por lo que sus posibilidades eran ver quiénes eran los pocos que podían acceder a esos cupos. Ese día grabaron videos, gritaron (principalmente a los pacos) y se convencieron de que dar la prueba, o no darla, daba lo mismo. Si ingresaban a la educación superior sería a un Centro de Formación Técnica o a un Instituto Profesional; hasta a una Universidad Privada de bajo abolengo, si algún familiar quería emprender la noble cruzada de endeudarse y donde el puntaje PSU no fuera relevante.

El segundo día la cosa fue distinta. Los enfrentamientos en el San Mateo fueron escalando, producto de que los jóvenes que propiciaban el boicot con-

taban con mayor apoyo interno y externo, pues la presencia temprana de policías de civil en el sector alertó a numerosos familiares. Estos se hicieron presentes en el establecimiento para defender la vida, el cuerpo y la cuerpa de sus hijos. Esto llevó a suspender la realización de las pruebas de matemáticas e historia en ese establecimiento. Al poco rato, los enfrentamientos se trasladaron al municipal Liceo Monseñor Alvear. Allí -en plena Av. La Estrella, en el corazón del territorio- se comenzó a vivir una fuerte batalla directa con las fuerzas policiales, cuando los estudiantes comenzaron a salir masivamente de las salas al son del “el que no salta es paco”. Las barricadas no tardaron en aparecer. En una avenida caracterizada por la presencia cotidiana de cerros de basura, cartones, sobras de la feria, etc., los pacos reprimieron a sus anchas a un grupo de jóvenes con deseos de protesta.

En el colegio Gerónimo de Alderete, que había sido uno de los menos activos, el gas pimienta llegó hasta los facsímiles que estaban en el suelo. Allí se detuvieron a varios estudiantes bajo fuertes golpizas. Mientras que a eso del mediodía, los enfrentamientos emergieron en el Colegio Santiago Pudahuel ubicado en Av. Oceanía, al frente de la 55° comisaría. Allí la represión fue directa. Los pacos coparon el sector y detuvieron a algunos jóvenes. En todo el territorio, los apoderados arribistas se comenzaron a desvanecer en el aire, pues ante la represión frente a los estudiantes, la solidaridad de los vecinos fue inmediata. Viejos obreros, curtidos en diversas luchas, le cerraban las rejas de los pasajes a los policías en motos. Seguramente no tenían idea de las identidades de los jóvenes, pero sabían que ellos eran parte de su mismo pueblo. Podían ser sus hijas, por lo que cerraron filas frente a quienes habían escogido ser parte de las fuerzas represivas.

No obstante, en los alrededores de la misma comisaria se vivió una situación que encendió aún más los ánimos. Una de las numerosas radiopatrullas, que ya eran masivamente repelidas en diversos lugares, atropelló a una gran velocidad a un manifestante, lo cual fue grabado y difundido rápidamente por las redes sociales. Todo mientras la prueba de Historia era suspendida en todos los locales de Pudahuel y momentos después se informaba que la suspensión era en todo el territorio nacional. En las horas siguientes las calles Oceanía y

Laguna Sur comenzaron a llenarse de personas enfurecidas por la represión. Su objetivo: la 55° comisaría de calle Oceanía, cuestión que no pudo ser revertida por las declaraciones de Carabineros y el municipio; quienes condenaban el atropello, argumentando la situación, en el caso de los primeros, bajo el complejo escenario causado por las protestas. La filtración, ese mismo día, de un video donde un carabinero graba una situación de infidelidad por parte de su señora con otro “colega” (todos carabineros) llevaba la imagen de la institución a uno de sus peores momentos. En términos de guerra, los pacos estaban desmoralizados como fuerza beligerante.

Tras el atropello, las protestas comenzaron a volverse masivas. A eso de las

“

Los hijos de los barranquinos que vivieron el paro comunal de Pudahuel en 1984 y de los que emboscaron a la comitiva de Pinochet en Cerro Navia en 1988 ahora eran parte de este ataque y hostigamiento a la comisaría. Estaban haciendo historia, mientras la PSU de historia pasaba a ser parte de los recuerdos. Frente a esto ¿es posible pensar que aún no existe un “tejido social” reconstruido? Parece más bien que continuar planteando esta tarea de reconstrucción es producto de que las teorías movimientistas pretenden limitar todo a lo social, satanizando lo político.

”

19 horas, el ataque a la comisaría era persistente. No era un grupo aislado, tampoco era un ataque letal. Eran cientos de piedras frente a un piquete, dos zorrillos y dos guanacos, los que difícilmente podían hacer algo contra cerca de mil manifestantes enfurecidos. Esa rabia tenía aspectos contradictorios. No representaba a la vieja cultura política de izquierda, tristonja, pesimista, titubeante. Eran jóvenes, y no tanto, sin miedo, que mientras puteaban a los policías, se alegraban al escuchar a una manifestante que comenzó a tocar

una trompeta. Nunca se había cantado en la zona tan fuerte el “ya vaannn a ver... las balas que nos tiraron van a volver”. Nunca una sola canción había logrado reflejar lo que se sintió esa tarde en esos estrechos pasajes de la villa Comercio. No era la esperanza de una alegría por venir. Estaban alegres, porque sentían que el momento defensivo se había acabado, era tiempo de terminar con el “poner la otra mejilla”. El atropello al manifestante había sido la síntesis de todos los atropellos vividos en estos tres meses y en tantos años de explotación. Esta ocasión no pasaría como cualquier otra. Ni los cientos de lacrimógenas lograron apagar las lágrimas de felicidad de los manifestantes. Tampoco lograron ocultar el miedo de los funcionarios de esa comisaría, que reflejaba los momentos por lo que atraviesa esa nefasta institución policial.

Los hijos de los barranquinos que vivieron el paro comunal de Pudahuel en 1984 y de los que emboscaron a la comitiva de Pinochet en Cerro Navia en 1988 ahora eran parte de este ataque y hostigamiento a la comisaría. Estaban haciendo historia, mientras la PSU de historia pasaba a ser parte de los recuerdos. Frente a esto ¿es posible pensar que aún no existe un “tejido social” reconstruido? Parece más bien que continuar planteando esta tarea de reconstrucción es producto de que las teorías movimientistas pretenden limitar todo a lo social, satanizando lo político.

Los intentos del gobierno, el municipio y Carabineros por relacionar las protestas con la delincuencia y el narcotráfico tuvieron escasos resultados en el territorio. Desde el primer día aparecieron brigadas de primeros auxilios, muchas de las cuales se habían graduado con honores en Plaza Dignidad y ahora respondían rápidamente al llamado de la periferia. De inmediato se abrieron casas para que se atendieran a los numerosos heridos. Cuando las lacrimógenas caían en los techos de las casas y amenazaban con iniciar un incendio, la solidaridad heredada por los nietos de barranquinos y sindicalistas emergía de inmediato. Rápidamente numerosos jóvenes trepaban a las casas y apagaban las bombas entre los aplausos de jóvenes anónimos, pero sin duda no delincuentes. Tras ese primer día los enfrentamientos se prolongaron durante las cuatro noches siguientes, donde a las piedras se le fueron sumando molotovs, disparos de armas de fuego y fuegos artificiales. La solidaridad de

clase demostrada por los vecinos apoyando a los manifestantes fue puesta en cuestión por el malestar causado por los gases lanzados directamente en los pasajes, pero no logró hacerse parte de los intereses del gobierno y carabineros: identificar a las protestas con el narcotráfico. Los vecinos del sector saben muy bien que el pueblo que lucha no es delincuente.

El ataque a la 55° comisaría dentro del contexto general de la revuelta popular

La 55° comisaría fue atacada de forma persistente durante 5 días seguidos tras el atropello, volviendo a reaparecer en los días siguientes, mediando una tregua del día domingo. Las primeras piedras dieron paso a bombas motolovs, armas de fuego y fuegos artificiales. Estos últimos vienen siendo lanzados contra carabineros en los últimos años en diversas protestas, lo que es un componente nuevo en este tipo de enfrentamientos. No obstante, esta misma comisaría ya había sido atacada al menos en 5 oportunidades desde que comenzó la revuelta popular.

Pero estos ataques no hay sido atípicos. Según información publicada en www.latercera.com y en www.T13.cl, desde el 18 de octubre se han realizado 359 ataques a locales de carabineros en todo el país. La subcomisaría de Padre Hurtado lleva la delantera con 34 ataques, le sigue Peñalolén con 33, Huechuraba con 29 y Puente Alto con 9. Los ataques han ocurrido mayoritariamente en la región Metropolitana, alcanzando el 61%. En otras regiones Antofagasta e Iquique lleva la delantera, mientras que también ha habido ataques en Los Ángeles, La Calera, Coquimbo, entre otros. Si durante el mes de octubre los ataques llegaron a 72, en noviembre se vivió el mayor número de estos alcanzando los 169 ataques, especialmente entre el 14 de noviembre (conmemoración asesinato de Camilo Catrillanca) y fines de ese mes. En diciembre continuaron los ataques de forma similar hasta la pascua, llegando a 82 eventos. Durante lo que va de enero los ataques alcanzan a 36⁴. De esta forma,

4 Véase en La Tercera <https://www.latercera.com/nacional/noticia/carabineros-acusa-accion-concertada-inedito-ataque-cuatro-comisarias/975515/> y <https://www.latercera.com/nacional/noticia/los-puntos-criticos-rodean-cuadrante-la-comisaria-pudahuel/972718/> y en T13 <https://www.t13.cl/noticia/nacional/se-han-registrado-350-ataques-comisarias-estallido-social-mayoria-rm> y

podemos apreciar que los ataques tuvieron su mayor frecuencia entre el 14 de noviembre y el 24 de diciembre, no en las primeras semanas de la revuelta. Tras la tregua de las fiestas de fin de año, los ataques volvieron a aparecer en el contexto de la PSU y con posterioridad a esta.

Esta radicalización es difícil de analizar por motivos obvios, relacionados con el tipo de repertorio de protesta. Sin embargo, se pueden apreciar algunas características generales. En primer lugar, prácticamente todos los lugares atacados corresponden a territorios altamente populares, con presencia de narcotráfico, por ende de armas de fuego. Salvo en Peñalolén, no se aprecian vinculaciones con las tradicionales poblaciones “combativas”, como para esbozar posibles conexiones con organizaciones revolucionarias o con las herencias de estas. Sin embargo, la vinculación al narcotráfico, como repite constantemente el gobierno, tiene una principal dificultad explicativa: la existencia de bombas molotov, las que se identifican con actores con experiencias organizativas y en protestas, por lo que la tesis criminalizadora del gobierno pierde sentido. Este tema se refuerza al analizar algunos casos específicos que tienen aspectos similares a los de Pudahuel Sur. Así, por ejemplo, en la mayoría de las ocasiones los ataques a las comisarías han sido respuestas populares a las agresiones irracionales de carabineros. En Padre Hurtado, donde han ocurrido la mayor cantidad de ataques, estos se han debido a la represión, golpes y detenciones de estudiantes. En Peñalolén los ataques recrudecieron tras una feroz represión a un comité de allegados que se tomó terrenos de la viña Cousiño. Además de esto, en varios puntos los ataques han logrado una masividad similar a la de Pudahuel Sur. Tal es el caso de la subcomisaría norte de Antofagasta, donde los ataques han sido provocados por hasta 600 personas, quienes han sostenido luchas por más de 12 horas contra carabineros, con piedras, palos y molotov.

De esta forma, los ataques han estado presentes en territorios populares con presencia de diversos medios para realizarlos -entre estos molotovs- y han sido en respuesta a violentos actos represivos, alcanzando una masividad

<https://www.t13.cl/videos/nacional/video-ataque-armado-comisaria-granja-se-suma-239-otras-pais>

nada despreciable. Estas características permiten poner en cuestión el discurso de la presencia de narcotraficantes, aunque no completamente. Además, y esto es mucho más interesante, los ataques se efectúan en territorios ajenos a los campos de enfrentamiento clásicos donde sectores revolucionarios y subversivos han tenido presencia: las poblaciones combativas. Salvo algunos casos de la zona oriente de Santiago (Peñalolén), la mayoría de los ataques se han vivido en zonas sin esa tradición, como Padre Hurtado, Quilicura, Pudahuel Sur, etc. Pero por otro lado, el bajo número de detenciones o heridos da cuenta de algún tipo de planificación que permite pensar en vinculaciones

“

...los ataques han estado presentes en territorios populares con presencia de diversos medios para realizarlos -entre estos molotovs- y han sido en respuesta a violentos actos represivos, alcanzando una masividad nada despreciable. Estas características permiten poner en cuestión el discurso de la presencia de narcotraficantes, aunque no completamente. Además, y esto es mucho más interesante, los ataques se efectúan en territorios ajenos a los campos de enfrentamiento clásicos donde sectores revolucionarios y subversivos han tenido presencia: las poblaciones combativas.

”

con experiencias organizativas revolucionarias, aunque de manera aislada más que orgánica. Esto último se debe en primer lugar a las debilidades organizativas de los sectores revolucionarios.

Pensar que las acciones radicales responden a una determinada fuerza política específica es erróneo, sólo posible en afebradas acusaciones del gobierno. La protesta radical es múltiple, inorgánica, se nutre de experiencias, condiciones de clase, oportunidades, y, como es obvio, cambia con el tiempo. Análisis más generales que el caso específico aquí tratado son tareas pendientes y urgen-

tes. Especialmente porque quienes piensan en revolución lo hacen repitiendo libros rojos y quienes no quieren revolución por lo general invisibilizan las protestas radicales. La diversidad de las manifestaciones sociales sigue teniendo como repertorio central a las acciones radicales. La falta de adopción de estas acciones con características más claramente políticas, que desborden el puro acto, es difícil de subsanar en breve tiempo, pues las fuerzas políticas que se identifican con posiciones maximalistas siguen sin incidencia política.

¿Cómo puede interpretarse que estos repertorios de acción siguen siendo persistentes en el mes de enero? Sin duda que existen factores atribuibles a la extracción de clase de los participantes en la revuelta. Mientras en Plaza Dignidad los viernes siguen siendo controlados por la protesta y en Pudahuel Sur los ataques fueron reemplazados por una masiva y festiva feria de organizaciones, las asambleas de las comunas ilustradas y pequeñoburguesas decretaron el “cierre por vacaciones”, solo levantado para asistir al reciente encuentro de la Coordinadora de Asambleas Territoriales (CAT).

Esta situación presenta un dilema para las corrientes revolucionarias de izquierda, pues si bien la revuelta popular ha permitido una mayor vinculación de los sectores populares periféricos con los sectores de izquierda revolucionaria e ilustrada, esto no se traduce en avances orgánicos. La cultura de rebeldía de la juventud pudahuelina se queda empantanada en las discusiones entre lo social y lo político, el movimiento versus el partido. Las pésimas prácticas llevadas a cabo por la izquierda institucional y revolucionaria han reforzado este empate catastrófico, donde las debilidades de las organizaciones políticas llevan a que los activistas no militantes logren mejores resultados que los militantes. La comodidad del reducto ideológico representa un desprecio por el trabajo de masas, a pesar de que las decenas de asambleas territoriales levantadas desde el 18 de octubre se han presentado como un escenario ideal para disputar la conducción política. No ver esto es permanecer en la comodidad del nicho y en el ejercicio de la protesta como rito y no como acto político.

Christián Matamoros, es profesor de filosofía e historiador, profesor en el Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile





¿DE LA REVUELTA A UN NUEVO PACTO TRANSICIONAL? CLASE, SINDICATOS Y POLÍTICA

/ *Camilo Santibáñez*

Por esto lo acontecido entre el 12 y el 15 de noviembre requiere de toda nuestra atención: porque en ello radica la pauta de reactivación de un mecanismo transicional cuya primera piedra de toque fue el procesamiento político de la ingobernabilidad provocada por la clase trabajadora. Cuestión que, en el peor de los casos –es decir, si los partidos concertacionistas perseveran y triunfan en legar su política transicional-, significará que la clase trabajadora volverá al mismo derrotero de los pasados treinta años que, según sus propios términos, la condujeron a la revuelta.

El medio año transcurrido desde el 18 de octubre no ha dado tregua a quienes siguen tratando de descifrar los estragos causados por la aceleración del tiempo histórico en sus particulares campos de batalla¹. Para las dirigentas y dirigentes sindicales la situación es como la del pescador cuya caleta está siendo azotada por un maremoto: aprendieron el oficio domando marejadas, pero, por lo mismo, saben que esto es otra cosa. De forma semejante, estos dirigentes y dirigentas saben que la reciente declaración de la Ministra del Trabajo anunciando que el gobierno “no [tiene] forma de obligar al empleador a pagar los sueldos” –en medio de la crisis sanitaria del COVID19– augura que vienen tiempos duros. Sin embargo, ignoran qué rol van a cumplir los sindicatos en la confrontación de clases resultante². De hecho, el empresariado sabe por la misma razón que haría bien en ocupar los sueldos de la gente que están despidiendo en seguros contra incendios intencionales para sus locales.

No pretendo cartografiar aquí tales estragos en el ámbito laboral. Mi intención se reduce a la utilidad que creo pueden prestar las historiadoras e historiadores a quienes discuten, resuelven y actúan con responsabilidades colectivas a cuestas. En mi caso, ello se restringe a plantear una lectura de lo acontecido los últimos meses en el parapeto sindical que resulte útil para afrontar el “instante de peligro” que se cierne sobre la clase trabajadora. Esta lectura remite siempre a la vieja madeja que la clase trabajadora constituye con su expresión productiva organizada, los sindicatos, y con la institucionalidad política.

En concreto, me importa (I) volver sobre la relación que las trabajadoras y trabajadores hallaron con las grandes organizaciones sindicales en la protesta durante noviembre del 2019; (II) alertar sobre los severos riesgos que subsisten en la suposición ingenua de que el sindicalismo opera políticamente en favor de la clase trabajadora de manera intrínseco; y (III) remachar las incomodidades que lo anterior le impone a la izquierda resuelta a bregar por

1 Olivier Remaud despeja los dos modos de entender la aceleración del tiempo histórico en “Pequeña filosofía de la aceleración de la historia”, Isegoría 37, 2007, pp. 97-111. Estoy empleando el segundo de ellos.

2 “Ministra del Trabajo: No tenemos la forma de obligar al empleador a pagar sueldos”, Cooperativa, 27 de marzo de 2020.

la consumación de la ruptura democrática como telón de la postdictadura chilena.

Pese a que las condiciones han cambiado de forma dramática desde noviembre último –y cuyas implicancias para las y los trabajadores esbozo en el tercer apartado– dichos problemas siguen martillando como los latidos en la sien de un boxeador agotado: es un recordatorio molesto en el mal round actual. Sin embargo, no hay ninguna posibilidad de dar más golpes de los que se reciben si la cabeza no advierte los ritmos del cuerpo.

I

Durante los días que sucedieron al incendio de las estaciones de metro, cuando la revuelta se expandía como una mancha de aceite por el país, las encuestas conseguidas en caliente arrojaban con claridad las reivindicaciones prioritarias de sus protagonistas: salarios, pensiones, costo de la vida y endeudamiento³. Bajo la síntesis consignada en el antagonismo “abusos/dignidad”, además, bullía a raudales una bronca popular prolongadamente fermentada en las sucesivas incurrencias del empresariado y de las fuerzas armadas y de orden⁴ que habían sido coronadas por una ráfaga de indolencias a cargo del gobierno entrante⁵.

3 Frente a la pregunta abierta “¿Cuáles considera usted que son las principales motivaciones que han generado estas manifestaciones y protestas?” realizada por la encuesta “Pulso Ciudadano” de Activa Research realizada el 22 y 23 de octubre de 2019, las razones más reiteradas fueron los sueldos de los trabajadores, los precios de los servicios básicos (incluyendo además de la luz, el agua y el gas, la salud, el transporte, los medicamentos y la educación), las pensiones de los jubilados y la desigualdad económica (pp. 17-18). La encuesta “Movilizaciones sociales de octubre 2019” de IPSOS realizada poco antes, el 21 y 22 de octubre, arrojó un resultado equivalente para la misma pregunta: entre seis respuestas posibles, el 67% escogió la siguiente: “Las personas se cansaron del costo de la vida, las alzas de precios, el nivel de los sueldos, la calidad de la salud, el monto de las pensiones, entre otros” (pp. 7-10).

4 “Especial década: El descrédito del sector empresarial”, *La Tercera*, 29 de diciembre de 2019; “Seguridad pública, policial y militar: Corrupción, escándalos, fracasos”, *El Siglo*, 12 de octubre de 2019.

5 “Las incendiarias frases del gabinete de Piñera que detonaron la crisis social”, *El Desconcierto*, 19 de octubre de 2019.

El abrupto carácter de clase de esta combinación fue tan notorio que activó dos tipos de relatos defensivos entre los espectadores más escépticos. Se dijo, por una parte, que la masividad de la protesta obedecía a su carácter clasemediero pero que la violencia era ejercida por una minoritaria “clase baja” enardecida. Se dijo también que lo que había tras la revuelta era “algo más” que la clase trabajadora; como si esta se redujera al trabajo productivo y se requirieran fantasmas con overoles y colihues para constatarla.

Aunque es probable que proviniera de cualquier variante de los ciudadanis-

“

El abrupto carácter de clase de esta combinación fue tan notorio que activó dos tipos de relatos defensivos entre los espectadores más escépticos. Se dijo, por una parte, que la masividad de la protesta obedecía a su carácter clasemediero pero que la violencia era ejercida por una minoritaria “clase baja” enardecida. Se dijo también que lo que había tras la revuelta era “algo más” que la clase trabajadora; como si esta se redujera al trabajo productivo y se requirieran fantasmas con overoles y colihues para constatarla.

”

mos en boga, esta última reacción halló una honda recepción en el sector liberal del Frente Amplio (que incluye a parte de su izquierda). En cambio, la hipótesis de “el malestar del éxito”⁶ se originó en el oficialismo y terminó convirtiéndose, “Acuerdo por la Paz Social” mediante, en el mantra que guio el comportamiento legislativo de agenda social y garrote avalado por prácticamente todos los partidos involucrados.

6 “No supimos entender el clamor por una sociedad más justa”, El País, 11 de noviembre de 2019.

Sin perjuicio de que la negación discursiva común debió haber facilitado este último ordenamiento, lo relevante es volver sobre los acontecimientos para disipar cómo una revuelta protagonizada por una clase trabajadora con la capacidad de asestar huelgas generales e instalar por la fuerza la discusión constitucional terminó replegada a la mera protesta.

El recuento de los hechos puede resumirse del siguiente modo. Precedido por una serie de paros sectoriales iniciados por los obreros portuarios, los gremios públicos –incluyendo la salud– y el profesorado, a fines de octubre⁷, el Bloque Sindical (BS) que estos sectores habían conseguido articular en el seno de Unidad Social (US) junto a la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) convocó a una huelga general para el 12 de noviembre con la reivindicación constituyente como su objetivo estratégico⁸. En medio de un clima de revuelta ya patente y generalizado –graficado en el registro hospitalario de medio millar de heridos por perdigones⁹–, la movilización remeció la institucionalidad en un modo inédito. Todos los partidos de oposición firmaron un acuerdo exigiendo una Asamblea Constituyente y un plebiscito en medio de la huelga, y tres noches más tarde la mayoría de estos partidos firmó el “Acuerdo por la Paz Social” con el gobierno¹⁰.

La jornada evidenció dos cuestiones significativas de subrayar. En primer lugar, que la adhesión de franjas radicalizadas de trabajadoras y trabajadores no organizados laboralmente había sido fundamental para conseguir el carácter general de la huelga, sobre todo supliendo la incapacidad de paralización real de la mayor parte de los sindicatos de US mediante diferentes acciones que

7 “Puertos se movilizan y CUT llama a paro nacional para miércoles y jueves”, *La Tercera*, 22 de octubre de 2019; “Unidad Social ratifica paro nacional para este miércoles 30 de octubre”, *Diario Universidad de Chile*, 29 de octubre de 2020.

8 “Trabajadores de sectores productivos más importantes del país llaman a huelga nacional para este 12 de noviembre”, CUT, 8 de noviembre de 2019; “Bloque sindical de Unidad Social convoca huelga general de trabajadores para el 12 de noviembre”, *El Desconcierto*, 9 de noviembre de 2019.

9 “Furia desatada en Carabineros: fuera de control y sin piloto”, CIPER, 12 de noviembre de 2019.

10 “Toda la oposición firma acuerdo en que pide Asamblea Constituyente y plebiscito”, *CNN Chile*, 12 de noviembre de 2019.

interrumpieron la circulación de la fuerza de trabajo. En segundo, que el Bloque Sindical efectivamente podía concitar aquella adhesión en la numerosa clase trabajadora no sindicalizada que llevaba alrededor de un mes enfrentándose con la policía y atestando las calles¹¹.

“

La jornada evidenció dos cuestiones significativas de subrayar. En primer lugar, que la adhesión de franjas radicalizadas de trabajadoras y trabajadores no organizados laboralmente había sido fundamental para conseguir el carácter general de la huelga, sobre todo supliendo la incapacidad de paralización real de la mayor parte de los sindicatos de US mediante diferentes acciones que interrumpieron la circulación de la fuerza de trabajo. En segundo, que el Bloque Sindical efectivamente podía concitar aquella adhesión en la numerosa clase trabajadora no sindicalizada que llevaba alrededor de un mes enfrentándose con la policía y atestando las calles.

”

Esta última es una cuestión que equivocadamente suele darse por obvia. No cabe largar aquí la profusa cantidad de indicadores que dan cuenta pormenorizada de la situación, pero, dado que es importante retener el carácter de la relación sindicatos-clase, sí cabe mencionar los siguientes apuntes. En más del 80% de las empresas del país no ha existido jamás un sindicato; el 65% de

11 El mejor balance y recuento hasta ahora es el recogido por el Centro de Investigación Político Social del Trabajo (CIPSTRA), en “La huelga general del 12N. Balance y desafíos futuros”, Revista ROSA, 21 de noviembre de 2019. Ver también: “Exitosa y masiva jornada de Huelga General”, El Siglo, 12 de noviembre de 2019. Digo “no sindicalizada” porque entiendo la participación de organizaciones feministas, estudiantiles, de allegados y un largo etcétera como organizaciones de la clase de trabajadora.

los constituidos el 2014 había desaparecido para el 2016 y la mitad de los que quedaba estaba compuesto por cuarenta o menos trabajadores¹². No obstante, la representación institucional y social de los ocupados reside, en los hechos, en la capacidad de articulación que una porción de estos últimos concentra en la Central Unitaria de Trabajadores: un 25% de los sindicalizados, y por tanto menos del 3% de la fuerza de trabajo del país¹³. Y esto entendiendo por fuerza de trabajo únicamente la productiva y asalariada.

La excepcionalidad de los alcances políticos conseguidos el 12 de noviembre, por tanto, sólo pueden entenderse dimensionando estas condiciones desfavorables para la acción reivindicativa conjunta de las trabajadoras y los trabajadores.

II

Recapitulando, el resultado de la capacidad de huelga de la clase trabajadora fue concitar la alineación de todos los partidos de oposición en torno a la Asamblea Constituyente y conseguir abrir la instancia de consenso partidario para el proceso constitucional, incluyendo el mecanismo plebiscitario de entrada¹⁴.

No obstante, para quienes insistimos en la capacidad de ruptura democrática de la clase trabajadora –esto es, la capacidad privativa de detonar a su favor los cerrojos institucionales del neoliberalismo, manteniendo una correlación de fuerzas que permita defender dicho avance en un consecuente escenario de

12 Valentina Doniez, “¿Contar sindicatos o sindicatos que cuentan?”, El Desconcierto, 3 de mayo de 2019. Los datos están tomados de Fundación SOL, “Sindicatos pulverizados. Panorama actual y reflexiones para la transformación”, 2016: p. 5.

13 Esto, apegándose a los datos del Sistema Informático de Relaciones Laborales. En: “Dirección del Trabajo utiliza información de SIRELA para determinar representatividad de centrales sindicales”, Prosindical, 24 de mayo de 2017. No considero a las otras Centrales sindicales (CAT, CNT y CTCH) por su irrelevancia. Con base en los datos de la Dirección del Trabajo a principios del 2019, Sebastián Osorio, a quien agradezco la referencia, calculó la representación sindical de estas otras Centrales en un 0.63%, lo que significa un 0,17% del total de las trabajadoras y los trabajadores chilenos.

14 “Oposición y oficialismo logran un histórico acuerdo para una nueva Constitución”, Diario Financiero, 15 de noviembre de 2019.

confrontación democrática–, el proceso antes mencionado debería hacernos saltar todas las alarmas de un nuevo pacto transicional. En un primer sentido, por la reproducción del patrón de contención de conflictividad social como habilidad concertacionista para la gobernabilidad del neoliberalismo; exclusión del PC mediante, por cierto. Pero derivado de esto, y en términos autocríticos, por el ingenuo mecanicismo implícito en la suposición táctica de asumir la magnitud de la ingobernabilidad como el equivalente a la velocidad de un tobogán que terminaba, por efecto del peso y la gravedad, en un proceso de ruptura democrática desatada por el conflicto.

Por capacidad de contención concertacionista, cabe precisar, estoy refiriéndome a la ágil maniobra de los partidos que se hicieron parte de la protesta –sus dirigentes sindicales en la huelga y en el Bloque Sindical– tanto como del procesamiento político de la misma –la instancia del Acuerdo– para luego no volver a propiciar protestas de esta índole¹⁵. Es decir, una suerte de adaptación audaz: una capacidad de cooptación institucionalizante pero no siendo gobierno, cuestión que los partidos concertacionistas en estricto rigor nunca enfrentaron, pero sí supieron ejercer en estas circunstancias¹⁶.

A mi entender, esto compone la estrategia inversa de la ruptura democrática, pero no fuimos capaces de verla como tal –como estrategia– porque la asumimos, precisamente, como institucionalidad. Suponiendo con ello que la revuelta iniciada en octubre la había “rebasado” en la misma medida que rebasó las calles, los medios y a la derecha.

Por el contrario, y asumiendo el cortocircuito frenteamplista táctico y estratégico entre quienes estaban impulsando la huelga general como golpe

15 Acaso la expresión por antonomasia de lo que estoy señalando sea el paro de 11 minutos convocado el 11 de marzo pasado. “Mesa de Unidad Social convocó a movilizaciones en el segundo aniversario del Gobierno de Piñera”, Cooperativa, 6 de marzo de 2020.

16 Para un tratamiento más amplio del período véanse los libros editados en América en Movimiento por José Ignacio Ponce et al.: *Trabajadores y trabajadoras. Procesos y acción sindical en el neoliberalismo chileno, 1979-2017* (2017) y *Transiciones: Perspectivas historiográficas sobre la postdictadura chilena, 1988-2018* (2018). En este último tono también el libro editado por Julio Pinto en LOM: *Las largas sombras de la dictadura: a 30 años del plebiscito* (2019).







40 AÑOS de TRA-
BAJO Y AHORA...
PENSION "MISERABLE"



de ingobernabilidad y quienes participaron en la preparación del Acuerdo, versus una experiencia concertacionista mucho más aceptada entre dirigentes sindicales y dirigentes de partidos como el Socialista y el demócratacristiano, la situación facilitó que estos últimos pudieran digerir de mejor modo el empuje estructural más importante que la clase trabajadora había sido capaz de protagonizar en los últimos cuarenta años. Cuestión que, de hecho, quebró a la primera coalición y fortaleció a la segunda.

Remarco esto porque intuyo que, sumado al corolario constitucional de la protesta, lo anterior reactivó la desconfianza que late siempre en la izquierda sobre la relevancia del ámbito institucional. Y como francamente espero que nos mantengamos alejados de ese pantano, considero relevante hacer las siguientes observaciones sobre la ruptura democrática y su forado táctico.

Señaladas de forma resumida, la primera de estas constataciones es que la clase trabajadora –por mucha religión que parte de la izquierda o el sindicalismo de “autonomía” opongan a este hecho– no ejerce política intrínsecamente. Esté o no organizada en sindicatos, la relación de esta clase con la política está intermediada por partidos y, entre éstos, los de izquierda no tienen necesariamente la primacía. Pero incluso si así fuera –es decir, si los partidos de izquierda gozaran de una ventaja intrínseca para representar políticamente a la clase trabajadora–, no existen razones para suponer que su capacidad de provocar ingobernabilidad como clase estará libre de procesamientos institucionales que excluyan a la misma izquierda. De hecho, la segunda y más pertinente constatación es que hasta ahora las cuentas de la izquierda en la revuelta han sido precisamente las contrarias.

Por esto lo acontecido entre el 12 y el 15 de noviembre requiere de toda nuestra atención: porque en ello radica la pauta de activación del mecanismo transicional cuya primera piedra de toque fue el procesamiento político de la ingobernabilidad provocada por la clase trabajadora. Cuestión que, en el peor de los casos –es decir, si los partidos concertacionistas terminan de legar su molde transicional a la generación entrante, perseverando en que esta es la única política posible–, implicará que la clase trabajadora vuelva al mismo derrotero de los pasados treinta años que, según sus propios términos, la con-

dujeron a la revuelta. Y, hasta ahora, el comportamiento del FA no augura un buen panorama al respecto¹⁷.

Contra dicha consumación hereditaria –y también contra el riesgo de pasarnos la vida padeciéndola en el orgullo de la rebeldía–, el rol de las dirigentas y dirigentes sindicales de izquierda es tan crucial para esta última como para la clase trabajadora. Básicamente porque, siguiendo la línea de todo lo plan-

“

[...] Siguiendo la línea de todo lo planteado hasta aquí, la capacidad de [las dirigentas y dirigentes sindicales] de articular protesta e interlocución política a través de los partidos condiciona el proceso de ruptura democrática. Y, si bien dicha interlocución no es privativa de la izquierda, es igualmente cierto que no hay más camino que insistir en ello. Para decirlo en términos simples: ni la protesta popular ni la izquierda pueden, por sí solas, desarrollar un proceso de ruptura democrática en favor de las trabajadoras y los trabajadores. Los sindicatos demostraron haber tenido la capacidad para articular dichas fuerzas, a pesar de haber demostrado también sus limitantes.

”

teado hasta aquí, su capacidad de articular protesta e interlocución política a través de los partidos condiciona el proceso de ruptura democrática. Y, si bien dicha interlocución no es privativa de la izquierda, es igualmente cierto que no hay más camino que insistir en ello. Para decirlo en términos simples: ni la protesta popular ni la izquierda pueden, por sí solas, desarrollar un proceso de ruptura democrática en favor de las trabajadoras y los trabajadores.

17 “Bitácora de un acuerdo histórico”, La Tercera, 17 de noviembre de 2019.

Los sindicatos demostraron haber tenido la capacidad para articular dichas fuerzas, a pesar de haber demostrado también sus limitantes.

Es obvio que las dirigentas y dirigentes sindicales no pueden prescindir de los partidos de la izquierda. Como prueba la convocatoria de Unidad Social un mes antes de la revuelta, tampoco pueden suponer que su sola preexistencia les confiere una capacidad de convocatoria semejante a la que desata la clase trabajadora espontáneamente, y menos que pueden montársele a tratar de ponerle riendas¹⁸. Pero lo que sí pueden hacer, tal como puso en evidencia el 12 de noviembre, es convocar programáticamente a la clase cuando ella desata su capacidad de ingobernabilidad. El procesamiento institucional concertacionista de dicha ingobernabilidad se basa precisamente en contener la conducción unitaria, política y reivindicativa de la protesta social más que su masividad o su radicalidad.

No obstante, es igualmente cierto que el período posterior al 12 de noviembre revela los problemas de las dirigentas y los dirigentes para hacerse cargo de dicha responsabilidad. Partiendo por la dificultad para procesar discusiones y calibrar representatividades en Unidad Social, cuya peor consecuencia fue el alejamiento de los pocos sindicatos que cuentan con capacidad de paralización efectiva, dirigentes de izquierda y una honda simpatía en la revuelta, como los obreros portuarios y los trabajadores de la construcción.

III

La situación, sin embargo, ha cambiado de forma relevante los últimos tres meses, agravando la impronta de los problemas antes indicados. Frente a la pandemia, el blindaje gubernamental del modelo se ha traducido en una serie de mecanismos legales para reforzar el desequilibrio de poder entre clases, resguardando deliberadamente las ganancias del empresariado. El resultado más previsible, considerando los efectos actuales de la pandemia tanto como la recesión que se avecina, es una clase trabajadora confrontada a una crisis sin trabajo, sin medios de subsistencia, severamente endeudada y sin organi-

18 “Nos cansamos, nos unimos: La movida jornada de protesta en Santiago en apoyo a las 40 horas y en contra del TPP”, Publimetro, 5 de septiembre de 2019.

zaciones capaces de contrarrestar este avasallamiento. Es bastante probable que esto engrose la crisis de gobernabilidad del ejecutivo y, por ende, prolongue la presencia militar y la represión en las calles con el objeto de evitar una reactivación de las protestas callejeras al alero de la “vía chilena a la nueva normalidad”¹⁹.

Considerando su inminencia y que, según cabe esperar, dichas protestas serán iniciadas nuevamente por los sectores de la clase trabajadora no organizados sindicalmente –pero obligados a volver a sus lugares de trabajo–, el principal problema reside en la dificultad que la crisis y su carácter les han impuesto a los sindicatos. Algunas de las organizaciones que antes coincidieron en el Bloque Sindical, como la ANEF y el Colegio de Profesores, por ejemplo, están entendiendo como protesta lo contrario: no volver a los lugares de trabajo y mantener el aislamiento. Por otra parte, hay toda una serie de sindicatos, en diferentes ámbitos y de distintos tamaños, que están siendo desfondados a punta de despidos y cuyas energías están consumidas en revertir estas desvinculaciones, en forzar los pagos de salarios o en mantener las prestaciones. Todo esto sin considerar los recortes de sueldo que los propios sindicatos están ofreciendo a sus empresas para quedarse con el trabajo de los sindicatos que se nieguen a aceptar la medida. Por otra parte, en lo que respecta a organizaciones clave como la Unión Portuaria, es esperable, dada el carácter eventual de la mayoría de estos trabajadores, que no encabecen ni promuevan ningún llamado a paralizaciones para no afectar la dotación de trabajo que aún no merma como consecuencia de la crisis económica en ciernes, que ya afectó a los obreros de la construcción.

Todo esto lleva a suponer, por tanto, que, a diferencia de la situación del trimestre previo, la protesta de la clase organizada y no organizada difícilmente conseguirá la misma forma, y, más grave todavía, que dichos ámbitos no conseguirán dialogar entre sí ni actuar conjuntamente dadas sus distintas prioridades. Se quebranta, por lo tanto, su máspreciado potencial.

19 Ministro de Salud Jaime Mañalich, “Informe oficial sobre Coronavirus en Chile”, 24 de abril de 2020.

En la línea de lo que indiqué en el apartado previo, este desencuentro augura que la clase no organizada quedará abandonada a su suerte si las trabajadoras y trabajadores organizados no consiguen recobrar su capacidad política, cuestión que desatará la pugna de los partidos en su seno. Si la izquierda pierde

“

[El desencuentro entre trabajadores organizados y no organizados] augura que la clase no organizada quedará abandonada a su suerte si las trabajadoras y trabajadores organizados no consiguen recobrar su capacidad política, cuestión que desatará la pugna de los partidos en su seno. Si la izquierda pierde esta pugna –y en esto radica el problema más grave–, dicho proceso derivará en un procesamiento institucional gestado en la pérdida de capacidad de consumo de la clase trabajadora y en la represión salvaje a las protestas que ello desate. Y buena parte de la actual oposición ya presentó sus credenciales de gobernabilidad y republicanismo para esta situación.

”

esta pugna –y en esto radica el problema más grave–, dicho proceso derivará en un procesamiento institucional gestado en la pérdida de capacidad de consumo de la clase trabajadora y en la represión salvaje a las protestas que ello desate. Y buena parte de la actual oposición ya presentó sus credenciales de gobernabilidad y republicanismo para esta situación.

Frente a la posibilidad cierta de este nuevo pacto transicional –este “instante de peligro” al que aludí en un comienzo–, haríamos bien como izquierda, como clase y como revuelta, en recordar que la ingobernabilidad sólo pue-

de devenir en ruptura cuando conquistamos las condiciones y las posiciones para su defensa. Y para esto, el proceso constitucional y electoral sigue estando agendado y al frente. En él se juega también la lucha de clases.

Santiago, a medio año del inicio de la revuelta.

Camilo Santibáñez R. es historiador. Actualmente investiga la formación de la fuerza de trabajo portuaria en Chile y la conflictividad laboral portuaria en la postdictadura chilena. Pertenece al Frente Sindical de Izquierda Libertaria.





NOTAS FEMINISTAS DE UNA REVUELTA POPULAR CON POTENCIA ANTINEOLIBERAL

/ Daniela López L., Francisca Millán Z. & Ana Paula Viñales

Cada vez que hay clausura democrática en la historia de Chile, hay un auge del movimiento de mujeres, al sufrir mayormente los efectos del empobrecimiento de la clase trabajadora y la supresión de derechos en dicho contexto. La protesta social de octubre 2019 expresa ese componente de clausura: a mayor mercantilización de la vida más incompatible se vuelve la democracia, al no existir posibilidad de decidir cómo queremos vivir, solo el dogma de pagar para sobrevivir. Esto se ve sintetizado en la frase de la revuelta chilena contemporánea “No son los 30 pesos, son los 30 años de extrema mercantilización de las condiciones de reproducción de la vida cotidiana (educación, salud, pensiones, servicios básicos) aumentando la explotación de las mayorías trabajadoras, quienes con bajos salarios deben trabajar más para costear la supervivencia.

*Este artículo fue publicado en la edición digital de revista ROSA, el 25 de octubre de 2019.

En días de asedio a la política desde la protesta social se torna imperativo mirar el presente con ojos de historia subalterna, mediante el repaso histórico de Julieta Kirkwood respecto a los movimientos feministas o movimientos político/sociales de mujeres en América Latina, durante períodos pre dictatoriales y dictatoriales, en los cuales, se pueden observar a lo menos, tres situaciones muy gruesas:

- a) Situación democrática formal que puede tener distintos momentos y signos.
- b) Situación de quiebre democrático y autoritarismo.
- c) Situación revolucionaria.

Defenderemos para los desafíos actuales -sin caer en un símil simplista ahistórico- que se busca encerrar en la situación b) a la revuelta social de octubre 2019 en Chile.

Para el feminismo, la dictadura chilena fundada en 1973 -al imponer su autoritarismo- no sólo recurrió a las fuerzas militares, sino que también -brutal y exitosamente- a todo el autoritarismo subyacente en la sociedad civil, teniendo como componente una “razón de género” con la cual la tradición conservadora proporcionaba un modelo de familia coherente a la situación política: jerárquica, autoritaria y disciplinante que implicaba la vivencia de los roles estereotípicamente femeninos al interior de la familia. Una ideología tradicional/autoritaria, inmovilista y guardiana del orden social.

En dicho periodo histórico, señala Kirkwood, la disociación de las propias mujeres populares con la izquierda radicó en que no percibieron el ofrecimiento político que les presentó porque no se reconocían como “fuerza productiva” al ser, principalmente, reproductoras de la fuerza de trabajo. Sumado a ello, que la izquierda fue incapaz de pensar otro orden familiar por fuera del orden de género portando en su seno vértebras conservadoras que naturalizaron la explotación y la violencia de género hacia las mujeres. Es decir, la izquierda no dió mayor importancia a este dominio de “lo privado”, extremadamente sensible a los predicamentos del conservadurismo, sin cuestionarse toda la reproducción del orden social que se realiza en su interior.

En esta línea, cada vez que hay clausura democrática en la historia (política y/o económica), hay un auge del movimiento de mujeres, al sufrir mayormente los efectos del empobrecimiento de la clase trabajadora y la supresión de derechos en dicho contexto. La protesta social de octubre 2019 expresa ese componente de clausura: a mayor mercantilización de la vida más incompatible se vuelve la democracia, al no existir posibilidad de decidir cómo queremos vivir, solo el dogma de pagar para sobrevivir. Esto se ve sintetizado en la frase de la revuelta chilena contemporánea “No son los 30 pesos, son los 30 años” de extrema mercantilización de las condiciones de reproducción de la vida cotidiana (educación, salud, pensiones, servicios básicos) aumentando la explotación de las mayorías trabajadoras, quienes con bajos salarios deben trabajar más para costear la supervivencia. Esa mayor explotación se agudiza en las mujeres, a quienes se les impone como deber natural sostener con trabajo gratuito la reproducción social de la familia. Esfera reclusa a lo privado, a la cual le corresponde el reino de la necesidad según el orden conservador que subsiste 30 años después de la vuelta a la democracia pactada en Chile- hoy en crisis- con sus particularidades debido al ingreso masivo de las mujeres al mercado del trabajo.

La democracia pactada de la transición tuvo más afán de control por parte de la elite que la apertura a forjar un consenso social más amplio. En este sentido, la transición excluyó a la sociedad porque las condiciones que significó el tránsito de la dictadura a la democracia se cimentaron en la continuidad de rasgos vertebrales del autoritarismo: rechazar la deliberación social para no alterar consensos políticos y económicos de la élite jamás transparentados, que contienen como parte integral un pacto sexual para el orden social, que se plasma en las familias como en la división sexual en el mercado del trabajo. Una élite conservadora que sembró las condiciones para un nuevo autoritarismo inspirado en la incuestionable y por tanto impune producción política de la desigualdad (social/sexual).

En este marco, traemos de vuelta debates y ejemplos de Kirkwood plasmados en su texto de 1983 “El feminismo como negación del autoritarismo” para relevar su vigencia en el entendimiento de la complejidad y profundidad de la protesta social actual con potencia antineoliberal. Para ello, es vital visibilizar

y afirmar que estos últimos años, sectores anticapitalistas del feminismo han pujado y organizado parte importante del malestar que protagoniza la revuelta social de octubre 2019 en Chile, corriendo los límites de la política de la “agenda o departamento de género” de la transición, proyectándose “un feminismo ligado a la conflictividad social y no de cupo” en palabras de la feminista Verónica Gago. Un proceso de totalidad y no de acontecimiento o particularidad, que ha traído de vuelta a lo público la huelga general, los

“

En este sentido, la violencia político-sexual adquiere un componente disciplinador en contextos de revuelta, vale decir, la tortura sexual contra las mujeres se configura como un doble castigo a una doble transgresión. La subversión a los imperativos de lo femenino, no solo en lo que respecta al lugar obligatorio para y por otros dentro de la institución familiar, sino que se torna literal y directa la transgresión del mandato de sumisión en la esfera pública que impone la estructura social. El mensaje es el siguiente: si la mujer no es controlada y subordinada por aquel a quien pertenece (familia, comunidad) será entonces reprimida con las mismas estrategias moralizadoras, por el Estado, quien deberá resguardar derechamente el orden económico conservador/financiero del neoliberalismo.

”

8 de marzo más masivos de la última década a nivel global en contra de los recortes, de la precarización de la vida porque “vivas, libres y desendeudadas nos queremos” como señalan las compañeras argentinas. Un proceso que ha develado la crisis de la reproducción social del capitalismo en su fase





neoliberal en contra de la vida. Esta es la crisis actual global, eso es lo que cruje hoy, lo que hace estallar malestares mayormente inorgánicos donde las mujeres son protagonistas. El agobio, el cansancio, la humillación de la carencia administrada con bonos y subsidios, la violencia -que se carga, mayormente, en las mujeres quienes suplen con sus cuerpos los cuidados que los bajos salarios y el alto endeudamiento no pueden pagar- recorren y unen al pueblo trabajador explotado.

Esos cuerpos femeninos -componentes de la conflictividad social- que portan rabia, cansancio e insumisión buscan ser disciplinados, nuevamente, en la protesta contemporánea por el orden autoritario conservador mediante el ejercicio de una violencia estatal específica en razón al género: la violencia política sexual, comprendiéndose como estrategia restauradora de dicho orden, y por lo mismo, como un acto de control y dominación que no solo ataca la integridad sexual de las mujeres y cuerpos feminizados hacia quien se ejecuta, sino que atenta contra los derechos humanos en un sentido mucho más amplio.

En este sentido, la violencia político-sexual adquiere un componente disciplinador en contextos de revuelta, vale decir, la tortura sexual contra las mujeres se configura como un doble castigo a una doble transgresión. La subversión a los imperativos de lo femenino, no solo en lo que respecta al lugar obligatorio para y por otros dentro de la institución familiar, sino que se torna literal y directa la transgresión del mandato de sumisión en la esfera pública que impone la estructura social. El mensaje es el siguiente: si la mujer no es controlada y subordinada por aquel a quien pertenece (familia, comunidad) será entonces reprimida con las mismas estrategias moralizadoras, por el Estado, quien deberá resguardar derechamente el orden económico conservador/financiero del neoliberalismo. Así las cosas, la violencia política recae sobre las mujeres mediante el uso de lo sexual como arma de guerra, atentando contra la completa integridad de cuerpos que amenazan la estructura conservadora resistiendo de manera explícita y manifiesta. Pretende lograr de esta forma, el desgaste físico y mental de las mujeres y feministas organizadas en la lucha contra el autoritarismo neoliberal, para favorecer la pérdida de libertad y autonomía, y así el

repliegue y quebrantamiento de la protesta social. Por esta razón, este tipo de violencia institucional puede recrudecerse y alcanzar matices brutales de deshumanización, como violaciones en grupo o violaciones mediante el uso de perros adiestrados, vejámenes ocurridos en la dictadura cívico-militar del 73, y que hoy muestra sus primeras señales.

Vivimos tiempos en que se comienza a escribir una nueva historia de lucha popular, la cual puede tener una salida de profundización democrática, con medidas políticas de ruptura con el neoliberalismo o correr el riesgo latente de que se imponga por la fuerza la salida autoritaria y devastadora que nos reserva una violencia específica para disciplinarnos.

Compañeras feministas, en particular quienes nos sentimos parte de aquellos sectores del feminismo que han sido claves para ir recuperando el problema de la clase y el género al calor de la lucha social -tan vapuleado en los 90 (años dorados del neoliberalismo criollo)-. Debemos seguir pujando, hoy más que nunca, por un feminismo de la lucha de clases que abre grietas a la hegemonía neoliberal en una revuelta popular que no aguanta miradas ni calculadoras cortoplacistas.

Daniela López Leiva es abogada, Directora de la Fundación Nodo XXI y AML Defensa de Mujeres.

Francisca Millán Zapata es abogada, fundadora AML Defensa de Mujeres.

Ana Paula Viñales es sicóloga feminista









EL ESTALLIDO CHILENO Y LAS TEORÍAS DE LA CRISIS CAPITALISTA

/ *José Miguel Ahumada*

El estallido social actual puede ser entendido en parte como el resultado de un ciclo de crecientes movilizaciones que se vienen registrando en la última década contra la mercantilización de dichas áreas claves para la reproducción social. En otras palabras, el capitalismo chileno mina sus condiciones de posibilidad (la mercantilización de los factores antes mencionados) al momento de sobre-explotar la tierra, transformar el ingreso para pensiones en capital-dinero, precarizar la dimensión de cuidados en el mundo del trabajo, y mercantilizar la producción de conocimiento.

“En medio de esta América Latina convulsionada veamos a Chile, es un verdadero oasis, con una democracia estable, el país está creciendo”

Presidente Sebastián Piñera (8 octubre, 2019)

1. **Introducción**

La sentencia del Presidente Piñera de que la economía chilena era un ejemplo para la región es una declaración, a vista de los actuales sucesos, exótica. Pero no es una anomalía para nuestra reciente historia económica. Ya a fines de los setenta, Milton Friedman había sentenciado que el crecimiento económico durante la dictadura correspondía a un verdadero milagro económico. Luego, a mediados de los noventa, el entonces director de Presupuesto del gobierno de Frei Ruiz-Table, Joaquín Vial, había señalado categóricamente que, luego de mucho tiempo, el boom económico de los noventa daba cuenta de que el país, finalmente, avanzaba firmemente hacia el desarrollo (Lahera & Toloza, 1998:148).

Más en general, ya en la década del 2000, diferentes economistas afirmaban que Chile era el ejemplo del éxito de la estrategia del Consenso de Washington, al punto que ponían al país como el contrapunto a cualquier crítica a los resultados de las reformas neoliberales en la región. ¿Cómo podían los críticos afirmar que las inestabilidades regionales a finales de la década de los noventa correspondía a los resultados del neoliberalismo si su más radical exponente, Chile, lograba un desempeño económico ejemplar?

Lo cierto es que por cada vez que se declaraba a Chile como país ejemplo, venía una fuerte contracción. Solo un par de años después de que Friedman señalara que Chile era un milagro, el país entró en su más aguda crisis económica después de la crisis de los treinta. El crecimiento guiado por el endeudamiento internacional (dirigido por los conglomerados financieros) y las exportaciones (dirigidas por nacientes conglomerados extractivos) logró una

recuperación a fines de los setenta (el ‘milagro’) solo a cambio de un boom de endeudamiento nacional insostenible y que estallara rápidamente en 1982. El milagro, de esta forma, se erigió sobre pilares cortoplacistas de deuda.

A su vez, mientras Vial (y junto con él, la serie de destacados economistas de la Concertación) comentaba sobre el éxito ejemplar del Chile democrático, el país pasó de su crecimiento promedio alrededor del 7% durante los noventa, a una media década de estancamiento a partir del impacto de la crisis asiática. El otrora dinamismo sobre el cual se clamaba el éxito nacional, daba un rápido paso a un periodo de estancamiento y ralentización. Incluso los organismos internacionales dejaron de hablar de Chile (y seleccionaron otros ‘casos ejemplares’ como Perú y su crecimiento, o Costa Rica y su diversificación exportadora) mientras que varios economistas de la coalición política señalaban estupefactos los límites del modelo que antes clamaban (ver Díaz & Ramos, 1998).

El Presidente Piñera, de esta forma, solo repite el mismo libreto que ya hemos comentado. Declara la excepcionalidad chilena (‘oasis’) y su estabilidad económica y política en medio de una región convulsionada solo para, en un par de días, recibir el más importante estallido social de la democracia.

Sin embargo, hay una diferencia sustantiva. En los momentos anteriores, las contracciones eran de naturaleza directamente económica. Masiva crisis o largo estancamiento económico eran las variables que reflejaban el fin de un ciclo económico expansivo. Hoy la variable es directamente social y política. En efecto, el estallido (a diferencia de las jornadas de protesta nacional en los ochenta) no vino luego de ninguna crisis económica. La economía antes del 18-O no repuntaba, pero tampoco se veían signos de caída. Los datos macro no indicaban ningún problema económico relevante: el Imacec de agosto del 2019 (3.6) señalaba el mejor desempeño de la economía desde octubre del 2018, el desempleo se mantenía alrededor de un 7% y las exportaciones, si bien cayeron un 8% como efecto de la guerra comercial, no era una caída suficiente para ser una preocupación importante.

El estallido se dio en un contexto de un orden económico, a primera vista, estable. Dicha situación abre una incógnita. Si no había una crisis o recesión

económica, ¿cómo se podía económicamente explicar el estallido? Dicha pregunta ha abierto un conjunto de respuestas que, si bien no se hacen explícita directamente, sí se observan en los diagnósticos y estrategias por las que han optado cada actor político. Si se pudieran sistematizar, se pueden observar dos lecturas que se disputan la hegemonía de los términos del debate actual. Al margen de las diferencias que observaremos, dichas lecturas poseen una visión común respecto a la dimensión económica-política. Lo que se planteará luego de presentar el debate que sucede hoy, será una lectura alternativa que enfatice la economía política de la crisis actual.

2. Las explicaciones económicas de estallido: entre Schumpeter y Keynes

Mientras el gobierno desplegaba sus cuerpos policiales y militares en las calles, la elite política buscaba diferentes hipótesis para comprender qué línea estratégica tomar. Y las ideas que se han observado se pueden condensar y comprender a partir de dos lecturas económicas clásicas de las crisis capitalistas, las de Schumpeter y Keynes.

Para Schumpeter, el capitalismo como orden social tenía un defecto endógeno, que no provenía de sus 'contradicciones económicas' que llevarían al orden a un estancamiento material creciente, como defendían los marxistas, sino de un fenómeno de carácter económico-cultural (Schumpeter, 1928). La burguesía, como clase, se caracterizaba por su motivación de lucro, por la acumulación de capital a partir de la intensa competencia intra-clase en el mercado, siendo aquello precisamente lo que le brindaba su inherente dinamismo. Sin embargo, aquello se realizaba a costa de abandonar su rol dirigente. La burguesía podía, dada la estructura productiva, no solo movilizar recursos de forma eficiente, sino crear nuevas estructuras más productivas, aumentando la torta económica en forma creciente. Pero ese juego interno le impedía ejercer un rol político de conductor sobre la sociedad.

En efecto, aumentar la torta no necesariamente se traducía en mayores niveles de apoyo social al orden económico. Crecimiento no da legitimidad. Por el

contrario, mayor dinamismo genera mayores ingresos y mayores demandas políticas por parte de la sociedad, aumentando su organización y capacidad de presión. De esta forma, el orden económico se encontraba, por un lado, con una clase sin capacidad de dirigir y, por otro, con una creciente masa social organizada explotando en capacidad de demandarle recursos y acceso a poder al orden político y económico. Así visto, el capitalismo, relataba Schumpeter, moriría por 'depresión', por falta de confianza en sí mismo, por incapacidad política de sus elites de defender su éxito material.

Aquella idea está detrás de gran parte de las reflexiones actuales. Por un lado, tanto la derecha como parte de las elites políticas de la vieja concertación han erigido dicha idea de crisis. El asunto de fondo es que las elites tanto políticas como económicas han sido incapaces de difundir los éxitos del tipo de crecimiento al resto de la población. El profesor Carlos Peña lo relata en forma prístina: el desarrollo capitalista conducido en su mayor parte por los gobiernos de la centro-izquierda ha integrado a la población al consumo y permitido el acceso a bienes y cultura posicional (que fortalece la distinción y el status) de forma nunca antes imaginada. Aquello ha desplegado una base social que, lejos de aprobar dicha integración, la crítica debido a la anomia y creciente capacidad de incrementar las demandas en forma permanente que llegan con todo proceso de modernización exitosa. Por desgracia, señala el rector, aquel dinamismo económico no ha venido de la mano de una elite política y económica que defienda aquellos triunfos materiales. Más bien se constituyen elites incapaces de liderar, de defender sus logros, de levantar voz frente a la pulsión de la masa. Sin defensores en la elite y con crecientes críticos en la base social, el éxito económico del capitalismo chileno genera las semillas culturales de su propia destrucción.

Esa misma tesis es la defendida, en otro terreno, por parte de la derecha política. Diferentes académicos e intelectual públicos han sostenido cómo la derecha se ha quedado sin ideas, presos de cierta visión economicista de lo social, e incapaz de detectar cómo emergía un descontento subyacente con el liberalismo económico que, al margen de su notable éxito material, no desplegaba un relato convincente para su aceptación. El último en defender

“

En los momentos anteriores, las contracciones eran de naturaleza directamente económica. Masiva crisis o largo estancamiento económico eran las variables que reflejaban el fin de un ciclo económico expansivo. Hoy la variable es directamente social y política. En efecto, el estallido (a diferencia de las jornadas de protesta nacional en los ochenta) no vino luego de ninguna crisis económica. La economía antes del 18-O no repuntaba, pero tampoco se veían signos de caída. Los datos macro no indicaban ningún problema económico relevante: el Imacec de agosto del 2019 (3.6) señalaba el mejor desempeño de la economía desde octubre del 2018, el desempleo se mantenía alrededor de un 7% y las exportaciones, si bien cayeron un 8% como efecto de la guerra comercial, no era una caída suficiente para ser una preocupación importante. El estallido se dio en un contexto de un orden económico, a primera vista, estable.

”

aquella idea fue Carlos Larraín: el liberalismo económico, sentenció, había construido un sujeto materialmente exitoso y con una creciente capacidad de demandar derechos individuales, pero desconectados de sus lazos comunitarios anteriores que le daban cierta conducción en su vida diaria y sin ninguna brújula más que su creciente apetito por mayores derechos y recursos¹.

1 <https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/carlos-larrain-lo-que-estamos-presenciando-hoy-es-el-fracaso-del-liberalismo/47XOCWYJD5CBXKTONB4BM3RUT4/>

De aquella lectura, la crisis social se vuelve una paradoja de la abundancia. A mayor crecimiento, más 'relajamiento' político de la elite, mayor presión por nuevas demandas en la población y, como síntesis, una masa social políticamente descontenta frente a una elite desarticulada. El capitalismo construyó sus propios sepultureros, pero estos no eran el proletariado sometido al mandato del capital, sino una exitosa clase media emergente que, sin una dirección política de una elite con capacidad dirigente, explotó en demandas al punto de hacerlas incompatibles con el mismo orden que permitió que llegaran a ese nivel material².

De aquellas complejas hipótesis económicas y políticas detrás de las tesis de parte importante de las elites nacionales se derivaban planes de acción (e inacción) importantes. La serie de medidas del gobierno de subsidio a la empresa para aumentar el salario mínimo, la reforma tributaria y al sistema de pensiones son mecanismos cuya racionalidad subyacente es únicamente contener, temporalmente, a dicha masa y sus excesivas demandas. En último término, es ganar tiempo, para que la elite intente desplegar una capacidad dirigente. Por ejemplo, Velasco & Briebe (2019) reclaman la necesidad de un nuevo centro político que supere la incapacidad de la derecha de brindar un relato más allá del economicismo típico de la hegemonía Chicago-gremialista, y proponen un nuevo relato económico-político que reconstruya un sentido de proyecto de país. En el mismo eje estratégico de largo plazo se encuentran todos los jóvenes intelectuales de derecha que hoy reclaman un proyecto que abandone el economicismo en pos de un nuevo comunitarismo de raíz conservadora.

Pero aquella no es la única hipótesis en cuestión. Si bien aquella tiene como defensores un amplio espectro que va de intelectuales y políticos de la centro izquierda y la derecha, existe otra que también cruza dichas fronteras políticas y que podría definirse como típicamente keynesiana. John Maynard Keynes también problematizó la crisis capitalista pero, a diferencia de Schumpeter, veía en la dimensión estrictamente económica la fuente del problema. Para

2 Una hipótesis heredera de la señalada por Schumpeter se puede observar en Daniel Bell (1977) y en el famoso Informe de la Comisión Trilateral de 1975.

el economista, el capitalismo de *laissez faire* tenía una fuerza dinámica endógena que permitía un salto en el nivel de producción y consumo a niveles no vistos en sociedades anteriores. En aquel punto se encuentra con la hipótesis descrita anteriormente. Sin embargo, y he aquí la diferencia, Keynes consideraba que ese dinamismo podía verse interrumpido y sustituido por un estancamiento general derivado de shocks exógenos. Una caída de la producción no implicaba una necesaria vuelta a la normalidad a partir de los mecanismos automáticos del mercado, muy por el contrario, una caída puede presionar a una profundización de la misma de no mediar fuertes intervenciones públicas. En tanto las inversiones se realizan motivadas por ganancias futuras, y ese futuro es inherentemente incierto, un clima presente de estancamiento puede generar expectativas negativas en los inversionistas, absteniéndose de invertir y, así, profundizando el estancamiento en un círculo vicioso. Visto así, el estancamiento podía ser no solo un fenómeno coyuntural, sino constituirse en permanente (Keynes, 2014 [1936]).

Aquello no era solo problemático en términos económicos, sino socio-políticos. Keynes señalaba que el capitalismo tendía a generar fuertes desigualdades entre capital y trabajo, pero dicha desigualdad podía ser aceptada y legitimada por el trabajo siempre en la medida en que el resultado de aquello sea una economía cada vez más productiva, aumentando la torta y, por tanto, los ingresos absolutos de la población. El capitalismo legitima su desigual distribución de la propiedad a partir de su promesa de dinamismo económico (Keynes, 2009 [1931]). De no haber dinamismo, dicha desigualdad pierde su aceptación y comienza un ciclo de inestabilidad política, amenazando la existencia del propio orden.

La salida típicamente Keynesiana es que, para salvar la libertad que emanaba del capitalismo de *laissez faire* había que, precisamente, limitar su accionar. Una serie de inversiones públicas, políticas tributarias progresivas y activas políticas fiscales y monetarias para restablecer el crecimiento y reducir la desigualdad eran necesarias para generar señales de estabilidad y ‘vuelta a la normalidad’ del orden económico de forma de volver a aumentar la credibilidad de un futuro promisorio, resultando así en un aumento de la inversión



LA DIGNIDAD EX PLAZA ITALIA

WOM

Can

Can





privada. El capitalismo, dinámico en el largo plazo, debía ser salvado de sí mismo en el corto plazo.

Aquella idea ha ganado creciente apoyo en diversas elites. Desde Mario Desbordes³ a Joaquín Lavín⁴ por la derecha, han enfatizado la necesidad de reformas profundas al sistema económico chileno. En particular, señalan que el modelo agotó su dinamismo y que la ausencia de derechos sociales ha generado una politización creciente que solo puede superarse con un rol activo del Estado en materia social e incluso de estímulo al crecimiento. Aquello se sostiene en directa crítica al rol subsidiario del Estado y a la creencia (tan clásica de la derecha gremialista) del carácter automático del mercado para asegurar el pleno uso de las capacidades productivas.

Sin embargo, no es únicamente en la derecha donde aparece esta hipótesis. En forma más sostenida, Nicolás Eyzaguirre defiende el mismo punto en su reciente publicación y entrevistas⁵ (Eyzaguirre, 2019). Según señala, el principio meritocrático sobre el cual la desigualdad se había legitimado en los noventa (esto es, la afirmación de que, al margen de la desigualdad, existen rieles claros y accesibles a todos para que puedan escalar socialmente), se quebró cuando el crecimiento perdió su dinamismo de antaño. Con un crecimiento estancado desde hace tiempo, la promesa meritocrática pierde su validez (menor calidad de empleo, salarios estancados, etc.) y se quiebra el cemento ideológico que justificaba la desigualdad. La crisis social sería, de esta forma, un fenómeno típicamente keynesiano: estancamiento económico (derivado de el círculo vicioso de inversiones sub-óptimas) reduce las chances de movilidad social, aquello impacta en una pérdida de creencia en la meritocracia, derivando en una ilegitimidad de la distribución de ingreso y de la propiedad en la sociedad y resultando, finalmente, en una crisis social. Si la receta tomada hasta este momento (libre comercio y estado subsidiario) ya no garantiza el dinamismo de antaño, la única forma de salvar el orden es una elite política

3 <https://www.latercera.com/politica/noticia/mario-desbordes-presidente-rn-modelo-requiere-urgentes-profundas-correcciones/878540/>

4 <http://www.nuevopoder.cl/j-lavin-chile-necesita-una-nueva-carta-y-un-nuevo-modelo-economico/>

5 Diario Financiero, 27 enero, 2020, p. 18-19.

que, pragmáticamente, permita un rol más activo del Estado tanto en el terreno productivo como redistributivo. El pragmatismo debe superar la fe ciega en el dinamismo del capital, precisamente para salvar al capital.

Como se puede observar, estas tesis en disputa traspasan las fronteras de los bloques políticos. Mientras de una se derivan medidas encaminadas a calmar las demandas excesivas de la población y ganar tiempo, de la otra se derivan cambios relativamente sustanciales en el orden productivo y redistributivo. La primera sostiene que el capitalismo está preso de su propio éxito, la segunda ve que está preso de su estancamiento. Una ve en la población una masa con una exuberancia irracional, la otra una masa engañada con la promesa del mérito. De cualquier forma, ambas ven en el crecimiento económico (ya sea dinámico o no) la causa última del asunto en cuestión.

Sin embargo, ambas teorías de las crisis (que bien permiten entender el debate dentro de las elites hoy) son insuficientes para una lectura profunda del asunto en cuestión. Ambas lecturas hablan de un capitalismo y de un crecimiento en abstracto, sin características específicas y sin un análisis de sus tensiones con sus condiciones de posibilidad materiales. En lo que sigue, daremos una lectura alternativa al respecto.

3. Capitalismo y crisis social

El capitalismo chileno se estructura como un específico régimen de acumulación, resultado de la complementariedad de cinco elementos: un tipo de Estado de carácter subsidiario, un patrón de inserción liberal en el mercado global, un rol clave del capitalista como inversionista, un mercado laboral flexible y un sector financiero privado. Dicho régimen permitió un gran dinamismo en los noventa pero, por sus propias características endógenas, genera como resultado hoy un conjunto de contradicciones en diferentes dimensiones que estallan políticamente en la actualidad. Estas contradicciones suceden en dos dimensiones: una es interna al funcionamiento de la economía, y otra entre el funcionamiento económico con sus premisas materiales de existencia (sobre la crisis interna a la economía y entre la economía y sus condiciones de posibilidad, ver Fraser & Jaeggi, 2018).

La primera contradicción es con sus propios resultados económicos agregados. El Estado subsidiario se constituyó bajo la premisa de que, dejando al mercado (tanto interno como en su inserción con el mundial) y a las decisiones privadas el control sobre la inversión, el resultado sería un despliegue productivo como el pronosticado por Schumpeter. De ahí se justificaba, a su vez, la apertura comercial y el mercado flexible en el plano laboral. Sin embargo, el patrón liberal de inserción en el comercio internacional generó un fuerte proceso de especialización exportadora primaria. En efecto, luego del ciclo de TLCs y la liberalización unilateral, las exportaciones han crecido pero siempre girando en torno a los sectores de competitividad espuria como lo es el sector frutícola, forestal, pesquero y cuprífero. Dichos sectores, de débil dinamismo tecnológico y bajos encadenamientos productivos, han tenido un tipo de crecimiento expansivo, esto es, de crecer a partir de extender territorialmente sus dinámicas de acumulación. Aquello brindó un periodo de fuerte dinamismo (la apertura comercial aumentó la demanda, lo que estimuló la acumulación expansiva durante todo el periodo) pero que en la actualidad se enfrenta a una profunda tendencia de rendimientos decrecientes. La tasa de crecimiento anual del sector pesquero está en su peor momento debido a la sobreproducción en lagos y canales y el colapso de la biomasa, mientras que el sector forestal agostó su frontera de producción nacional, condensándose en un estancamiento en su crecimiento. A excepción del sector vitivinícola, el resto de los sectores de recursos naturales tiene un crecimiento en el periodo actual (2004-2016) considerablemente por debajo del periodo anterior (1990-2003) (ver Ffrench-Davis & Díaz, 2019).

Mientras el dinamismo exportador entra en una fase de rendimientos decrecientes, las inversiones de los grupos económicos nacionales y de las principales inversiones extranjeras se concentran en actividades de carácter rentista, tanto en el plano extractivo, comercial como financiero. Aquello no es por falta de 'cultural empresarial', como algunos quieren hacer creer, sino porque, dada las características del mercado interno, es lo más racional si el objetivo es acumular capital. Por ejemplo, el grupo Matte se concentra en la explotación oligopólica forestal (rentas de recursos naturales), Cencosud en el control oligopólico de las principales plataformas de venta de bienes (su-

permercados), lo que les da un poder de mercado que les permite acumular rentas sobre los productores directos (integración vertical y control sobre productores pequeños) y consumidores (colusión) y Luksic sobre el sector minero, forestal, pesquero y telecomunicaciones.

“

La baja inversión en capacidades productivas e I+D junto con la especialización extractiva explican las causas estructurales de que la economía, luego del boom de los noventa y la década de crecimiento guiado por el shock exógeno de los precios de los commodities, haya entrado en un estancamiento secular. El boom de crecimiento guiado por exportaciones extractivas de los noventa e inversiones rentistas, concluyó con un crecimiento alrededor del 1.5% en la última media década.

”

Las inversiones extranjeras, por su parte, tienen el mismo comportamiento que la clase capitalista nacional. Sus principales inversiones van a minería, adquisición de oligopolios de los servicios internos y sector financiero. Todos sectores que acumulan rentas, ninguno que aumente las capacidades productivas o tecnologías del territorio. Si la formación bruta de capital fijo equivalía a un 25% promedio en el periodo 1990-1998, hoy ha caído a un promedio de 23% en el periodo 2010-2019 y a 21% en los últimos años. A su vez, la inversión en I+D alcanza el 0.3% del PIB y solo el 30% es brindado por el mundo privado⁶.

6

Datos obtenidos del World Development Indicators.

La baja inversión en capacidades productivas e I+D junto con la especialización extractiva explican las causas estructurales de que la economía, luego del boom de los noventa y la década de crecimiento guiado por el shock exógeno de los precios de los commodities, haya entrado en un estancamiento secular. El boom de crecimiento guiado por exportaciones extractivas de los noventa e inversiones rentistas, concluyó con un crecimiento alrededor del 1.5% en la última media década.

Aquellas características de los grandes capitales, tanto nacionales como extranjeros, impacta en el tipo de mercado laboral que existe. En tanto este es 'flexible', sus características se determinan por el lado de la demanda (esto es, por las necesidades del capitalista), y estas demandas tienen ciertas especificidades determinadas por sus estrategias de inversiones y áreas de especialización (comentadas en los párrafos anteriores). Dichas áreas requieren una fuerza laboral de baja cualificación (servicios comerciales, recursos naturales, etc.) que impactan en bajos salarios. Sumado a la débil organización sindical, el resultado es no solo bajos salarios, sino contratos inestables e incertidumbre laboral.

Pero a ello se le suma un elemento adicional. Grandes inversiones subcontratan servicios específicos o establecen relaciones comerciales verticales con pequeñas y medianas empresas, lo que repercute en que el empleo del 60% de la fuerza laboral (que está en Pymes) sea aún más inestable y frágil.

En síntesis, el régimen de acumulación genera, por sus propios pilares constitutivos, un bajo crecimiento, bajos salarios e precariedad laboral. Dichos resultados, así vistos, no son producto de la 'falta de competencia' o del 'capitalismo de amigos', como se ha señalado en la prensa, sino productos de un tipo de crecimiento de carácter periférico, anclado en recursos naturales y en inversiones rentistas. Sus resultados agregados son contradictorios con lo que necesita el régimen para sostenerse en el tiempo, esto es, crecer dinámicamente (como lo realizó, brevemente, en los noventa).

Lo anterior no es la únicamente dimensión de las contradicciones del capital. Polanyi (2006 [1944]) sostenía que una dimensión provenía no del funcionamiento interno de la circulación de capital, dado sus condiciones de posibili-

dad materiales, sino precisamente en las tensiones que genera la acumulación con esas condiciones mismas. El capital para funcionar necesita, como premisa, la mercantilización de los principales factores productivos (tierra, trabajo, dinero, conocimiento). Es sobre esas bases que el mercado puede devenir en el principio que determina la producción material de una sociedad. Sin embargo, Polanyi afirmaba, el dinamismo capitalista a medida que se expandía, minaba dichas áreas mercantilizadas. En otros términos, en dichas dimensiones el valor de cambio destruía el valor de uso de las mercancías.

Parte importante del ciclo de movilizaciones que se han venido dando en la última década dice relación con precisamente la desmercantilización de áreas claves para la reproducción social. El movimiento estudiantil se erige en pos de sacar el mercado del plano de la educación, en tanto dicha mercantilización impactaba en una educación segregada. El ciclo de movilizaciones en torno a las zonas de sacrificio (tanto en áreas forestales como mineras) se erigen contra las destrucciones ambientales que ha implicado la expansión extractivista del patrón de exportaciones. A su vez, el levantamiento feminista se erige, en parte (aunque sobredeterminado por otras formas de dominación patriarcal), en oposición a la precariedad que existe en el plano de los cuidados y de la reproducción, resultado directo de la precariedad laboral del régimen de acumulación actual. Las protestas contra el sistema de pensiones son un levantamiento contra la mercantilización de sus ingresos y su transformación de una función social (proveer buenas pensiones) a capital-dinero (ser fuente para la circulación de capital).

El estallido social actual puede ser entendido en parte como el resultado de un ciclo de crecientes movilizaciones que se vienen registrando en la última década contra la mercantilización de dichas áreas claves para la reproducción social. En otras palabras, el capitalismo chileno mina sus condiciones de posibilidad (la mercantilización de los factores antes mencionados) al momento de sobre-explotar la tierra, transformar el ingreso para pensiones en capital-dinero, precarizar la dimensión de cuidados en el mundo del trabajo, y mercantilizar la producción de conocimiento. Aquello despliega, como resultado emergente, un levantamiento espontáneo (no planificado por algún

alguna estructura política central) de diferentes grupos sociales contra dicha tendencia, resultando en crecientes levantamientos.

En síntesis, el régimen de acumulación nacional posee dos dimensiones de contradicciones. La primera es con sus propios resultados agregados. El estancamiento económico actual (derivado de sus pilares constitutivos) hace pensar que, por sus propias fuerzas, el orden es incapaz de reconstruir un crecimiento sostenible en el tiempo. En este punto, la crítica Keynesiana con la nuestra se encuentran. Sin embargo, las causas que se identifican son diferentes. Aquí el asunto es el carácter periférico de nuestra economía (acumulación rentista y patrón extractivo) que carece de fuerzas de largo plazo (no de corto plazo, como señala la posición keynesiana) que le permitan tener un dinamismo como el que se observan en casos de desarrollo productivo exitosos (Finlandia, Corea del Sur, etc.).

Sin embargo, esa crítica (que aparece en forma creciente en la literatura económica sobre Chile) no problematiza la dimensión de la acumulación de capital con sus condiciones materiales de posibilidad, esto es, la mercantilización de los principales factores productivos. Esto es materia de una crítica diferente (aunque complementaria). El ciclo de movilizaciones es, en gran parte, contra los resultados de la mercantilización de la tierra, la educación, los servicios sociales y el trabajo y solo indirectamente sobre el tipo de crecimiento.

Contrario a la tesis schumpeteriana de parte de la elite política, el orden económico no está gozando de una modernización capitalista. Por el contrario, su crecimiento es de corta duración y anclado en pilares con poca fortaleza para estimular un nuevo periodo de dinamismo. A su vez, el estallido es menos el resultado de una masa incrementando sus demandas como un momento de un ciclo de protestas contra las contradicciones entre la acumulación capitalista y sus condiciones materiales de reproducción.

Pero la hipótesis keynesiana que predomina en ciertos sectores de la elite, si bien correcta en identificar la ralentización económica un elemento importante en el análisis, es ciega a cómo un elemento determinante en la crisis son

las contradicciones del capital en los planos claves de la reproducción social y se queda en un análisis economicista.

Lo que hemos propuesto en este artículo es una lectura de la crisis capitalista a partir de dos dimensiones, una interna a su desarrollo y otra entre su desarrollo y sus condiciones de reproducción. Ambas dimensiones se entienden como resultados de un mismo régimen de acumulación de carácter extractivo y rentista. De esta forma, el asunto de fondo no es, como sostiene la elite, de calmar las demandas sociales o realizar reformas en dimensiones que reconstruyan las confianzas y vuelvan a estimular las inversiones privadas, sino precisamente de construir un proyecto de desarrollo que eriga un crecimiento sostenible en el largo plazo (proyecto que pasa por reducir el poder de los que controlan la inversión hoy, en tanto, son sus decisiones las que determinan el patrón de crecimiento) y desmercantilice las áreas claves de la reproducción social (en tanto esas dimensiones, cuando están dirigidas por la acumulación, se precarizan y, en el peor de los casos, se destruyen).

El debate sobre el estallido, así visto, abre la puerta a diversas teorías de la crisis capitalista. Lo que hemos intentado hacer aquí es sistematizar las posiciones analíticas que hoy están esgrimiendo las elites y presentar un esbozo de lo que podría ser una posición alternativa de la crisis capitalista que ponga el énfasis en el tipo de crecimiento periférico y en las contradicciones del capital con sus condiciones de posibilidad. Dicha teoría de la crisis para nuestro contexto está aún en formación, pero es necesaria no solo para disputar las teorías alternativas, sino para colaborar con una estrategia política que pueda asumir el desafío del presente.

Bibliografía

- Bell, D. (1977). *Las contradicciones culturales del capitalismo*. España: Alianza editorial.
- Eyzaguirre, N. (2020). *Desigualdad*. Penguin Random House: Chile.
- Ffrench-Davis, R.; Díaz, A. (2019). 'La inversión productiva en el desarrollo económico de Chile: evolución y desafíos'. *Revista de la CEPAL*, No. 127, p. 27-53.
- Fraser, N.; Jaeggi, R. (2018). *Capitalism*. Polity: Estados Unidos.
- Keynes, J.M. (2014 [1936]). *La teoría general de la ocupación, el interés y el dinero*. Fondo de Cultura Económica: México.
- Keynes, J.M. (2009 [1931]). *Ensayos de persuasión*. Síntesis: España.
- Polanyi, K. (2006 [1944]). *La gran transformación*. Fondo de cultura económica: México.
- Schumpeter, J.A. (1928). 'The instability of capitalism'. *The Economic Journal*, 38(151), 361-386.
- Velasco, A.; Briebe, D. (2019). *Liberalismo en tiempos de cólera*. Debate: España.

José Miguel Ahumada es economista, Doctor en Estudios de Desarrollo de la Universidad de Cambridge, y académico del Instituto de Estudios Internacionales, Universidad de Chile







LA CIUDAD COMO SISTEMA

/ *Valentina Saavedra & Andrés Fielbaum*

Las movilizaciones de octubre 2019 tuvieron como detonante directo el alza en los pasajes de transporte público. Los primeros hitos fueron las evasiones masivas en el metro por parte de estudiantes secundarios. Por supuesto, las causas profundas son mucho más extensas que esta alza, y tienen que ver con una transición marcada por la desigualdad, los abusos y la precariedad. Sin embargo, los hechos reafirman el rol central que han adquirido los sistemas de transporte en nuestra capital en el siglo XXI.

La ciudad es el espacio donde nos desarrollamos y encontramos como sociedad, no es un mero escenario estático, sino que es parte de los procesos de cambios que vive la población y por lo tanto se consideran dinámicas e incidentes en el modelo de país del que somos parte. La distribución de la población, las zonificaciones, la construcción de nuestros barrios, entre otros, determinan nuestros movimientos, el uso del tiempo, posibilidades de desarrollo e incluso nuestra amplitud de relaciones sociales. En ellas la vialidad y movilidad son fundamentales, en cuanto conectan los diferentes componentes del territorio, el que entre más desigualmente distribuido está, más requiere de un sistema de transporte que sopesa las falencias de la planificación urbana.

En Chile, y en particular en Santiago, contamos con una ciudad profundamente desigual y segregada; donde se han ido concentrando servicios, centros laborales y equipamiento en pocas comunas o zonas, despojando a la ciudadanía de su derecho hacer y vivir la ciudad y el territorio. Por una parte, por las dificultades de acceso a esta y por otra parte por la privatización a la que se ha sometido, que imposibilita a la población a habitarla y transformarla. En esta línea, el desarrollo del transporte se transformaría en una medida paliativa ante el nivel de segregación socioespacial de la ciudad. Lo que implica que es el factor de dependencia para el acceso a la ciudad, a la educación, la salud, el trabajo, espacios de recreación, etc., asumiendo un rol del tipo de servicio básico para la población.

Sin embargo, la desregulación que ha sufrido durante décadas ha implicado que el sistema de transporte renuncie a poner en el centro su rol en torno a la conectividad y construcción de ciudad como un aparato sistémico y más bien, ha reproducido una lógica de privatización y priorización del transporte privado por sobre el transporte público y medios alternativos de movilidad.

Usa la autopista, Perico

Hasta mediados de los años '70, el sistema de transporte público estaba fuertemente controlado por el Estado y existían proyectos y voluntades para generar una distribución más heterogénea de la población en el territorio. Desde 1979, en medio de las reformas neoliberales, la dictadura decidió desregular

el transporte público en todo Chile: progresivamente se fueron otorgando (casi) libremente autorizaciones ministeriales para cualquier línea nueva y se otorgó plena libertad a los operadores para definir la tarifa de cada bus¹. El argumento ideológico era el equivalente al usado en todas las demás áreas de la vida que fueron privatizadas: la competencia por ofrecer mejores niveles de servicio se traduciría en un mejor transporte público para todos. La realidad, sin embargo, fue que la desregulación significó fundamentalmente ganancias para los empresarios del transporte y mayor segregación para los usuarios.

Al mismo tiempo, en términos urbanos se generaron procesos de subdivisión de comunas en la región Metropolitana y desde mediados de la década de 1970 comenzaron procesos de erradicación de la población más pobre, que trasladó entre 28 mil y 120 mil familias en la Región metropolitana a comunas de la periferia². La que, si bien históricamente se ha localizado en zonas marginales y periféricas, en esta ocasión sufrió una expulsión intencionada de los centros de servicios y laborales y se hizo un esfuerzo explícito de agruparlas lejos de los sectores con mayores ingresos. El argumento para estas medidas se basó en la supuesta mejora de la eficiencia de los programas sociales a través de la focalización para la selección de destinatarios de vivienda y mejoramiento de barrios³. Lo que cristalizó un modelo de profunda segregación socioespacial en la configuración de la ciudad, ya que la construcción de villas y barrios de la población de bajos ingresos, se proyectó en grandes paños de vivienda con un mínimo de servicios, equipamientos y espacios de recreación, sin contemplar que ante dicha carencia, se generaría una mayor necesidad de movilidad en la ciudad.

Si bien la desregulación del transporte público produjo un aumento severo tanto en la flota de vehículos como en la tarifa, lo que se reflejó en que la

1 Figueroa, Oscar. “La desregulación del transporte colectivo en Santiago: balance de diez años.” *Revista EURE-Revista de Estudios Urbano Regionales* 16, no. 49 (1990).

2 Sugranyes, A., & Rodríguez, A. (2005). *Los con techo, un desafío para la política de vivienda social*. Santiago: SUR.

3 Raczynski, D. (1995). *Focalización de programas sociales: lecciones de la experiencia chilena*. En D. R. Joaquín Vial, *Políticas económicas y Sociales en el Chile Democrático* (págs. 217-225). CIEPLAN.

flota creció a más del doble, disminuyendo los tiempos de espera y caminata, esto se consiguió empeorando la congestión, el ruido y la contaminación⁴. La mentada liberalización nunca fue tal, pues el sistema siguió operando como un cartel⁵, con lo que la tarifa real creció en 147% entre 1979 y 1988. Este au-

“

Desde 1979, en medio de las reformas neoliberales, la dictadura decidió desregular el transporte público en todo Chile: progresivamente se fueron otorgando (casi) libremente autorizaciones ministeriales para cualquier línea nueva y se otorgó plena libertad a los operadores para definir la tarifa de cada bus. El argumento ideológico era el equivalente al usado en todas las demás áreas de la vida que fueron privatizadas: la competencia por ofrecer mejores niveles de servicio se traduciría en un mejor transporte público para todos. La realidad, sin embargo, fue que la desregulación significó fundamentalmente ganancias para los empresarios del transporte y mayor segregación para los usuarios.

”

mento fue insostenible para un porcentaje relevante de la población, que dejó de contar con un servicio de transporte público asequible, provocando que el número de personas que se desplazaban diariamente a pie aumentase de 17%

4 Fernández, D. (1994). The modernization of Santiago's public transport: 1990–1992. *Transport Reviews*, 14(2), 167-185.

5 Gschwender, Antonio. "Improving the urban public transport in developing countries: the design of a new integrated system in Santiago de Chile." *Thredbo* 9 (2005).

a 31% en el mismo período, dificultando principalmente a quienes debían cubrir largos trayectos y no contaban con recursos para eso. El ideologismo pro-competencia fue incapaz de prever que los conductores pasarían a correr en las calles para llegar antes a los paraderos de modo de incrementar sus ingresos, constituyendo un sistema muy inseguro, de baja calidad y propenso a los accidentes.

El discurso del éxito individual y del debilitamiento de los servicios colectivos tuvo un ejemplo paradigmático en transportes. La campaña publicitaria “Cómprate un auto Perico”, protagonizada por Nissim Sharim y Delfina Guzmán, fue de las más exitosas y simbólicas de la década de 1980; y es que el automóvil juega un rol central en la construcción de un imaginario en el que los destinos de cada cual no se interrelacionan, por la autonomía directa que proviene a la hora de movilizarse y la posibilidad de hacerlo sin relacionarse con desconocidos en el trayecto. La iniciativa no se quedó sólo en el discurso: la cantidad de autos por cada mil personas casi se duplicó entre 1977 y 1991. Su uso diario aumentó desde 11,6% a 19,7%; si bien cantidades aún bajas, esta tendencia al alza nunca se modificó.

La llegada de la transición transformó el sistema de transporte público santiaguino “en la medida de lo posible”. La desregularización se transformó, desde 1991, en licitaciones de las líneas: a partir de la segunda licitación, el 97% de las ofertas proponían la máxima tarifa permitida, y el 76% ofertaba solamente por una línea, mostrando que la capacidad de actuar como cartel se mantenía. Las principales características del sistema desregulado se mantuvieron y crecieron durante los '90: pocos trasbordos, bajos tiempos de espera y caminata, al costo de ruido, contaminación, congestión, poca seguridad (pues se mantenían las competencias por pasajeros en las calles), a lo que se suma la poca mantención y limpieza en las micros. El mayor control ocurrió con la tarifa, cuyo valor real se mantuvo relativamente constante por los siguientes quince años.

En la medida que este sistema de transporte público se perpetuaba, el uso del automóvil se seguía expandiendo, con un importante impulso desde el

gobierno de Ricardo Lagos con la construcción de las autopistas urbanas concesionadas. Este hito presenta al menos cuatro características a destacar:

- 1) La privatización del acceso a las calles. Siguiendo el impulso que fue privatizando bienes públicos por excelencia, como los servicios de salud y educación o las empresas sanitarias, la introducción de las autopistas concesionadas puso por primera vez una barrera económica (el TAG) para determinar quiénes podrían utilizarlas.
- 2) La construcción de estas autopistas requirió de un subsidio de aproximadamente dos mil millones de dólares⁶, además de garantías explícitas que asegurasen un ingreso mínimo para las empresas concesionarias. El desembolso público para construir las autopistas reveló de manera indelible la priorización a favor del transporte privado que ejerció el Estado chileno bajo los gobiernos concertacionistas.
- 3) El impacto urbano de las autopistas superó con creces a cualquier infraestructura vial previa. Desde los múltiples kilómetros en altura de Vespucio Norte y Sur, el tajo en la mitad del centro de Autopista Central, y Costanera Norte que “sería de las pocas autopistas del mundo que atravesaría el corazón de la ciudad trastornándola urbanística, arquitectónica y ambientalmente. Sería el único caso en que se impermeabiliza absolutamente el lecho de un río torrentoso - el Mapocho- a lo largo de cuatro kilómetros, para dar cabida al tramo subterráneo de la autopista, generando enormes dudas respecto de qué ocurrirá con el comportamiento hidráulico del río, el suelo vegetal adyacente y las napas naturales”⁷.
- 4) La consolidación de una estructura vial que pone en el centro la optimización del tiempo en tramos más extenso de punto a punto, lo que posterga el rol que tiene el entramado urbano en la generación de

6 Jara-Díaz, Sergio (2004). Transporte Urbano en Santiago: la carretera delante de los bueyes. Artículo publicado en el Anuario de Chile 2004/5, Universidad de Chile.

7 Basso, Leonardo. “El PTUS y la Costanera Norte: Una Relación Tormentosa”. Recuperado de <https://www.cec.uchile.cl/~tranvivo/tranvia/tv9/leo.html>.





vínculo y experiencia urbana, a la vez que su funcionamiento genera mayores niveles de segregación social y espacial y desarraigo con la ciudad, debido a aislamiento de barrios, pérdida de continuidad de vías intermedias y falta de contacto de la nueva estructura vial con la vida urbana y barrial⁸.

La construcción de estos megaproyectos contrastó directamente con las declaraciones de intenciones de los gobiernos de la época, resumidas en el Plan de Transporte Urbano para Santiago 2000-2010 (PTUS), que entre otros objetivos buscaba “preservar el porcentaje de uso de transporte público” (que decrecía año a año), “racionalizar el uso del automóvil” y entre otros medios sugería “dar prioridad en el uso de vías al transporte público”. Este contraste entre un discurso de defensa de los servicios básicos universales (socialdemócrata) y una forma de gobierno que promueve la mercantilización de estos fue un sello de la transición chilena⁹.

Planificación para algunos, pago para otros

En paralelo, la red de metro de Santiago comenzó un proceso de acelerada expansión. Hacia el fin de la dictadura, el metro contaba con 27,1 km, construidos íntegramente bajo tierra. Durante el gobierno de Patricio Aylwin se hacen los primeros anuncios respecto a nuevas líneas (la Línea 5 hacia La Florida), los que se han sucedido en los gobiernos siguientes hasta hoy. Antes de la inauguración de Transantiago 64,8 km de líneas habían sido sumados a la red, con las inauguraciones de las Líneas 4 (hacia Puente Alto), 4A y 5, además de extensiones de la Línea 2 tanto hacia el norte como hacia el sur. Pese a estas extensiones, pocos pasajeros podían realizar íntegramente su viaje en metro, y como los trasbordos debían pagarse aparte, el metro se usaba en mucho menor proporción que los buses, estando sus usuarios concentrados en los quintiles de mayores ingresos¹⁰.

8 Green, M & Moya, R (2005). “Las autopistas urbanas concesionadas Una nueva forma de segregación”. ARQ. N.60, p. 56-58.

9 Orellana, Víctor, and Fundación Nodo XXI. “La subsidiariedad en la política pública de educación superior en Chile (1980-2013).” Fundación Nodo XXI (2014).

10 Gómez-Lobo, Andrés. “Transantiago: una reforma en panne.” TIPS, Trabajos de Investigación en Políticas Públicas 4 (2007): 1-14.

Esta manera de expandir el Metro fue representativa de un paradigma en que la desigualdad y segregación urbana se combate moviendo a las personas, en lugar de planificando una mejor ciudad, lo que sin duda tiene repercusiones en los tiempos y posibilidades de acceso en la vida cotidiana. El desarrollo urbano en la ciudad de Santiago se redujo en gran parte a la subordinación del aparato estatal al interés de inmobiliarias, constructoras y empresas comerciales que vieron en la planificación territorial un inmenso negocio donde aumentar sus ganancias a costa de precarización de la vida de miles de personas. De esta manera, nos encontramos con situaciones como los amplios paños de vivienda social con escasa presencia de servicios y equipamientos en casi todas las comunas que bordean el límite urbano de la región, -con excepción del cono oriente- construidas a través de sistemas comandados principalmente por las empresas constructoras y subsidiadas por el Estado. O casos como estaciones de metro construidas en las cercanías de terrenos ya comprados por propietarios de líneas de malls, que funcionarían como facilitadores para el acceso a clientes, como podemos ver en las estaciones Plaza Egaña o Mirador, o también lo que ha sucedido con la ampliación de carreteras y urbanización para acceder a terrenos comprados por inmobiliarias que en su lógica de especulación, asumían que sería el Estado el que correría con ese gasto y que finalmente se cristalizó con la ampliación de la zona urbana del Plan Regulador Metropolitano el año 2011.

En pleno proceso de inauguración de las autopistas, se implementó el mayor cambio al sistema de transporte capitalino postdictadura: el Transantiago, inaugurado en febrero de 2007. El paralelo es relevante por las decisiones financieras involucradas: mientras las autopistas recibían millonarios subsidios para su construcción, el diseño de Transantiago exigía que se autofinanciara. El conocido desastre de los primeros meses tiene varias causas, pero dos de ellas se explican por el rol subsidiario del Estado en general y del transporte público en particular:

- La mencionada exigencia de autofinanciamiento: al sistema se le exigió, a grandes rasgos, mantener los mismos ingresos, pero incluyendo ahora al metro (pues las tarifas se integraron, permitiendo tras-

bordos), mejorando la flota e incorporando nuevas tecnologías. La única solución posible para que la caja cuadrara fue una reducción drástica en la flota, que pasó de unos 8.000 buses a menos de 5.000, muchos de ellos de mayor tamaño. La consecuencia directa de esta medida es una disminución en la calidad para los pasajeros, pues los tiempos de espera aumentan (recordadas son las inmensas filas que se formaban mientras los buses llegaban) y el nivel de hacinamiento empeora (lo que ocurrió tanto en los buses como en el metro). Cabe señalar que la mayor parte de los sistemas de transporte público regulados en el mundo cuentan con algún tipo de subsidio¹¹, ya sean operados estatal o privadamente.

- El ideologismo anti-Estado descartó desde el primer momento la posibilidad de una operación estatal del sistema de buses (pese a que el metro sí es estatal). A esto se le sumó, otra vez, el diseño de contratos extremadamente favorables a los operadores, que podían guardar hasta un 30% de su flota sin ser multados. El resultado es que el tamaño de la flota en las calles disminuyó aún más, agravando los problemas de frecuencia y hacinamiento. Para desarmar al gremio de microbuseros, Transantiago además concentró la operación en pocas empresas; años después, cada vez que una empresa presentaba problemas graves de financiamiento u operación, la incapacidad del Estado de operar el sistema generó que sólo se pudiesen hacer planes de salvataje, dejando en evidencia que esta dependencia absoluta en el sector privado pone en entredicho a la propia democracia.

Cabe destacar a la integración tarifaria como una de las principales virtudes del nuevo sistema, al asegurar una tarifa única para todos los usuarios (independiente de su origen y destino), y además permitió concebir efectivamente un sistema único¹². El metro se hacinó, pero dejó de ser uso de unos pocos.

11 Serebrisky, Tomás, Andrés Gómez-Lobo, Nicolás Estupiñán, and Ramón Muñoz-Raskin. "Affordability and subsidies in public urban transport: what do we mean, what can be done?" *Transport reviews* 29, no. 6 (2009): 715-739.

12 Pineda, Cristóbal. "El Germen". Medium. Acceso el 23 de febrero de 2019. <https://medium.com/@cristpineda/el-germen-673009c5919e>

Ésta fue de las pocas medidas que efectivamente implicaron un potencialamiento del transporte público, pero que lamentablemente se diluyó en medio de un sistema en crisis, al comienzo, y en medio de las alzas tarifarias, luego.

Y precisamente las alzas tarifarias se convirtieron en símbolo del desarrollo

“

La contradicción se hace patente: por un lado, jactarse de la construcción de líneas de metro y buses eléctricos de primer nivel a nivel continental; por el otro, aumentar las tarifas, convirtiendo al transporte público en un bien excluyente, pese a lo necesario que resulta para poder vivir en sociedad. Los 30 pesos, entonces, no son solamente un detonante: son una síntesis de un país que no solamente segregó en sus derechos básicos, sino que ahora también cobra cada vez más caro por acceder a ellos.

”

ulterior de Transantiago. Desde los \$380 iniciales, hoy y tras el congelamiento post 18-O, la tarifa en horario punta es de \$800; el sueldo mínimo en el mismo período creció en menor proporción. Para paliar el desastre inicial, se aprobó un subsidio para Transantiago, el que luego fue complementado con las constantes alzas, especialmente desde el año 2010. Las primeras alzas coincidieron con un incremento de la evasión, que nunca volvió a disminuir, reflejando la dificultad de pagar el pasaje para un porcentaje importante de las familias santiaguinas. Al mismo tiempo, el metro se ha seguido expandiendo en una dinámica que no siempre se puede explicar racionalmente, y nuevas autopistas se han seguido construyendo.

Merece la pena mencionar el sesgo de género que existe en la priorización del transporte privado, antes que el transporte público. Debido a que el mayor porcentaje de peatones en las ciudades suelen ser mujeres y el usuario del auto, hombres. Ya sea por la capacidad adquisitiva o por la distribución del uso del auto familiar. Esto se complementa con que se planifican rutas enfocadas en las labores productivas, invisibilizando las labores y por lo tanto rutas de cuidados y trabajo doméstico que requiere la sociedad para subsistir. Así, la construcción de autopistas urbanas, el cambio de dirección en hora punta de vías expresas o troncales o incluso las rutas del Transantiago, se han pensado en torno al movimiento de la población desde una perspectiva masculina de trayectos de la casa al trabajo, obviando recorridos necesarios a espacios educativos, de salud o cuidados. Lo que, sumado a la desigual distribución de equipamiento urbano, profundiza las dificultades que viven las mujeres en la ciudad.

De esta manera, el escenario global del sistema de transporte metropolitano en los últimos 30 años se ha constituido en un claro favorecimiento al automóvil privado, con un transporte público que pierde pasajeros año a año y un sistema privado fuertemente subsidiado por el Estado; más aún, el sistema público enfrenta un proceso paralelo de aumento de precio por un lado, y de dinámicas de empeoramiento y de mejoramiento de la calidad que se entremezclan por el otro, en el que se favorecen proyectos emblemáticos (las líneas de metro) por sobre mejoras universales (el sistema de buses).

Son 30 pesos y son 30 años

Las movilizaciones de octubre 2019 tuvieron como detonante directo el alza en los pasajes de transporte público. Los primeros hitos fueron las evasiones masivas en el metro por parte de estudiantes secundarios. Por supuesto, las causas profundas son mucho más extensas que esta alza, y tienen que ver con una transición marcada por la desigualdad, los abusos y la precariedad. Sin embargo, los hechos reafirman el rol central que han adquirido los sistemas de transporte en nuestra capital en el siglo XXI.

Y es que el desarrollo urbano de Santiago se ha reducido en gran medida a la subordinación del aparato estatal al interés de inmobiliarias, constructoras y

empresas comerciales que vieron en la planificación territorial un inmenso negocio donde aumentar sus ganancias a costa de precarización de la vida de miles de personas: amplios paños de vivienda social con escasa presencia de servicios y equipamientos en casi todas las comunas que bordean el límite urbano de la región (con excepción del cono oriente), construidas a través de sistemas comandados principalmente por las empresas constructoras y subsidiadas por el Estado; estaciones de metro construidas en las cercanías de terrenos ya comprados por propietarios de líneas de malls, que funcionarían como facilitadores para el acceso a clientes, como ocurre en las estaciones Plaza Egaña o Mirador; o la ampliación de carreteras y urbanización para acceder a terrenos comprados por inmobiliarias que en su lógica de especulación, asumían que sería el Estado el que correría con ese gasto, lo que finalmente se cristalizó con la ampliación de la zona urbana del Plan Regulador Metropolitano el año 2011.

De esta manera, para quienes no tienen acceso al automóvil privado, el uso del transporte público se ha convertido en una herramienta necesaria para poder acceder a distintas zonas de la ciudad en la que se concentran los empleos, los servicios y hasta el ocio. La contradicción se hace patente: por un lado, jactarse de la construcción de líneas de metro y buses eléctricos de primer nivel a nivel continental; por el otro, aumentar las tarifas, convirtiendo al transporte público en un bien excluyente, pese a lo necesario que resulta para poder vivir en sociedad. Los 30 pesos, entonces, no son solamente un detonante: son una síntesis de un país que no solamente segregó en sus derechos básicos, sino que ahora también cobra cada vez más caro por acceder a ellos.

Andrés Fielbaum, ingeniero matemático y Doctor en ingeniería en transporte de la Universidad de Chile. Actualmente realiza un postdoctorado en la Universidad Tecnológica de Delft.
Valentina Saavedra Meléndez, arquitecta Magíster en Urbanismo, académica del Instituto del la Vivienda de la Universidad de Chile, dedicada a las temáticas de género en vivienda y barrio.
Vicepresidenta del Partido Comunes.





CIEN AÑOS DE PRESOS POLÍTICOS EN CHILE: DESDE LOS SUBVERSIVOS DE 1920 A LA ACTUAL REVUELTA

/ *Nicolás Acevedo Arriaza*

El siguiente escrito busca indagar en la actual situación de los “presas y presos políticos de la Revuelta”, preguntándonos por quienes son, en qué contexto fueron detenidos y qué actividades realizan en la actualidad, ya sea en su cotidianidad carcelaria, como en torno a su liberación. Para esto fue necesario realizar una breve conceptualización de lo que entendemos por prisionera y prisionero político (PPP), comparando dichas experiencias con los anteriores ciclos de la prisión política en Chile (siglos XX-XXI).

Ese 3 de enero del 2020, Muriel, como varios viernes atrás, salió de su trabajo para reunirse con su pareja y su cuñado, Christian y Rodrigo Sanhueza, respectivamente. Aquella tarde las expectativas en la Plaza Dignidad eran altas, ya que se conmemoraba un nuevo aniversario del asesinato del estudiante mapuche Matías Catrileo. Según El Mercurio, miles de personas se reunieron en la Alameda, lo cual a esa altura no era una novedad. En los últimos meses, la principal arteria de la capital no conocía lo que el gobierno llamaba “orden público”. Lo novedoso fue que cientos de personas atacaron la iglesia San Francisco de Borja después que Carabineros se retiró del lugar, supuestamente sobrepasados por las circunstancias. Al día siguiente vinieron las declaraciones de indignación: “estamos muy golpeados”, afirmó el General de Carabineros, Mario Rozas, solicitando que la ciudadanía se apartase de “estos delincuentes”. El subsecretario de Interior, señaló que fueron tres los detenidos por aquel siniestro, avaluando los daños en más de setenta millones de pesos.¹ Para las autoridades era más doloroso una edificación que la vida o los ojos de los manifestantes.

Muriel desde su casa recuerda aquella tarde:

“Y vimos que se estaba quemando la iglesia, y dijimos: ‘vamos a mirar’. Fuimos a mirar los tres, con nuestras mascarillas antiguas, antiparras. Llegamos por la Alameda y mirábamos cómo se quemaba la iglesia. En eso empezó la policía a reprimir, empezaron a tirar lacrimógenas, balines, había mucha gente celebrando lo que estaba pasando y me perdí de mis compañeros. Después nos juntamos a los veinte o treinta minutos en Ramón Corbalán con Alameda. Me contaron que habían reprimido mucho, que habían tirado balines... Al final no pasó nada y cómo tenemos una hija pequeña, a las nueve y media dijimos: ‘vamos a buscar a la niña, para que tu mamá no nos rete’. Fuimos a buscar el auto”.²

1 “Queman iglesia de Carabineros y saquean cripta de mártir en jornada con nueva táctica policial”, El Mercurio, Santiago, 4 de enero de 2020, Cuerpo C, p.1; “Prisión preventiva para presunto autor del incendio a iglesia de Carabineros”, El Mercurio, Santiago, 5 de enero de 2020, Cuerpo C, p.1.

2 Entrevista a Muriel, Santiago, 1 de abril de 2020, Videollamada.

Muriel piensa en las eternas preguntas: ¿Y si el auto lo hubiésemos dejado en otro lugar? ¿Y si ese día no hubiéramos ido? Aquel viernes, como las veces anteriores, Muriel intentó estacionarse a varias cuadras de la zona cero, pero esta vez no encontró cupo y debió hacerlo cerca del Café Literario (Av. Bustamante). Hasta allí llegaron y se fueron a la comuna de Maipú, hasta que frenaron en Portugal casi llegando a Av. Matta. Esperaron que el semáforo diera “verde”, pero este no llegó a hacerlo.

“Y de los cuatro autos que estaban alrededor de nosotros se bajan con pistolas, con chaleco antibalas, con pistolas, apuntando: ‘arriba las manos, arriba las manos; bájense, bájense’. Muy violentos. Yo en ese momento no entendía lo que estaba pasando, pensé que era un asalto. Entonces les dije: ‘llévense el auto, pero no nos hagan nada, suéltennos, suéltennos’. Mi pareja, con mi cuñado, se bajaron por el otro lado, y yo gritando, no entendía lo que pasaba. Y en eso miro, y estaban apresando a mi cuñado, lo estaban esposando. Y en ese momento yo entendí que era la policía. En eso me pedían que me subiera a otro auto con ellos y yo le decía que no me iba a subir con ellos, porque ellos eran hombres, porque estaban violando, porque ellos torturaban, como que me empecé a defender con eso. Y llegan dos mujeres y me dicen: ‘amiga, tranquila, yo te voy a ayudar, pero súbete al auto’. Y también eran pacas infiltradas. Entonces yo no sabía en ese momento en quien confiar, porque todos eran pacos. Me subieron al auto, a cada uno en autos diferentes y nos llevaron a la 33 comisaria”.³

En ese momento comenzó la prisión política de los hermanos Christian y Rodrigo Sanhueza.

El siguiente escrito busca indagar en la actual situación de los “presas y presos políticos de la Revuelta”, preguntándonos por quienes son, en qué contexto fueron detenidos y qué actividades realizan en la actualidad, ya sea en su co-

3 Entrevista a Muriel, op. cit.

tidianidad carcelaria, como en torno a su liberación. Para esto fue necesario realizar una breve conceptualización de lo que entendemos por prisionera y prisionero político (PPP), comparando dichas experiencias con los anteriores ciclos de la prisión política en Chile (siglo XX-XXI). Imposibilitados de recibir visitas, producto de la pandemia del Covid-19, entrevistamos a Muriel, pareja de Cristián Sanhueza y participante de la Organización de Familiares y Amigos de los Prisioneros Políticos (OFAPP), recientemente formada a partir del nuevo ciclo de prisión política a partir de la “Revolta” desde el 18 de octubre del año pasado. Dicha entrevista, por la misma situación sanitaria debió realizarse por video llamada.

1. **¿Qué es vivir la Prisión Política?**

¿Qué significa ser prisionera o prisionero político? Muriel nunca se había hecho esta pregunta, ni menos se imaginó que su pareja formaría parte de los llamados “Presos de la Revuelta”. ¿A dónde los llevarían? ¿Quiénes lo recibirían? ¿Cuánto duraría esta pesadilla? La primera semana desde la detención de los hermanos Sanhueza fue mucha culpa para su familia: “comí nada, no te tomé un vaso de bebida tranquilo, pensando en ellos: ‘no están tomando esto’. No te fumé un cigarro. Entonces, al principio es muy difícil”, recuerda Muriel. Su pareja, Christian Sanhueza, y su hermano Rodrigo, pasaron la noche en la 33° Comisaría en la comuna de Ñuñoa, siendo llevados al otro día al control de detención. Allí el juez dictó arresto domiciliario, mientras durara los setenta días de investigación. La fiscalía, como en otros casos anteriores apeló y la Corte de Apelaciones decretó la prisión preventiva. No lo podían creer, lo acusaban de porte y confección de bomba molotov. Ambos fueron llevados a Santiago 1, una cárcel creada el 2005 por el sistema de concesiones, donde los recibieron decenas de prisioneros en el módulo 14. Es allí donde se congregan los “prisioneros de la Revuelta” desde el 18 de octubre del año pasado, quienes tuvieron que ganarse un espacio con el resto de la población. Al principio, sin conocer códigos ni a los otros reos, los primeros detenidos tuvieron fricciones y tensiones, pero finalmente lograron instalar una nueva prisión política en Chile.

Ser prisionera y prisionero política (PPP) es una denominación “subjetiva”, sobre todo porque apela a una experiencia y no necesariamente a un principio jurídico. En la mayoría de las veces, ésta es defendida por las mismas personas afectadas y por quienes los apoyan. En cambio, los gobiernos, ya sea democráticos como dictatoriales, niegan su existencia, utilizando otras nomenclaturas para mencionar a estas personas, dependiendo del contexto en que nos encontremos. En Chile, a comienzos del siglo XX, el gobierno de Juan L. Sanfuentes catalogó de “subversivos” a los estudiantes anarquistas detenidos en julio de 1920; mientras que la dictadura militar y la prensa oficialista denominaba de “extremistas” a los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El objetivo, en estos casos, era eliminar el sentido político de la acción ejercida por los detenidos, haya sido una proclama o la colocación de una bomba en una torre de alta tensión. Así ocurre actualmente con los detenidos de la Revuelta, por lo que el gobierno de Piñera niega la existencia de PPP. Así lo afirmó el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, quien se refirió a los hechos del 3 de enero en la Iglesia San Francisco de Borja: “Aquí ocurrió delincuencia pura y dura, vándalos delinquiendo en contra de una iglesia”.⁴ Entonces, ¿en qué circunstancias existen presos políticos?

Una alternativa es fijarnos en la naturaleza del delito o las razones “políticas” en que lo cometieron. Según la abogada colombiana, Laura Espinosa Marcka, la existencia de los PPP está íntimamente ligada a la construcción del Estado y su intento de conservar la gobernabilidad. De esta manera, serían los gobiernos quienes calificarían los delitos de “políticos” o “comunes”, dependiendo si buscaban la transformación del Estado.⁵ Por ejemplo, a comienzos del siglo XX, el Estado chileno decidió expulsar a cualquier extranjero que propagara una “doctrina incompatible con la unidad o individualidad de la Nación”, pensando principalmente en anarquistas y comunistas. Para ello legisló la Ley de Residencia en 1918, la cual se ocupó por primera vez con el español Ca-

4 “En picada: intenso despliegue comunicacional del Gobierno y Carabineros para condenar quema a iglesia San Francisco de San Borja”, El Mostrador, 4 de enero de 2020. Sitio: www.elmostrador.cl

5 Laura Espinosa Marcka, “una mirada al delito político, sustento de la existencia de los presos y presas políticos”, *Principia IURIS*, N°20, julio de 2013, pp. 150-166.

“

En Chile, a comienzos del siglo XX, el gobierno de Juan L. Sanfuentes catalogó de “subversivos” a los estudiantes anarquistas detenidos en julio de 1920; mientras que la dictadura militar y la prensa oficialista denominaba de “extremistas” a los integrantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. El objetivo, en estos casos, era eliminar el sentido político de la acción ejercida por los detenidos, haya sido una proclama o la colocación de una bomba en una torre de alta tensión. Así ocurre actualmente con los detenidos de la Revuelta, por lo que el gobierno de Piñera niega la existencia de PPP. Así lo afirmó el Intendente de Santiago, Felipe Guevara, quien se refirió a los hechos del 3 de enero en la Iglesia San Francisco de Borja: “Aquí ocurrió delincuencia pura y dura, vándalos delinquiendo en contra de una iglesia”. Entonces, ¿en qué circunstancias existen presos políticos?

”

simiro Berríos en 1920.⁶ En cambio, treinta años después, la Ley de Defensa Permanente de la Democracia definió que el peligro estaría en toda organización, como el Partido Comunista, que llame a un gobierno opuesto a la

6 Raymond Craib, Santiago subversivo 1920. Anarquistas, universitarios y la muerte de José Domingo Gómez Rojas, Lom Ediciones, 2018, pp. 37-85. La ley en: Brian Loveman y Elizabeth Lira, Arquitectura política y Seguridad Interior del Estado 1811-1990, Dibam- Universidad Alberto Hurtado y Centro de Investigación Diego Barros Arana, Santiago, 2002, pp. 82-83.

Democracia. Así fueron encarcelados y quitados sus derechos ciudadanos a miles de personas hasta 1958 con la modificación de dicha ley.⁷

Al contrario, otra alternativa sería enfocarnos desde la propia subjetividad de los PPP, donde la categoría no estaría marcada sólo por los motivos de su detención, sino además por la actitud y opción de vivir la prisión. Así lo definió Guillermo Ossandón, dirigente del MAPU-Lautaro, mientras estaba en la Cárcel de Alta Seguridad en 1996: “entiendo mi encarcelamiento como un capítulo de un libro abierto que no se ha terminado de escribir (...) En la lógica lautarina, la cárcel, como todos los espacios, es una trinchera de vida y lucha para hacer y vivir la subversión”.⁸ En lo práctico, esto significaba una serie de actividades culturales, sociales, educativas y de movilización, que los diferenciaban del resto de los otros presos. Según Muriel, en la actualidad, los “presos de la Revuelta”, además de pertenecer a una “carreta social”, han generado una serie de actividades para crear conciencia en el penal.

“Ellos adentro se organizan en carreta, ellos son de la carreta social. Ellos se mueven mucho en el tema social, hacen charlas; hicieron una biblioteca, que están formando de a poco, entre los mismos presos políticos. Se educan, conversan entre ellos, de las experiencias, porque hay de todo tipo de gente, hay activistas, explican sus movimientos, como lo hacen afuera. Y desde la política no partidista, sino de la política que se vive”.

En ese sentido, más que convertirnos en jueces o calificadores de quien merece la categoría de “preso político”, debemos comprender la prisión política

7 Brian Loveman y Elizabeth Lira, *Las ardientes cenizas del olvido. Vía chilena de Reconciliación Política 1932-1994*, Lom Ediciones- DIBAM, Santiago, 2000. Ley en: Loveman y Lira, *Arquitectura...* op. cit., pp. 139-161.

8 Gaspar Domínguez Montaner y Paz Larraín Aldunate, “El MAPU-Lautaro. Hijo descarriado de la Izquierda Chilena”, tesis para optar al título de Licenciado en Comisión Social, Universidad Diego Portales, Santiago, 1997, pp. 124-125.

9 “La Carreta” es un grupo de prisioneros que comparte los alimentos y otros enseres cotidianos.

desde el contexto histórico en que se produce y tomando en cuenta la propia experiencia de quienes se definen como tal. Para esto no preguntamos: ¿Quiénes son actualmente los detenidos y detenidas en el llamado “estallido social”? Según Muriel, su pareja y cuñado son presos políticos porque, a pesar de tener antecedentes una “intachable conducta anterior”, siguen detenidos. “El hecho de que esto haya pasado en una revuelta, que el país se haya levantado, se haya despertado, hayan querido que estas cosas cambien, y lo que ellos estaban manifestando su malestar, lo hace ser presos políticos. Eso es lo que ellos entienden que son presos políticos lo que están haciendo”. En otro contexto, según ella plantea, estarían libres.

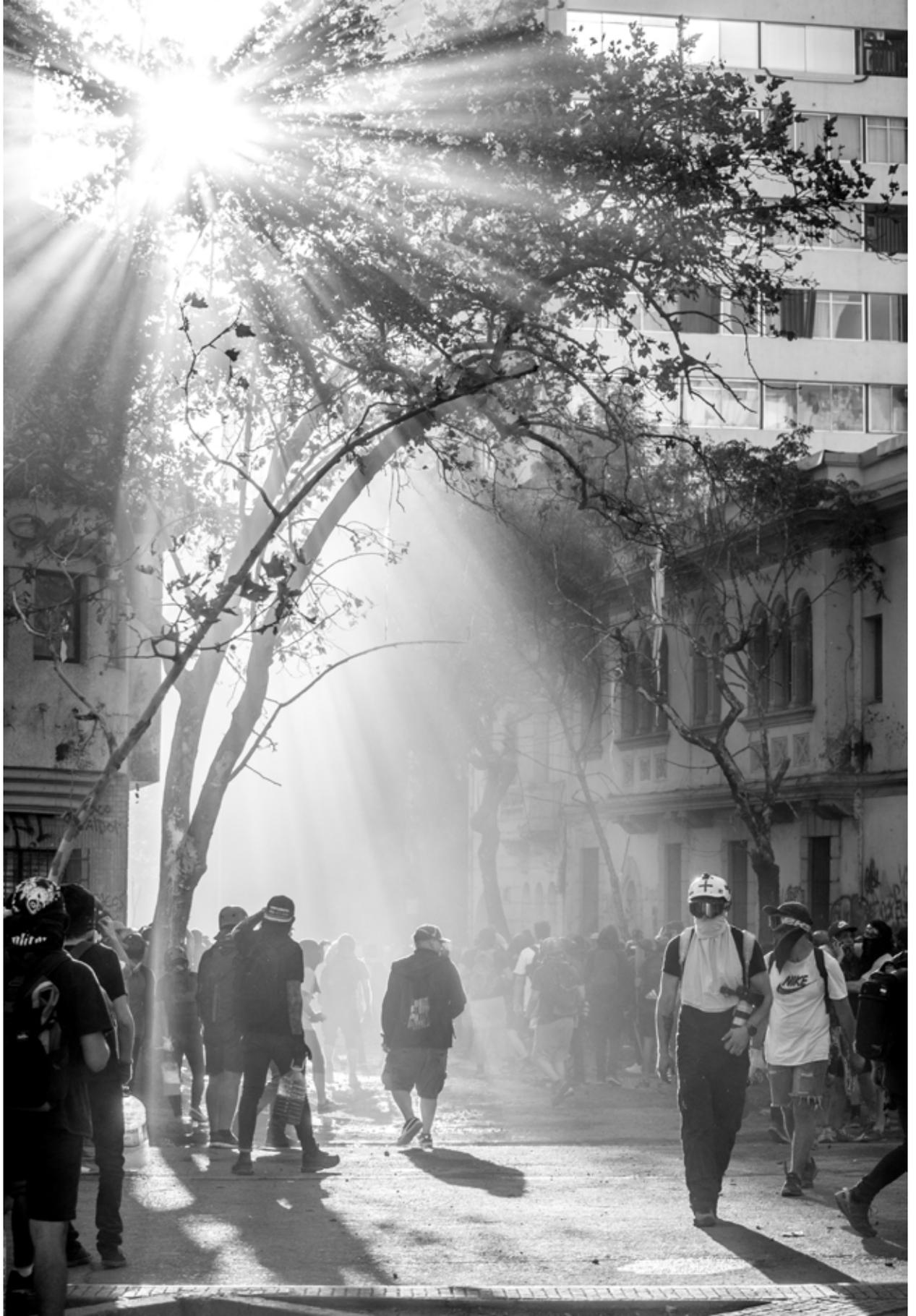
2. Un nuevo ciclo de prisión política

Sólo la pandemia pudo detener la revuelta iniciada en octubre del año pasado, dejando a cientos de personas con detención preventiva por ser un supuesto “peligro para la sociedad”. Según datos oficiales entre el 18 de octubre y el 18 de febrero de este año se contabilizaron 11.466 eventos entre desordenes, saqueos, marchas y ataques a comisarías de Carabineros.¹⁰ El fenómeno no estuvo sólo alojado en las grandes ciudades, sino en todo el territorio nacional, llegando a unas 25.564 detenciones entre octubre y marzo del 2020.¹¹ De ellas, según fuentes del Ministerio de Interior, continúan con detención preventiva alrededor de 1.600 personas, esperando que se concluya la investigación.¹² Según organizaciones como la Coordinadora por la Libertad de los prisioneros políticos 18 de Octubre, estos podrían llegar a ser 2.500, quienes estarían corriendo el riesgo de contagiarse de Covid-19. “Estas medidas desproporcionadas responden a una política de Estado de encarcelar masivamente a quienes han buscado romper con esta falsa paz social impuesta por lxs

10 “Carabineros cifra en 11.466 los eventos asociados a la crisis”, La Tercera, Santiago, 18 de febrero de 2020, p. 3.

11 “Solo cuatro eventos graves en abril: Pandemia cambia escenario del control del orden público”, El Mercurio, Santiago, 13 de abril de 2020, Cuerpo C, p. 7.

12 Ministerio de Interior y Seguridad Pública, “Informe actualizado del estado de la situación al 6.3.2020”, Secretaría de Derechos Humanos, Santiago, 10 de marzo de 2020. Sitio: www.scribd.com





poderesxs y así criminalizar las justas demandas sociales y apagar una revuelta que amenaza el orden de los ricos”, dirían en un comunicado recientemente.¹³ Esta acusación se debe a que, como ocurrió con los hermanos Sanhueza, a pesar que los magistrados han aplicado la libertad vigilada o domiciliaria, la Fiscalía ha pedido insistentemente la detención preventiva porque considera que los hechos ocurridos desde el 18 de octubre han tenido una connotación más vandálica que política.¹⁴ ¿Se está criminalizando la protesta social?

Esto no sería algo nuevo. Para Raúl Zazuri, en una investigación de diez años atrás, el Estado chileno viene criminalizado a los movimientos sociales, sobre todo después de la desmovilización de los años noventa. Con el surgimiento de las protestas de estudiantes secundarios en el 2001 y 2006, la represión se enfocó principalmente a la “detenciones en protestas masivas”, llegando a 6.613 entre abril del 2006 a abril del 2008.¹⁵ En la actualidad las cifras se dispararon de manera abrumante: sólo en el Estado de Emergencia, entre el 18 y 27 de octubre de 2019, fueron detenidas 9.023 personas.¹⁶ ¿Quiénes eran? ¿A qué composición social representan? ¿Cuáles eran sus edades? ¿Tenían militancia política? La actual información que tenemos es precaria, sobre todo entendiendo que no existe un listado definitivo y detallado de quienes serían los detenidos en el marco de la Revuelta. Pero, con riesgo de equivocarnos, podríamos aventurarnos a plantear algunas hipótesis.

Un camino tentativo sería realizar una deducción a partir de lo que no son. A diferencia de ciclos pasados en la historia de la prisión política en Chile,

13 Coordinadora por la Libertad de los prisioneros políticos 18 de Octubre, “Algunas palabras desde la Coordinadora 18 de octubre sobre el rol de la Corte de Apelaciones”, 17 de abril de 2020. Sitio: <https://www.facebook.com/Coordinadora18deoctubre>

14 “Hay un nivel de organización destinada a realizar acciones vandálicas, pero no vemos un propósito político”, La Tercera, Santiago, 29 de febrero de 2020, pp. 18-19.

15 Raúl Zazuri, “Algunos ejes interpretativos sobre los movimientos sociales y la represión de la protesta social en Chile”, en: Kathirin Buhl y Claudia Korol (Orgs.), *Criminalización de la protesta y de los movimientos sociales*, Instituto Rosa Luxemburg, Sao Paulo, octubre de 2008, p. 118.

16 Instituto Nacional de Derechos Humanos, Informe Anual sobre la situación de los Derechos Humanos en Chile en el contexto de la crisis social. 17 de octubre- 30 de noviembre de 2019, INDH, Santiago, 2019, p. 60. Sitio: bibliotecadigital.indh.cl

actualmente no existen dirigentes políticos ni sindicales detenidos a partir de la Revuelta. Con esto no queremos plantear que las organizaciones de trabajadores o partidos de izquierda no hayan participado, pero queda la sensación que no tuvieron un rol protagónico. Esto marca una primera diferencia entre los PPP del siglo XX, donde la fuerza principal de detenidos eran trabajadores y trabajadoras organizadas, sobre todo con militancia política. Un ejemplo de esto fue en la dictadura de Carlos Ibáñez del Campo (1927-1931), donde se detuvieron a militantes políticos (anarquistas y comunistas) y representantes de la clase obrera, ya sea acusándolos de movilizaciones, huelgas o complot político. Los espacios ocupados para confinarlos o aislarlos fueron cárceles, campos de concentración, islas y pueblos del sur y norte del país para los relegados.¹⁷ Esta dinámica continuó con los gobiernos de Gabriel González Videla, Jorge Alessandri y Eduardo Frei Montalva, siendo Clotario Blest un ícono de la lucha sindical, sobre todo como presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT). Al contrario, actualmente no existen dirigentes políticos ni sindicales detenidos, sino sólo jóvenes populares, estudiantes y trabajadores formales e informales, que, en su mayoría, no tienen militancia en partidos institucionales. Esto sería reflejo de las propias características de la Revuelta, un movimiento inorgánico, con expresiones diversas y un fuerte arraigo en los territorios. De alguna manera, esta característica ha permitido una masividad inaudita en las movilizaciones, pero a la vez ha obstaculizado la coordinación de todos los PPP y sus familiares.

Otra diferencia, esta vez con respecto a los PPP de la dictadura, es que los actuales detenidos se les acusa por hechos de violencia, pero de baja intensidad: saqueos, uso de molotov, desórdenes públicos, etc. Según el Informe de Prisión Política y Tortura, la mayoría de los PPP entre 1983-1990 pertenecía a partidos políticos u organizaciones armadas (PCCh, Frente Patriótico Manuel Rodríguez, MIR y en menor grado el PS, Izquierda Cristiana y MAPU-Lautaro) y fueron condenados, sea la Justicia Civil y Militar, por la ley de Seguridad interior del Estado, la ley Antiterrorista, esta última creada en

17 Jorge Rojas Flores, *La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931)*, DIBAM-Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, Santiago, 1993, pp. 35-45.

1984.¹⁸ Sus detenciones se dieron en el contexto de las protestas populares y en una lucha radical en contra la dictadura. La principal fuerza social fueron los militantes de partidos políticos y organizaciones sociales, provenientes de los movimiento de pobladores y estudiantes, y en menor grado de las organizaciones de trabajadores.¹⁹ El grado de violencia aplicada no es un dato menor, producto que algunos de PPP tuvieron preparación paramilitar e hizo uso de armas de fuego en acciones de saqueos, robos a camiones de productos de alimentos, vestimenta, bancos, ajusticiamientos, etc., En el caso actual, muchos de los PPP son acusados por porte o confección de bombas incendiarias, las cuales son penas con tres a cinco años de cárcel desde el 2015.²⁰ Las actuales prisiones preventivas, sentenciadas por la Corte de Apelaciones, son parte de este aparato jurídico que ha criminalizado las protestas sociales y pareciera una especie de revancha contra la Revuelta.

Los recintos carcelarios también cambiado. En dictadura los hombres fueron relegados a distintos puntos del país, teniendo una presencia importante en la cárcel Pública de Valparaíso y Santiago. Las mujeres que fueron detenidas en la capital estuvieron en los reciento de San Miguel y Santo Domingo. Aunque los tratos y condiciones de salud eran deplorables, los PPP pudieron trabajar y recibir amplias visitas de amigos y familiares, gracias a su constante lucha.²¹ Con la llegada de la transición y los primeros gobiernos de la Concertación se desplegó una serie de medidas para desarticular a las organizaciones armadas que continuaron operando, ya sea parte del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, un conjunto de organizaciones miristas y el MAPU-Lautaro. Una

18 Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, Informe de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, La Nación, Santiago, 2005.

19 Viviana Bravo Vargas, Piedras, barricadas y cacerolas. Las jornadas nacionales de protesta. Chile 1983-1986, Ediciones Universidad Alberto Hurtado, Santiago, 2017; Mario Garcés Durán, Pan, trabajo, justicia y libertad. Las luchas de los pobladores en dictadura (1973-1990), Lom Ediciones, Santiago, 2019.

20 Ley 20.813, modificación Ley N° 17.798, de control de armas y el código procesal penal, 6 de febrero de 2015. Sitio: www.leychile.cl; “Proyecto de ley de armas busca penar con 15 años uso de explosivos en delitos”, La Tercera, Santiago, 15 de diciembre de 2014, p. 14.

21 Gabriela Richards, Calugas. Correspondencia de una joven chilena presa política en dictadura, Ceibo ediciones, Santiago, 2012; Teo Saavedra y Anne Proenza, Fuga en Santiago. Escape desde la Cárcel Pública, Ceibo ediciones, Santiago, 2015.

de estas medidas fue la creación de la Cárcel de Alta Seguridad (CAS) para los hombres y la Centro de Orientación Femenina para las mujeres.²² Aunque su

“

Los Tribunales de Justicia han actuado con revanchismo y discriminación, teniendo una consideración diferente con los carabineros acusados de violación a los derechos humanos en pleno Estallido. Así ocurrió con la muerte de Camilo Catrillanca y la pérdida de visión de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, en donde no habría policías procesados o no estarían en prisión preventiva.

”

sistema de seguridad y de visitas en locutorios nunca logró consolidarse, el fin de ese ciclo de PPP (1990-2005), permitió que los próximos detenidos fueron sometidos al plan original, en donde las visitas son sumamente restringidas, tanto en la CAS, como en la nueva la Cárcel de Máxima Seguridad y Santiago 1.²³

Así lo ha vivido Muriel, quien lleva a su hija de dos años a ver a Christian Sanhueza:

“Las visitas son de tres horas, pero nunca son las tres horas. Porque te dejan pasar justo a las dos, hay una fila tremenda, tienes que pasar el carnet (...) Yo me imaginaba otras cosas, como en el patio, pero es un

22 Pedro Rosas Aravena, *Rebelión, Subversión y prisión política. Crimen y castigo en la transición chilena* Lom Ediciones, Santiago, 2004.

23 Para abordar la prisión política Mapuche ver: Fernando Pairicán Padilla, Malón. *La rebelión del Movimiento Mapuche. 1990-2013*, Pehuén Editores, Santiago, 2014; Para abordar la prisión política libertaria en: Tania Tamayo Grez, *Caso Bombas: La explosión en la Fiscalía Sur*, Lom Ediciones, Santiago, 2012; Julio Cortés Morales, *Estruendo. La Asociación ilícita terrorista en la legislación chilena a la luz del “Caso Bombas”, y otros escritos sobre terrorismo y antiterrorismo*, Ediciones Tempestades, Santiago, 2018.

pasillo largo, donde hay muchas bancas, y están todos los presos con sus familias. Se vive un buen ambiente, porque la mayoría son presos políticos y la gente nos conocemos afuera, porque tenemos organizaciones, porque tenemos contactos. Entonces se vive un buen ambiente, adentro nos reímos, cantamos, la gente te colabora con otras cosas (...) Hay mucha comunidad allá adentro. Nosotros vamos con mi hija, cuando íbamos y mi hija también lo pasa super bien, y la misma gente hace que ella tenga un ambiente más tranquilo, como que la hacen reír, gente que nunca en mi vida haya visto, tiene mucha buena voluntad de hacer que las cosas funcionen bien”.

La situación de su hija ha sido lo más difícil, necesitando una ayuda profesional para poder explicarle. “Las dos primeras semanas me preguntaba por el papá, yo no sabía cómo responderle, mi suegra le respondía que andaba trabajando, que había ido a comprar”. Christian, a pesar de estudiar y trabajar, estaba muy presente en la vida de su hija, cambiando esta realidad abruptamente. “La primera visita que ella tuvo vio al papá y salió corriendo: ‘papá, papá’, gritaba. Lo vio, lo besó, lo abrazó y después lo miró y no los pescó en toda la visita. Entonces el psicólogo me decía que eso claramente es que ella está enojada con él”.

Con la llegada de la pandemia provocada por el Covid-19, las organizaciones de familiares y amigos de los PPP (OFAPP, Coordinadora 18 de Octubre; Guacoldas) han solicitado la revocación de las prisiones preventivas por detención domiciliar, en espera de las eternas investigaciones que realiza el Ministerio Público.²⁴ “El tema de la coyuntura es un tema importante- diría Muriel-, porque adentro de la cárcel no hay medidas sanitarias mínimas para que ellos puedan tener lo básico”. El alcohol gel y el cloro están prohibido dentro de las encomiendas, a pesar de que ya existen más de 48 contagiados en todos los recintos del país, entre ellos Santiago 1 y Puente Alto.²⁵ ¿Qué explicación

24 Carolina Trejo, “Los 2.500 presos de la Revuelta en Chile de los que no se hablan”, Sputnik News, 23 de marzo de 2020. Sitio: mundo.sputniknews.com

25 “Aumenta tensión en cárceles: huelga de hambre y traslados de reos a otras unidades, por seguridad”, El Mercurio, Santiago, 9 de abril de 2020, Cuerpo C,

puede existir? Los Tribunales de Justicia han actuado con revanchismo y discriminación, teniendo una consideración diferente con los carabineros acusados de violación a los derechos humanos en pleno Estallido. Así ocurrió con la muerte de Camilo Catrillanca y la pérdida de visión de Gustavo Gatica y Fabiola Campillai, en donde no habría policías procesados o no estarían en prisión preventiva.²⁶ En cambio, la pesadilla continúa de cientos de jóvenes y sus familias, por causas que probablemente antes de la Revuelta no hubiese significado prisión preventiva.

La Florida, 20 de abril de 2020

Nicolás Acevedo Arriaza es historiador, estudiante de Doctorado en Historia USACH y autor de Un fantasma recorre el campo: comunismo y politización campesina en Chile (1935-1948) (2017)

p. 2.

²⁶ “Caso Gatica: sumario asegura que ‘no existe certeza’ de que Carabineros causaran lesiones”, Radio Cooperativa, 7 de abril de 2020; “El choque de versiones por la lacrimógena que dejó ciega a Fabiola Campillai”, La Tercera, Santiago, 9 de abril de 2020, p. 26; “Tribunal rebaja cautelares a carabineros acusados de abuso sexual contra estudiante”, El Dinamo, Santiago, 17 de abril de 2020. Sitio: www.eldinamo.com; “Ex GOPE Carlos Alarcón cambian prisión preventiva por arresto domiciliario”, 24 horas, TVN, 17 de abril de 2020; “Corte deja en libertad al exsargento Carlos Alarcón”, El Austral, Temuco, 18 de abril de 2020, p. 4.





POSTDICTADURA E IMPUNIDAD: LAS MEMORIAS DE LAS VÍCTIMAS DE LA REVUELTA

/ *Karen Glavic*

Las memorias de las víctimas de la revuelta, de las personas que fueron mutiladas, torturadas y violadas, o quienes han cumplido el castigo anticipado de la prisión preventiva en una modalidad clara de prisión política, son aquí, más que el recuerdo para la elaboración de un nuevo pacto, la herencia política y discursiva sobre la cual debemos prestar atención a la hora de exigir verdad y justicia, al mismo tiempo en que la política sigue jugándose tanto en el campo de lo popular como en la disputa institucional.

Seguramente resulta apresurado hablar de memorias de la revuelta. Y es cierto, no se trata de procesar aún los sucesos de octubre de 2019 en Chile como operación de interpretación y ajuste sobre un pasado ya clausurado. Más bien, se trata aquí de interrogar los archivos que guardan los contenidos de las luchas contra la impunidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en dictadura, la denuncia, y el lugar que ha ocupado la noción de víctima en los ajustes y negociaciones del consenso democrático. Las memorias de las víctimas de la revuelta, de las personas que fueron mutiladas, torturadas y violadas, o quienes han cumplido el castigo anticipado de la prisión preventiva en una modalidad clara de prisión política, son aquí, más que el recuerdo para la elaboración de un nuevo pacto, la herencia política y discursiva sobre la cual debemos prestar atención a la hora de exigir verdad y justicia, al mismo tiempo en que la política sigue jugándose tanto en el campo de lo popular como en la disputa institucional.

Cuando el presidente Sebastián Piñera repite una y otra vez (por la revuelta o en tiempos de pandemia) que se enfrenta a un “enemigo poderoso” no lo hace, por cierto, de casualidad. Fue la lógica de la guerra la que se desplegó contra el pueblo chileno en octubre de 2019, y la que se imita en un estado de excepción bastante más permisivo y sectorizado durante estos meses de guerra contra el Covid-19. Es el modelo de la guerra como principio del poder político, es decir, enemigos a los que hay que derrotar y batallas en las que hay que vencer. La noche del 18 de octubre, seguramente, quedará inscrita como el gran punto de inflexión de la postdictadura, ese tiempo largo de acomodo y profundización del modelo neoliberal que se ha sostenido, entre otras cosas, en un pacto de impunidad. Las violaciones a los derechos humanos, por cierto, siguieron ocurriendo en democracia. Casos de detenidos desaparecidos como el de José Huenante, la militarización del Wallmapu, torturas y confinamiento en los hogares de Sename, violencia sexual por parte de las policías y una naturalizada represión y criminalización de la protesta, han sido tópicos comunes y cercanos tanto para las organizaciones de derechos humanos que se conformaron en dictadura y siguen existiendo, como para los nuevos comités, colectivos o instituciones que han dedicado su trabajo a la protección, denuncia y judicialización de los casos por violaciones

a los derechos humanos en Chile. Pero aún con esto, con esta experiencia y con estas memorias de organización y resistencia, el 18 de octubre fue algo demasiado nuevo, un acontecimiento aún en curso y suspendido en forma abrupta por las políticas de “distanciamiento social” a las que ha obligado el coronavirus, agravando quizás el vértigo de estos meses en que el país se rebeló contra la institucionalidad neoliberal.

El estado de guerra ha operado también bajo una forma de baja intensidad y los casos de violencia en democracia lo demuestran. Para la guerra ya no son necesarias las posiciones de grandes bloques enfrentados, sino que su sonido se escucha tras de todo orden, es la trama que organiza las relaciones de fuerza y puede repetirse o establecerse de manera permanente. Así lo han descrito teóricas feministas como Rita Segato o Silvia Federici para el caso de la “guerra contra las mujeres” que consiste en sostener las fases de acumulación del capital y el orden de dominación, en la devaluación y desposesión de las mujeres y los cuerpos feminizados. Si bien puede resultar evidente, conviene decirlo: toda guerra se desata en contra de determinados cuerpos. Por eso está alusión a la guerra contra las mujeres o a aquellos grupos antes mencionados sobre los cuales se ha dirigido la represión en la postdictadura son importantes de tener presentes, tanto para pensar en la categoría de víctima como para imaginar articulaciones políticas que permitan pensar la violencia y la resistencia a ella.

Como bien propone Judith Butler, una vida no puede ser aprehendida como dañada o perdida si antes no es aprehendida como viva. Para que la palabra “vida” pueda ser comprendida en sentido pleno es necesario que existen condiciones sociales y políticas que reconozcan a una vida como tal, en completo merecimiento de ser vivida. Toda vida es una vida precaria, pues porta una vulnerabilidad de base que nos hace interdependientes a unos de otros, y el derecho a la vida se juega, entonces, en aprehender las condiciones necesarias para alcanzar una vida vivible bajo fundamentos igualitarios. Por cierto, dicho presupuesto podría ser leído como una ontología en donde valga la mera existencia individual para consignar el estatuto de precariedad; pero es allí donde Butler se adelanta y diferencia dos nociones que permitirán establecer una dimensión ontológica, la de la precariedad; y otra política, la

precaridad. Esta diferencia de vocablos busca por sobre todo no perder de vista que la precariedad no es experimentada de manera igualitaria a nivel social y que, si bien, existe la posibilidad de gestar alianzas entre sujetos (o posiciones de sujeto) conectados por la vulnerabilidad, esta no se administra ni relaciona de manera igualitaria: “La precaridad también caracteriza una condición políticamente inducida de la precariedad, que se maximiza para las poblaciones expuestas a la violencia estatal arbitraria que, a menudo, no tienen otra opción que la de apelar al Estado en busca de protección, pero el Estado es, precisamente, aquello contra lo que necesitan protección”¹. De esta cita

“

Cuando el presidente Sebastián Piñera repite una y otra vez (por la revuelta o en tiempos de pandemia) que se enfrenta a un “enemigo poderoso” no lo hace, por cierto, de casualidad. Fue la lógica de la guerra la que se desplegó contra el pueblo chileno en octubre de 2019, y la que se imita en un estado de excepción bastante más permisivo y sectorizado durante estos meses de guerra contra el Covid-19. Es el modelo de la guerra como principio del poder político, es decir, enemigos a los que hay que derrotar y batallas en las que hay que vencer.

”

podríamos extraer una conclusión que es conocida: el Estado es quien viola los derechos humanos, y si estos crímenes son de los más graves, deleznable y imperdonables que pueden ser cometidos es, precisamente, porque el Estado debe cumplir el rol de defender a los ciudadanos y ciudadanas. Pero sabemos que junto al poder de mantener a la población con vida, el Estado detenta el

1 Judith Butler. Marcos de guerra. Las vidas lloradas (México: Paidós, 2010), 46-47.

AV. ANTONIO KARAS
1901 1823





poder de administrar la muerte, y aunque el estallido de octubre nos haya despertado de golpe en una revuelta en que la violencia popular se tomó las calles, la respuesta del Estado chileno no fue otra que la que durante décadas ha utilizado y dirigido contra determinados sectores de la sociedad con el fin de mantener el orden y fijar las condiciones de gobernabilidad neoliberal.

La alusión a Butler me permite introducir una cuestión importante: ¿Qué es aquello que consideramos como humano? Cuando afirmamos que no todas las vidas son aprehendidas ni reconocidas de manera igualitaria, asumimos que aquello que suponemos universal en “lo humano” no es otra cosa que una categorización que delimita marcos entre las poblaciones “perdibles” y las rescatables. Algo de eso es aún más dramático en tiempos de administración del estado de excepción por el Covid-19, cuando las decisiones en torno a la delimitación de las cuarentenas parecen tener marcados criterios de protección de la productividad económica, cercado de los lugares de protesta y abandono de la periferia.

Las vidas ya perdidas o desahuciadas son el límite de lo humano. Es por esto que siempre la necesaria defensa y lucha por los derechos humanos tiene un contenido paradójico. En el fondo, no se trata solo de recuperar los derechos perdidos en materia jurídica, sino que más profundamente, se trata de visibilizar y devolver el estatuto de vida merecedora de ser vivida a aquellas que no lo tienen. Butler enfatiza que estos cuerpos, estas vidas además no son objeto de duelo “pues en la retorcida lógica que racionaliza su muerte la pérdida de tales poblaciones se considera necesaria para proteger las vidas de «los vivos»”².

Una discusión sobre lo humano es necesaria y no se trata solo de una cuestión conceptual pues son demasiados cuerpos los sacrificados de antemano. Pensar lo humano interroga a los sujetos para/de la política o la transformación social, y en esta revuelta además, en este estallido informe y muy plural de imágenes, se ha sugerido a través de figuras de animales y un perro quiltro lo que ya no anudan las banderas del Che o las canciones de protesta. Es cierto, la revuelta ha sido y es una potencia de sentidos y deseos, un movimiento

2 Judith Butler. Marcos de guerra, 54.

destituyente pero también unas memorias de procesos y elaboraciones políticas que de alguna u otra manera han permeado en la sociedad chilena. Al mirar los primeros días de la revuelta, aparecen las imágenes de marchas que por primera vez no tenían rumbo fijo, la destrucción del “orgullo de la ciudad de Santiago” (el metro), la quema de artículos tecnológicos en piras improvisadas, el saqueo, y también la imaginación y los cuerpos en la calle. Es como si de un momento a otro el pueblo chileno salió con lo que tenía y llevaba puesto, con la certeza, eso sí, de que este sistema de acumulación por desposesión ya había horadado y enmarcado lo suficiente las vidas de los no-vivos. Puestos y puestas allí la represión fue un suceso esperable. Apresurado, tal vez, para los analistas políticos, muestra de ingobernabilidad y de un presidente incompetente, pero por sobre todo, el retorno de un fantasma conocido. Igualmente, es cierto, este despliegue de la guerra no había sido presenciado de esta forma durante la postdictadura. Incluso las respuestas institucionales y la recreación de los pactos de la transición llegaban a destiempo a lo que se abría en algunos momentos por la presión en las calles. Ni el “acuerdo por la paz” ni el anuncio de la realización del plebiscito terminó de calmar lo que octubre de 2019 ofreció, pero es cierto al mismo tiempo, que no hay certeza alguna en términos de organización política de lo que pueda seguir ocurriendo con cuerpos que no cesaron de salir a protestar y a ponerse como “primera línea” ante la represión.

A diferencia de lo que en otros tiempos se concibió como preparación militar en los partidos de la izquierda chilena, la “primera línea” pareciera ser más la necesidad de la construcción de grupos de autodefensa, la continuidad de forma de acción directa de “los capuchas”, y la pulsión manifiesta de esta revuelta por destruir vestigios del viejo orden. No es posible pasar por alto la cantidad de estatuas que fueron removidas, los espacios públicos intervenidos y resignificados, y también el arsenal de consignas que tapizó las ciudades a través de rayados, murales, collages y grafitis. Más que la organización de la violencia popular me interesa nuevamente señalar el trasfondo que hace que un cuerpo sea puesto en “primera línea”. Muchas de las historias que escuchamos y leímos en periódicos y artículos de prensa alternativa, parecen sugerir que muchos y muchas de las que se alinearon allí estaban muy al tanto

de su condición de vida precaria, de cuerpo que no merece un duelo. Y con esto no puedo sino pensar en el memorial de Mauricio Fredes en la calle Irene Morales, que en un acto de provocación pero también de borradura como las que bien conocen los memoriales de las víctimas de la dictadura, fue destruido en incontables ocasiones por parte de Carabineros. Negar a los muertos y sus causas de muerte, organizar una desmentida estatal que sitúa a quienes salieron a la calle como “enemigos poderosos” y a la policía como una institución cometedora de “excesos”, en constante crisis jerárquica

“

No se trata, por cierto, de negar o poner en entredicho a las víctimas de la dictadura en su condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que de considerar cómo aquella noción genera un efecto de totalización sobre el pasado que ha sido funcional a mantener los consensos democráticos para la gobernabilidad neoliberal. No es casual que dentro de los variados *déjà vu* de octubre y noviembre pasado, los “ruidos de sables” sonaran más a modo de ordenamiento del sentido que de voluntad de los militares de sumarse al poco atractivo panorama al que se los convocaba, y sobre el que ya tienen bastante noticia en términos de procesos judiciales, aunque haya tanta deuda en ellos.

”

(que igualmente la tiene) en la que las responsabilidades se pierden y diluyen. Se trata de no reconocer a las personas que fueron torturadas, asesinadas y mutiladas, de defender la forma de la guerra en su clave de administración del poder, pero también se trata una vez más de distinguir a lo humano de lo

inhumano, a los cuerpos que merecen el reconocimiento del dolor inflingido y a los que no.

Decía al comienzo de este artículo que me interesa poder explorar lo que la noción de víctima significó para el consenso democrático de la postdictadura chilena. Desde hace un tiempo, las organizaciones de derechos humanos en Chile han sostenido insistentemente la posición de conectar los crímenes del pasado con el presente, pues las “operaciones de olvido”, los disciplinamientos y ajustes de la memoria de los crímenes de la dictadura, han tendido a despolitizar las luchas y demandas de justicia, ya sea a través de la impunidad, la borradura de espacios y lugares de memoria, la privatización del conflicto, y también el ensalzamiento del lugar de la víctima: sujetos sin historia ni pertenencia a un proyecto político, sobre los cuales la marca de la represión, la desaparición y la tortura, estaban por sobre cualquier profundización en sus identidades. No se trata, por cierto, de negar o poner en entredicho a las víctimas de la dictadura en su condición de víctimas de violaciones a los derechos humanos, sino que de considerar cómo aquella noción genera un efecto de totalización sobre el pasado que ha sido funcional a mantener los consensos democráticos para la gobernabilidad neoliberal. No es casual que dentro de los variados *déjà vu* de octubre y noviembre pasado, los “ruidos de sables” sonaran más a modo de ordenamiento del sentido que de voluntad de los militares de sumarse al poco atractivo panorama al que se los convocaba, y sobre el que ya tienen bastante noticia en términos de procesos judiciales, aunque haya tanta deuda en ellos.

La revuelta de octubre parece haber activado un tabú de la democracia: el odio de clase. Si las víctimas de la dictadura durante años fueron víctimas por “pensar distinto”, estos meses han actualizado en su propio registro una clave que parecía olvidada en medio de la supuesta homologación social que provoca el consumo. Las eternas “clases medias” resultaron ser sujetos desposeídos, vidas precarias azotadas por la desigualdad que se rebelaron en contra de todo aquel rastro de institucionalidad que les pareció memoria del régimen de desposesión, incluida toda la casta política, y muchas organizaciones, centrales sindicales y agrupaciones que reproducían de

algún modo la corrupción o el enriquecimiento. Claramente el descrédito de la política no es nunca una buena noticia. La falta de articulación desde abajo y también la falta de propuesta y coordinación institucional es caldo de cultivo para un vacío político que difícilmente se llena sin organización ni contenidos, y que es también muy propio de sujetos desposeídos y subjetivados por el neoliberalismo. La revuelta ha proyectado una potencia que se venía gestando hace un tiempo en Chile: la de poner los cuerpos en circulación y encuentro masivo en la calle, y también la referida a la construcción de proyectos políticos que cuestionaran de manera profunda las raíces del modelo chileno y sus formas de dominación tanto públicas como privadas. No es casualidad que el feminismo sea y haya sido un dinamizador de la revuelta y las movilizaciones de los últimos años, en cuanto lograba salirse de la cancha acotada que la institucionalidad de la postdictadura había fijado en Chile. Los movimientos feministas saben de cuerpos oprimidos, no duelables, no dignos de ser vividos. Saben de cuerpos oprimidos y de ser víctimas de la violencia patriarcal, pero también de la necesidad de reconceptualizarla. Sobre el tema, Verónica Gago plantea: “(...) dar cuenta de la pluralización de las violencias es estratégica: es una forma concreta de conexión que produce inteligibilidad y, por lo tanto, permite un desplazamiento de la figura totalizante de la víctima. Pluralizar no es sólo hacer una cuantificación, un listado de las violencias. Es algo mucho más denso: es un modo de cartografiar su simultaneidad y su interrelación. Es decir, es conectar los hogares estallados con las tierras arrasadas por el agronegocio, con las diferencias salariales y el trabajo doméstico invisibilizado”³. Problematizar la violencia y sus figuras es una cuestión estratégica, y la invitación de este texto ha sido pensar qué haremos hoy con las nuevas víctimas, con las víctimas de esta revuelta, con las memorias de las antiguas que pulsan en el presente, con la sensación de dolor e indignación que puede esfumarse cuando no está enmarcada por la imagen en vivo, que circula rápido, que atosiga, cuando estamos en casa con otros miedos y dolores, cuando toca pensar en la justicia para quienes perdieron su vida, sus ojos, cuando hay que defenderla e integrarla en una política

3 Verónica Gago. La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo (Madrid: Traficantes de sueños, 2019) 65-66.

emancipadora que no haga otra vez del eterno vaivén melancólico una excusa para administrar los cuerpos de las vidas no vividas, de las víctimas de nuestraspreciadas revueltas.

Karen Glavic es doctoranda en Filosofía de la Universidad de Chile. Docente universitaria. Editora en Pólvara editorial. Compiladora de Aborto Libre. Materiales para la lucha y la discusión en Chile (2019).





LONDON

¿HAY FUTURO PARA LOS PARTIDOS DESPUÉS DEL ESTALLIDO... Y VICEVERSA?

/ *Francisco Figueroa C.*

Los partidos se debaten entre la utopía neoliberal de la post-política y el atajo demagógico de la anti-política. La disyuntiva, funcional al avance de un neoliberalismo cada vez más autoritario, amenaza la capacidad de las fuerzas de cambio para organizar el potencial democratizador de la revuelta. Con un pueblo harto de abusos, la UDI a la defensiva y el feminismo corriendo cercos, hay razones para la esperanza. Pero como izquierda debemos comprender que nuestra razón de ser no es sembrar sospecha y desconfianza, sino vocación de protagonismo.

Después de la revuelta social iniciada el pasado octubre, cualquier movimiento que hagan los partidos políticos, sean de izquierda o de derecha, nuevos o viejos, parecerá un paso en falso. Lo que está puesto en cuestión no son sólo sus programas y métodos, sino los partidos mismos. Lo están no por convicciones ideológicas asentadas en la sociedad contra las ideas de representación y articulación colectiva de intereses. Sino por algo mucho más mundano: la mayoría los percibe como inútiles. Por eso quien se guíe buscando aplausos de ocasión con demagogia anti partidos deambulará sin destino y, de paso, ahondará el problema. Porque al hacerlo confirmará la banalidad que tiene la política en el suelo.

Lo fundamental es moverse en el corto plazo con la mirada puesta en lo que es necesario conseguir en el largo: reconstruir la utilidad de la política (democrática). Es decir, reconstruir el vínculo entre movilización popular y participación popular en la autodeterminación colectiva de la sociedad. Y resistir, con la mirada puesta en ese objetivo, los embates de la adversidad de corto plazo de la que ningún partido puede escapar, por el hecho de serlo. Esta es una advertencia desde y para la izquierda. Para la derecha, neoliberales conservadores y progresistas incluidos, los partidos políticos no sólo no son imprescindibles, sino que ha sido artífice de su desprestigio. De la democracia basada en la soberanía popular, más bien, de cuyo funcionamiento los partidos son instrumento.

Reconstruir la utilidad de la política en el sentido recién descrito pasa fundamentalmente por habilitarla para alterar estructuras sustantivas del orden económico y social. Por eso el proceso constituyente es tan valioso: es una oportunidad para destrabar los mecanismos que neutralizan la esfera política democrática. La neutralización de la política (democrática), sin embargo, ha operado no sólo a través de trampas institucionales “externas” a los partidos, reductibles a instituciones específicas heredadas del pacto pinochetismo-Concertación, como los quórum contramayoritarios o el rol de tercera cámara del Tribunal Constitucional, sino también de sus culturas políticas, de cómo sí hacen las cosas y conciben su labor, y no sólo de cómo la institucionalidad neoliberal se las impide.

La captura de la soberanía sobre los asuntos públicos a manos de la tecnocracia, bajo la utopía de la “post-política”, añorada tanto por la dictadura como por los mandarines de la transición, es un rasgo transversal a los partidos chilenos actuales. De tal suerte, unos partidos cada vez más deslavados y carentes de diferencias significativas se vuelven incapaces de generar identifi-

“

[...] de poco nos sirve en la izquierda estar de acuerdo en este diagnóstico si nuestra propuesta se reduce a refugiarnos en sus expresiones sociales para desde allí hacer agitación y “emplazar” a la política, como si la participación de estos intereses en la disputa por la dirección de la sociedad fuese algo a ser concedido en lugar de algo fabricado, conquistado y defendido.

”

cación, arraigo y lealtades duraderas en la sociedad. Esta despolitización de los partidos ha creado las condiciones para un extendido cuestionamiento no sólo al tipo de política dominante en el país, sino a la política en cuanto tal. Así, comienza a tener como respuesta -sobre todo por derecha, pero también por izquierda- un culto por la “anti-política” que debilita cualquier intento de mediación colectiva entre sociedad y Estado, dejando a la mayoría en una relación de soledad individual ante el Estado y el poder económico.

Las masivas luchas por derechos sociales de la última década y la expansiva fuerza de las movilizaciones feministas son las principales canteras de producción de nuevas subjetividades democráticas en el Chile actual y de repolitización de la política, valga la aparente redundancia (véase Ferretti et al 2018, Miranda 2019). Pero de poco nos sirve en la izquierda estar de acuerdo en este diagnóstico si nuestra propuesta se reduce a refugiarnos en sus expresiones sociales para desde allí hacer agitación y “emplazar” a la política, como si la participación de estos intereses en la disputa por la dirección de la

sociedad fuese algo a ser concedido en lugar de algo fabricado, conquistado y defendido.

Este desafío nos pone en la encrucijada de reivindicar la política justo cuando la política está en el suelo. Con la complejidad añadida de que aún su reivindicación más moralista o metafísica no puede eludir el reconocimiento de la política realmente existente, sobre todo cuando se le practica y no solo comenta. Estos desafíos son perfectamente abordables, siempre que recordemos como izquierda que de lo que se trata no es de denunciar o sospechar del mundo, sino de transformarlo.

La utopía de la post-política

La credibilidad en los partidos políticos chilenos se encuentra en un mínimo histórico. Según reveló la última encuesta CEP (2019), sólo el 2% de la población confía en ellos y el 3% en el Congreso. Lejos de ilustrar un repentino desplome, estos números son expresivos de un proceso sostenido de desgaste, que completa casi ya tres décadas -si se compara la serie histórica de encuestas CEP desde 1989 hasta la fecha y otras encuestas que cubren el tema- y que sitúa a Chile entre los países con menor confianza en los partidos políticos tanto a nivel latinoamericano como mundial.

Lo que más sorprende, sin embargo, no es tanto la magnitud de esta crisis sino la porfiada resistencia a asumirla por parte de los propios partidos y otros círculos extrainstitucionales del poder. Hasta hoy prevalece entre los actores que más inciden en la dirección de partidos y en su estudio, la opinión de que el problema obedece a temas puntuales (corrupción, voto voluntario, desafección juvenil, mala comunicación partidista, etc.) y por lo tanto puede ser superado con medidas puntuales y de “especialistas”, o bien que no es síntoma de algo precisamente malo (subproducto necesario e inevitable de la individualización de la modernidad) y por lo tanto no hay en realidad nada verdaderamente profundo que hacer más que disminuir costos político-electorales .

Uno podría sentirse tentado a descartar como “falsas” estas hipótesis debido a la mala salud que exhiben en Chile todos los indicadores habitualmente utilizados para medir la vitalidad de un régimen democrático: los niveles de participación en las elecciones, la adhesión ciudadana a los partidos políticos, el interés ciudadano por la política o los números de militantes de los partidos (sobre esto, ver Luna 2017). En efecto, no es posible sostener en base a estos criterios que todo marche viento en popa. Pero ¿y si los criterios que operan son otros? ¿No es más útil, para comprender, habilitar la posibilidad de que por democracia (y, por lo tanto, por “buenos partidos políticos”) estén entendiendo completamente algo distinto a lo que tradicionalmente entendemos por democracia?

Lo que subyace a este optimismo es la tentativa de redefinir lo que entendemos por democracia de un modo que no dependa de la soberanía de la mayoría sobre el gobierno. En este predicamento, la desconexión ciudadanía/política es un asunto secundario y de importancia inferior a, por ejemplo, la estabilidad formal de las instituciones. En sus versiones más apologéticas, equipara la manifestación de opiniones individuales con participación y el desmoronamiento de instituciones mediadoras -como los partidos o los medios de comunicación- con empoderamiento ciudadano. Y al hacerlo moviliza dos supuestos de hondas implicancias prácticas: la política como una cuestión de preferencias individuales y la participación como un asunto desvinculado de la toma de decisiones. De lo que se trata es de habilitar la posibilidad de una democracia sin ciudadanía.

Esta versión empobrecida y procedimental de la democracia no nace de una desinteresada aproximación descriptiva de científicos políticos. Es una lectura normativa para el futuro, que carga los fundamentos de la doctrina que devino dominante en la cultura política de la transición. Para los intelectuales orgánicos del pacto entre pinochetismo y Concertación, la fractura entre política y ciudadanía que tuvo lugar durante la dictadura más que un producto del autoritarismo, fue un producto irremediable de la “época”, un signo natural de la modernización capitalista, que había que estimular más que resistir, para dejar atrás el ambiente hiper-politizado del ciclo nacional popular en el

que se habían incubado las condiciones de la polarización que condujo a la UP primero y al golpe militar después.

Mientras las diatribas de Pinochet contra los “señores políticos” y el programa de Jaime Guzmán representan la versión más dura y conservadora de esta doctrina, la de Eugenio Tironi representó la versión más sofisticada e influyente en la alta dirigencia progresista. Su doctrina fue la continuidad de la utopía golpista de acabar con un orden político esencialmente conflictivo y abierto, para fundar uno perennemente estable y cerrado, en definitiva, post-político. La tecnocratización de la política y el vaciamiento de sentido y fuerza de los partidos, avanzaron como resultados naturales de este proceso.

Embarcados entonces en una forma de competencia cada vez más carente de sentido para la ciudadanía, en la medida que sus programas se parecían cada vez más entre sí, y centrada casi exclusivamente en la captura de cuotas de poder en la burocracia estatal, los partidos se desconectaron de la sociedad. Es el capítulo chileno del declive de los partidos de masas en el mundo occidental del capitalismo avanzado, que Peter Mair (2013) caracteriza como gatillada por su retirada de la esfera de la sociedad civil hacia la del Estado, donde no pueden sostener el componente popular de la democracia y se ensimisman para terminar operando como un cartel.

Por añejos que suenen los nombres de los intelectuales y dirigentes que abrieron este camino en Chile, no es un asunto del pasado. La utopía de la post-política goza de muy buena salud en la actual cultura política chilena, incluso en sus expresiones más recientes. Y digo “utopía” con plena conciencia de lo que connota. No es una fría y calculada pose. Es con frecuencia una genuina ilusión por una política cada vez más “técnica” y “basada en evidencia”, menos “contaminada” por la competencia por el poder, una disposición a los asuntos públicos cruzada por una aversión muy sentida al conflicto y al reconocimiento de intereses en juego.

Piénsese, por ejemplo, en la impronta deslavada, tecnocrática y buenista de Evópoli, por derecha, y el peso del mantra de la renovación generacional y las buenas prácticas en sectores del Frente Amplio, por izquierda. O la naturalizada idea de que “hacer política” equivale a diseñar “políticas públicas”. En

el corto plazo, esta cultura no parece afectar los prospectos de los partidos. Ofrece atributos de neutralidad, de estar sobre el bien y el mal, que son rentables en el mercado electoral inmediato. Una vez involucrado en la lucha política propiamente tal, sin embargo, estos atributos se desvanecen y no logran disimular la naturaleza intrínsecamente conflictiva y contradictoria del ejercicio del poder. Pero en el plazo más largo, además, inculca una incapacidad en los partidos para orientarse hacia la alteración de relaciones estructurales, vaciando de originalidad sus programas, y para comprometer a sus bases de modo estable con la participación política.

El estallido social ha puesto en serios aprietos esta tendencia, a sus artífices y herederos. Si hay algo que unifica la protesta a pesar de toda su inorganicidad y amplitud, es la búsqueda de una política capaz de emprender reformas sustantivas. El pueblo movilizado añora una política que funcione, que sea instrumento de su incidencia en el rumbo de la vida social. Por eso no sorprende el dato de la CEP según el cual el alto rechazo a los partidos convive con una alta expectativa de que éstos lleguen a acuerdos (que las élites interpreten este dato para validar su propio ensimismamiento es otra cosa) o la sensatez de las demandas que movilizan a quienes llenan calles y plazas (sobre esto, ver la encuesta de Nudesoc 2019). Que este ímpetu parezca radical no es tanto función de la naturaleza de la protesta, como de la rígida resistencia del régimen a reconocer e incluir a su disidencia.

El atajo de la anti-política

Pese al distanciamiento entre ciudadanía y política, la necesidad de la política para conectar con las personas y movilizarlas como electores o números favorables en las encuestas por supuesto se mantiene. Así, no es que el vínculo desaparezca, sino que se redefine. Independiente de qué viene primero, si la indiferencia de la ciudadanía hacia los partidos o el menosprecio de éstos por la ciudadanía, el asunto es que los partidos deben lidiar con esa indiferencia. Es así que la fabricación de lazos reales, en base a programas y prácticas de construcción social duradera, cede paso a la gestión de conexiones más efímeras y puntuales, como el personalismo y el cosismo a los que tan acostum-

brados nos tiene la política local desde, al menos, la emergencia de Joaquín Lavín a fines de los '90.

Una de las principales características del tipo de identificación que queda con la política en Chile es que es una identificación negativa, principalmente contra algo antes que a favor de algo. Diversos estudios (véase por ejemplo Meléndez y Rovira, 2018) dan cuenta de que los eventuales electores de cada sector en su mayoría se inclinan a favor de sus alternativas en razón principalmente del rechazo de las contrarias. A sabiendas de esta realidad, cada vez más partidos ceden a las recetas de expertos en marketing y campañas que, en consecuencia, dictan dirigir los esfuerzos partidarios principalmente a la diferenciación en negativo antes que al cultivo afirmativo de identidades propias.

La campaña presidencial de Piñera en 2017 asumió al pie de la letra esta estrategia, centrando buena parte de su relato y despliegue en el rechazo a la Nueva Mayoría y, especialmente a Bachelet, en cuya figura concentraron las peores acusaciones. Conforme no pudieron seguir negando la existencia del Frente Amplio y su capacidad de conseguir votos nuevos, la derecha centró allí también esta artillería. De lo que se trata es de movilizar a los partidarios más duros y obligar al adversario a estar a la defensiva, dificultándole ir más allá de los duros propios. Puede ser un recurso de vieja utilización en campañas, pero lo nuevo es que deviene receta para la actuación permanente de los partidos en todas sus esferas (la lucha parlamentaria, la gestión del gobierno central, la producción de sus centros de pensamiento asociados, etc.).

Todo lo que va de segunda administración de Piñera ha estado teñido por este estilo. A sabiendas de que no contaba con los votos en el Congreso para aprobar íntegramente sus contrarreformas, el gobierno de Piñera emprendió desde los primeros meses de gestión una campaña destinada más que a defender sus iniciativas (era inútil para lograr concretarlas), a debilitar las posiciones de quienes las resistieran y desquiciar los términos del debate público si no lograba configurarlos a su favor. Por eso nunca el papel de los provocadores había sido tan central y protagónico como en este gabinete, con Marcela Cubillos como su exponente más hábil y los ex-ministros provenientes de la









Fundación para el Progreso (Mauricio Rojas, Gerardo Varela y Roberto Ampuero), como sus exponentes más puros, pero también más brutos.

El núcleo de este guion es la crítica a la condición política del adversario. Lo que el gobierno de Piñera le devuelve a quienes se le oponen, rara vez es una respuesta en los términos del asunto en cuestión, rara vez es “programática”. Con una frecuencia que da cuenta de un patrón, lo que este gobierno ha desplegado es una campaña de desprestigio de sus adversarios en tanto militantes de partido, parlamentarios o partidarios de un programa o un ideal político. Con ello despliega una disputa no por los fines de las políticas sociales ni los medios más adecuados para conseguirlos, sino contra la política misma, en tanto mero ejercicio de ocultamiento de intereses particulares, pequeños, mezquinos y por definición contrarios a los intereses de “la gente”. Por cierto, nadie ha llevado más lejos esta actitud que la derecha radical personificada en José Antonio Kast.

Sectores de la izquierda también han caído en la moda de la anti-política, especialmente después del estallido social. Piénsese en el tipo de críticas al acuerdo que dio origen al proceso constituyente por parte del Partido Comunista y sectores del Frente Amplio bajo su influencia. En un gesto muy extraño a la cultura comunista, Karol Cariola apuntó contra el acuerdo por requerir la aprobación de un “Congreso ilegítimo”, el mismo que ella integra como diputada y al que el PC pudo acceder a través de negociaciones y acuerdos con la totalidad de las fuerzas políticas con presencia parlamentaria. Con similares argumentos, humanistas y referentes allegados al Frente Amplio desde el mundo de los medios de comunicación y la izquierda tradicional, se restaron del acuerdo y finalmente del propio FA. Misma cosa Unidad Social.

Es cierto que la decisión del PC obedece a su apuesta por acumular por izquierda en la coyuntura, apuntalando como alternativa presidencial a Daniel Jadue y desplazando de este nicho electoral al Frente Amplio. Es probable incluso que, como ha sido frecuente en su historia, esto no sea un “giro a la izquierda” sino un recurso táctico para mejorar la posición propia de negociación con el resto de la oposición. El dilema no es cuán legítimo y conveniente es un cálculo como éste, sino el costo del tipo de recurso que utiliza: agitar

una repulsa cada vez más visceral a los propios medios a través de los cuales cualquier proyecto de izquierda serio tendrá que recurrir para articular mayorías políticas capaces de abrir un ciclo post-neoliberal, sembrando desconfianza y sectarismo entre el pueblo movilizado.

Al menos cuatro elementos de cultura política condicionan el anti-politicismo de cierta izquierda chilena actual. El peso de la narrativa de la transición como traición de las elites pactistas al pueblo, extendiendo este molde para mirar todo lo que vino después; la antigua reducción de la política a la agitación, aplicada al tema de la temporada; la exaltación del rol de los movimientos sociales como reemplazo de la lucha política, en una suerte de actualización de la estéril contradicción poder popular/institucional; y la desconfianza a la representación y desprecio por la conducción heredadas de la cultura asambleísta de los 2000 y en particular de la experiencia de movilizaciones de 2011 (sobre esto, ver Arellano 2017).

Mientras los primeros son problemas viejos y, en su forma actual, heredados fundamentalmente de la experiencia de la izquierda de los ochenta, los últimos son legado de la generación de los 2000, y como tal, enfrentarlos es una responsabilidad ineludible de nuestra generación. En tal sentido, haríamos bien en reivindicar el valor de la construcción y participación incidente de movimientos sociales en las decisiones públicas como algo radicalmente distinto a la exaltación acrítica del movimentalismo social. Del mismo modo, es imprescindible construir formas legítimas de representación y decisión colectiva en las nuevas fuerzas políticas, superando los aspectos más negativos heredados del asambleísmo, que ha dejado un reguero de fragmentaciones, caudillismos y militancias ensimismadas entre los movimientos forjados en las luchas de los dos mil.

La revuelta social tuvo el efecto de desquiciar internamente a la izquierda precisamente porque tornó relevantes estos problemas: la relación con lo social y la forma de conducir la acción colectiva (de decidirla, dirigirla, etc.). Sumidos como estábamos en el parlamentarismo, estos problemas eran críticos, pero estallaban en el vacío, no se les escuchaba ni despedían luz. Estallaron tan abruptamente que se dio la paradoja de que habiendo sido fuerzas deter-

minantes y decisivas en la apertura del proceso constituyente (la verdad sea dicha, en ausencia del FA no habría existido plebiscito ni opción de órgano plenamente electo, sino una convención mixta), en lugar de liderar y ensanchar el flanco abierto a la política constituida, las internas se desquiciaron en recriminaciones mutuas y disculpas.

La responsabilidad de la radicalidad y viceversa

El estallido social ha situado a las fuerzas democráticas y en especial a la izquierda frente a la obligación de reivindicar la política para pasar de la fase de movilización a la de participación. Participación del pueblo movilizado no en tanto masa de electores, sino en tanto fuerza social portadora de unas aspiraciones no representadas por la política constituida. Me refiero así no a la tarea de “hacer votar a la gente” por una nueva Constitución o por sus representantes en la constituyente, sino al desafío de construir y organizar ese nosotros que a partir de la revuelta logre irrumpir en un tablero político que de lo contrario le dará sistemáticamente la espalda. Esto por cierto nos sitúa ante la paradoja de tener que hacerlo justo en el peor momento de la política en 30 años.

Si bien hay condicionantes sociales y culturales que hacen imposible un retorno a las formas de participación del siglo XX, jamás podemos reimaginar otras nuevas bajo el lastre de lo que aquí he llamado utopía post-política y atajo anti-política. Ambas actitudes suponen un desprecio por el vínculo entre movilización y participación, la primera por no concebir la democracia como basada en la ciudadanía y la segunda por agotarse en el momento agitado de la movilización (le es suficiente para el ejercicio delegativo del descontento en el carisma del líder). El dilema es que al tener el monopolio sobre cada uno de los polos de la ética política weberiana, los tecnócratas sobre la responsabilidad y los demagogos sobre la convicción torpedean la puesta en práctica de una política transformadora realista.

Por eso hay que desarmar este reparto espurio de las éticas políticas. La ética de la responsabilidad tiene que ver sobre todo con la capacidad de hacerse

cargo de las consecuencias del acto político, mientras que la de la convicción con deberse a una causa. Nada más irresponsable que el fanatismo con que la tecnocracia resiste la apertura de la política, insensible a los efectos desintegradores de ceder al mercado lo que corresponde a la democracia. Y nada menos comprometido que el rechazo de los demagogos a cualquier articulación que no gire en torno a la desconfianza de todo lo que no sean ellos. Por el contrario, si hay algo responsable es abrir la política a los intereses populares excluidos y si hay algo comprometido es subordinar todos los medios de la política a la realización de ese fin.

En este orden de cosas, una izquierda comprometida con hacer del estallido social un hito de ampliación de la democracia, de reingreso de las mayorías a la política, no puede alinearse ni con el agitacionismo vacío de la izquierda tradicional, que no invita al pueblo más que a la sospecha, a estar a la defensiva y a fagocitarse internamente; ni con el ensimismamiento burocrático de

“

Si bien hay condicionantes sociales y culturales que hacen imposible un retorno a las formas de participación del siglo XX, jamás podemos reimaginar otras nuevas bajo el lastre de lo que aquí he llamado utopía post-política y atajo anti-política. Ambas actitudes suponen un desprecio por el vínculo entre movilización y participación, la primera por no concebir la democracia como basada en la ciudadanía y la segunda por agotarse en el momento agitativo de la movilización.

”

un progresismo que no invita al pueblo a nada más que a esperar, votar y resignarse. Aun reconociendo la necesidad de un agrupamiento con estas fuerzas para acabar con la neutralización de la política impuesta por la hegemonía

neoliberal (interviniendo coordinadamente en la constituyente y en alianzas que disputen las oportunidades abiertas por ésta, eventualmente incluso en coaliciones), dicho agrupamiento debe contener una fuerza cuya centralidad sea que el pueblo movilizado se apropie de los desafíos abiertos por la revuelta y enfrente sus contradicciones como tareas propias.

Este debe ser, si se quiere, el centro de nuestra convicción en el periodo actual: sembrar en el pueblo una vocación de protagonismo.

Nuestro sentido de la responsabilidad, en tanto, debe basarse en una toma de conciencia sobre lo que está en juego desde la perspectiva de los adversarios y de lo que son capaces. Eso es lo que nos permitirá saber cuándo nuestras diferencias son en realidad disputas banales y cuándo la conveniencia de nuestras apuestas debe medirse considerando también el efecto de su encuentro con las del adversario. Para ello, es preciso comprender que el asedio a la política es fundamentalmente una reacción de las elites económicas y tecnocráticas contra el ciclo de impugnación a la hegemonía neoliberal y patriarcal, que va desde el 2006 hasta las mega-movilizaciones feministas, pasando por el 2011 y NO+AFP, aunque también por el gobierno de la Nueva Mayoría, que, aunque neoliberal, a ojos del empresariado más retardatario fue una amenaza porque habría validado consignas y aspiraciones de “la calle”.

Así, durante un periodo de al menos 15 años, distintas fracciones del empresariado y la tecnocracia han ido tomando partido por el deterioro de la esfera política democrática –dado que neutralizarla no fue suficiente–, como paso necesario para impedir la extensión del principio democrático de la política a la economía y la sociedad (parfraseo aquí a Karl Polanyi (1935), que definió así la “esencia” del programa del fascismo), que es básicamente lo que significan las luchas del feminismo y los movimientos por derechos sociales. He ahí entonces una medida para nuestra responsabilidad: no llevar ni una gota de agua al molino de esta reacción, es decir, no contribuir en forma alguna a una auto-proscripción del pueblo en las batallas por democratizar nuestra sociedad, por tímidos que luzcan sus frutos al lado de la soberbia de nuestros sueños.

Bibliografía

Arellano, Francisco (2017). La cultura política de la generación 2011. Cuadernos de Coyuntura - Fundación Nodo XXI, 17: 4-10.

Centro de Estudios Públicos, CEP (2019). Estudio Nacional de Opinión Pública N°84 – Diciembre de 2019. Disponible en www.cep-chile.cl

Ferretti, Irani, López y Miranda (2018). El feminismo como posibilidad de ampliación democrática. Cuadernos de Coyuntura – Fundación Nodo XXI, 21: 21-32.

Luna, Juan Pablo (2017). En vez del optimismo. Crisis de representación política en el Chile actual. Santiago: CIPER-Catalonia.

Mair, Peter (2013). Ruling the Void: The Hollowing of Western Democracy. Londres: Verso.

Meléndez, Carlos, y Rovira, Cristóbal (2018). Rethinking Partisanship. WZB Democracy Blog. Disponible en: <https://democracy.blog.wzb.eu/2018/08/29/rethinking-partisanship/>

Miranda, Camila (2019). Un Chile que cruje: el tsunami feminista. Aproximaciones al “8M” chileno. Cuadernos de Coyuntura – Fundación Nodo XXI, 23: 4-13.

Núcleo de Sociología Contingente (2019). Encuesta Zona Cero. Disponible en www.nudesoc.cl

Polanyi, Karl (1935). “La esencia del fascismo”. En Polanyi, Karl (2014). Los límites del mercado. Reflexiones sobre economía, antropología y democracia. Madrid: Capitán Swing.

Francisco Figueroa C., es militante de Partido Comunes. Periodista y Magíster en Sociología Cultural. Actualmente trabajando en derechos humanos y de la niñez







El colectivo que produce revista ROSA agradece las fotografías presentadas en este número, cedidas gentilmente por **César Sanhueza Silva**. César es licenciado y profesor de Historia, y fotógrafo autodidacta. Ha combinado la disciplina histórica con el trabajo audiovisual en diversos ámbitos y desde el pasado 18 de octubre se volcó a las calles para realizar un registro amplio y detallado de la Revuelta con el objetivo de iniciar un archivo documental de la misma y promover un análisis posterior de los sujetos que se incorporaron espontáneamente a través de múltiples canales de expresión.

instagram: **@misterdubman**



#2 / otoño 2020



#02 | otoño 2020 | LA REVUELTA

| José Miguel Ahumada | Daniela López,
Francisca Millán & Ana Paula Viñales |
Camilo Santibáñez | Cristián
Matamoros | Felipe Ramírez | Karen
Glavic | Nicolás Acevedo | Andrés
Fielbaum & Valentina Saavedra |
Francisco Figueroa |